



UNIVERSIDAD DE CHILE.
INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
MAGISTER EN ESTUDIOS INTERNACIONALES

LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PRESIDENCIAS FALLIDAS EN
AMÉRICA LATINA
LOS CASOS DE DILMA ROUSSEFF Y OTTO PÉREZ MOLINA

Facilitators of presidential failures in Latin America
The cases of Dilma Rousseff and Otto Pérez Molina

TESIS PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN ESTUDIOS
INTERNACIONALES

Liza Fuenzalida Caris

Profesor guía: Christopher Martínez Nourdin

Santiago de Chile, 2018

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN.....	1
AGRADECIMIENTOS	2
CAPÍTULO I:	3
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO II:	12
REVISIÓN DE LA LITERATURA Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	12
REVISIÓN DE LA LITERATURA.....	12
¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN UNA SALIDA PRESIDENCIAL?	12
Factores institucionales y políticos	12
Factores económicos	16
Factores sociales.....	17
CONTRIBUCIONES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO	19
CAPÍTULO III:.....	21
METODOLOGÍA APLICADA	21
¿POR QUÉ SE ESCOGE EL ANÁLISIS CUALITATIVO COMPARADO?	21
CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	24
1.- Factores institucionales y políticos:.....	25
2.- Factores económicos:.....	27
3.- Factores sociales:	27
SELECCIÓN DE CASOS	28
¿POR QUÉ ESTUDIAR LOS CASOS DE BRASIL Y GUATEMALA?.....	28
CAPÍTULO IV:.....	34
EL CASO DE BRASIL.....	34
CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.....	35
Debilidad de los partidos políticos en Brasil	35
Una economía en alza	40
Escándalos y corrupción política	42
LA LLEGADA DE DILMA ROUSSEFF A LA PRESIDENCIA DE BRASIL (ENERO 2011 - AGOSTO 2016).....	43
PRIMER GOBIERNO (ENERO 2011-DICIEMBRE 2014)	46
Apoyo legislativo y primeros escándalos en la coalición de gobierno	46
Signos de una economía inestable.....	48
Primeras manifestaciones callejeras en contra de la presidenta.....	51

Balance al cierre de la primera administración	53
SEGUNDO GOBIERNO (2015-2016)	54
Cambios en la coalición y recomposición partidaria en el Congreso	56
El PMDB y la inestabilidad del gobierno de Dilma.....	57
Lava Jato, Lula y el comienzo del fin	59
Masivas protestas callejeras y una economía sin signos de mejora	62
El impeachment.....	65
CONSIDERACIONES FINALES	67
CAPÍTULO V:	73
EL CASO DE GUATEMALA.....	73
CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.....	73
La primera presidencia fallida de la vuelta a la democracia	74
Una sociedad pos conflicto: el legado del período autoritario	75
El sistema de partidos guatemalteco	77
Guatemala, una democracia no consolidada	79
El nacimiento de la CICIG.....	81
OTTO PÉREZ MOLINA: EL PERFIL DE UN MILITAR OUTSIDER DE LA POLÍTICA	82
GOBIERNO DE OTTO PÉREZ MOLINA (ENERO 2012- SEPTIEMBRE 2015).....	85
Primeros meses en el gobierno: Tolerancia cero en contra de la corrupción y la violencia social.....	85
Promesas de mayor crecimiento económico y mejoras sociales.....	86
Inicios de protestas en contra del presidente.....	87
¿Buen primer año de gobierno?	87
La creciente importancia de la CICIG	88
Primeros roces entre el gobierno y la CICIG	89
“Tira y afloja” entre el presidente y la CICIG	90
La renuncia de Baldetti y nuevos escándalos que golpean al gobierno	91
Nuevas movilizaciones callejeras	94
Conflictos inter-institucionales: La Corte de Constitucionalidad, La Corte Suprema y la Comisión Pesquisadora.....	96
Intensificación de las movilizaciones, antejuicio y la renuncia del presidente.....	98
CONSIDERACIONES FINALES	100
CAPÍTULO VI.....	106
CONCLUSIÓN.....	106
BIBLIOGRAFÍA	115

RESUMEN

Esta investigación se centra en estudiar los diversos factores que la literatura ha planteado como relevantes para la ocurrencia de presidencias fallidas en América Latina, y ver cómo se comportan éstos y los mecanismos causales que se desarrollan, en los contextos de Brasil con los mandatos de Dilma Rousseff y en Guatemala con Otto Pérez Molina. Además, se busca evaluar qué otras variables fueron posibles de observar, y que no están mayormente trabajadas en estudios previos. Teniendo todos estos elementos en consideración, lo que se realiza una vez que se logran analizar cada una de las presidencias y los contextos mencionados, es una comparación de los factores presentes en ambos mandatos y evaluar en conjunto cuáles tuvieron mayor incidencia en las presidencias en cuestión.

Presidencias Fallidas en América Latina - Gobiernos de Dilma Rousseff - Gobierno de Otto Pérez Molina - Factores que inciden en las presidencias fallidas

ABSTRACT

This research focuses on studying the various factors that the literature has posed as relevant to the occurrence of failed presidencies in Latin America, and see how they behave and the causal mechanisms that develop, in the Brazilian contexts with the mandates of Dilma Rousseff and in Guatemala with Otto Pérez Molina. In addition, we seek to evaluate which other variables were possible to observe, and which are not mainly worked on in previous studies. Taking all these elements into consideration, what is done once you can analyze each of the presidencies and the contexts mentioned, is a comparison of the factors present in both mandates and evaluate together which had the greatest impact on the presidencies in question.

Presidential failures in Latin America – Governments of Dilma Rousseff - Government of Otto Pérez Molina - Facilitators of presidential failures

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, por todo lo que me han entregado y por como siguen luchando, por otros y por ustedes mismos. Son lo máximo y el mejor ejemplo.

A mi familia y a mis suegros por tenerlos y porque todos los que están y los que vengan sigan creciendo en el amor y en esta contención tan particular. Un especial saludo a mi abuela, porque a sus 91 años, nos sigue acompañando, preocupándose y queriéndonos.

A mis amigos, por su cariño desinteresado, por enseñarme a ser mejor, por quererme cada uno a su manera, por cuidarme, preocuparse, entenderme, y estar siempre.

A mis compañeros y amigos del Magister, por todo lo que aprendí de y con ustedes.

A los profesores, por todo lo aprendido y por la motivación que generaron en mí de seguir por este camino.

A mi pareja Carlos, por tanto, pero principalmente, por encontrar contigo el sentido a todo.

Al profesor guía de esta tesis, Christopher Martínez, por confiar en mí y en mi trabajo, por todas sus observaciones y correcciones oportunas, por tener siempre una excelente disposición y palabra de aliento y por todo lo aprendido.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

Desde que América Latina logró dejar atrás su pasado autoritario de las décadas del 60, 70 y 80, algunos países de la región comenzaron a presentar un fenómeno, que más que desaparecer, pareciera que está tomando fuerza y expandiéndose por el continente. ¿Cuál es ese fenómeno? Tal como lo plantea Pérez-Liñan (2008) existe una variedad de conceptos para definirlo. Ollier (2008) lo nombra como inestabilidad presidencial, Hochstetler habla de caídas presidenciales, Edwards (2015) y Martínez (2017) se refieren a presidencias fallida, Pérez-Liñan (2007) lo define como remoción del presidente, Kim y Bahry (2008), Negretto (2006) y Valenzuela (2008) como presidencias interrumpidas, sin embargo, todos estos términos hacen alusión a una misma idea, la inestabilidad que desde los años 80 han presentado un número significativo de democracias en la región, llegando algunas a concluir en presidencias fallidas.

¿Qué se entiende por presidencias fallidas? Para efectos de esta investigación usaremos la definición que entrega Pérez-Liñan y que se resume en: situaciones o eventos que presionan u obligan a los presidentes electos a concluir su mandato antes de tiempo, por motivos de naturaleza política, no por asuntos privados, como una enfermedad. (Pérez-Liñán, 2008, pág. 107). A esto se agrega una segunda característica, el término apresurado de una presidencia genera solo un momento o periodo de inestabilidad, pero no un cambio de régimen, lo que permite a los países mantener sus democracias. (Martínez C. A., 2017b, pág. 93).

Los eventos asociados al fenómeno en cuestión se han vuelto cada vez más numerosos. Desde la década de los 80 al 2018 es posible observar 18 presidencias fallidas a lo largo de toda América Latina, como es posible observar en el siguiente cuadro

Presidencias fallidas en América Latina

País	Presidente	Año en que deja el poder
Bolivia	Hernán Siles Suazo	1985
Argentina	Raúl Alfonsín	1989
Brasil	Fernando Collor de Mello	1992
Venezuela	Carlos Andrés Pérez	1993
Guatemala	Jorge Serrano Elías	1993
República Dominicana	Joaquín Balaguer	1996
Ecuador	Abdalá Bucaram	1997
Paraguay	Raúl Cubas	1999
Perú	Alberto Fujimori	2000
Ecuador	Jamil Mahuad	2000
Argentina	Fernando de la Rúa	2001
Bolivia	Gonzalo Sánchez de Lozada	2003
Ecuador	Lucio Gutiérrez	2005
Honduras	Manuel Zelaya	2009
Paraguay	Fernando Lugo	2012
Guatemala	Otto Pérez Molina	2015
Brasil	Dilma Rousseff	2016
Perú	Pedro Pablo Kuczynski	2018

Fuente: Elaboración propia en base a los siguientes estudios: Mustapic (2006); Infobae (2012); Valenzuela (2008).

Si bien, no en todos los países de la región se ha experimentado el fenómeno, ya forma parte de la historia política de 11 países latinoamericanos, repitiéndose por lo menos una vez en cuatro países (Argentina, Brasil, Guatemala y Paraguay) y por tercera vez en 2 (Perú y Ecuador). Lógicamente no todas las presidencias fallidas se han desarrollado de la misma manera ni han presentado los mismos factores desencadenantes, es por esto y para presentar un mayor detalle de las mismas, que los casos se han agrupado en función de: renuncias presidenciales debido a un contexto desfavorable (Congreso quita apoyo al ejecutivo, protestas, acusaciones por corrupción, crisis económica, y/o la combinación de todas o algunas de ellas) o la destitución por parte del Congreso.

Se puede apreciar que nueve presidencias interrumpidas producto de la renuncia del Ejecutivo antes de terminar su periodo constitucionalmente establecido, aunque 3 de ellas presentan una característica más, renuncian antes de comenzar un juicio político en su contra o en el caso reciente de Pedro Pablo Kuczynski, deja el cargo un día antes de que el Congreso pida su vacancia por “incapacidad moral”. Argentina con Hernán Siles Suazo (1985), Raúl Alfonsín (1989) y Fernando de la Rúa (2001), Guatemala con Jorge Serrano Elías (1993), República Dominicana con Joaquín Balaguer (1996) y Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) son ejemplos de renuncias anticipadas del ejecutivo y los casos de Brasil con Fernando Collor de Mello (1992), Paraguay con Raúl Cubas (1999) y Perú con Pedro Pablo Kuczynski (2018) son ejemplos de renuncias presidenciales antes o durante un juicio político o el pedido de vacancia por parte del Congreso.

Por otra parte, se encuentran aquellos presidentes destituidos por el Congreso, lo que en algunos casos se ha catalogado como “impeachment”. En este grupo se encuentran 9 ejemplos; Venezuela con Carlos Andrés Pérez (1993), Ecuador con Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005), Perú con Alberto Fujimori (2000) que, al no ser aceptada su renuncia, el Congreso lo destituye, Honduras con Manuel Zelaya

(2009), Paraguay con Fernando Lugo (2012), Guatemala con Otto Pérez Molina (2015) y Brasil con Dilma Rousseff (2016).

En esta investigación, se estudiarán y analizarán dos de los casos mencionados, el de Otto Pérez Molina en Guatemala y el de Dilma Rousseff en Brasil, siendo ambos, ejemplos de impeachment, donde en el primer caso, es desaforado por la Cámara, impulsándolo a su renuncia al día siguiente, y en el segundo, se produce una destitución directa por parte del Congreso.

La **pregunta general** que guía esta investigación es:

¿Qué factores influyen en la ocurrencia de presidencias fallidas en América Latina, analizando los gobiernos de Dilma Rousseff y el de Otto Pérez Molina?

Las **preguntas secundarias** son las siguientes:

- ¿Qué factores, de acuerdo a la literatura, son relevantes para que ocurra una presidencia fallida?
- ¿Cuáles son los hechos políticos, sociales y económicos que envuelven las presidencias de Dilma Rousseff y Otto Pérez Molina?
- ¿De qué manera los principales factores reconocidos en la literatura, influyen en las salidas anticipadas de Otto Pérez Molina y Dilma Rousseff?
- ¿Qué factores son más y menos relevantes para la ocurrencia de las presidencias fallidas de los presidentes en cuestión?
- ¿Cuáles son los mecanismos causales que se observan y cómo influyen en ambas presidencias fallidas?

Y las **Hipótesis** que se plantean son las siguientes:

- 1) Los escándalos políticos por sí solos no son suficientemente importantes para forzar la salida de un presidente. Sin embargo, es posible que estos funcionen indirectamente afectando el apoyo entregado al presidente, tanto desde el Congreso, como de la ciudadanía.
- 2) Las movilizaciones sociales, especialmente aquellas masivas y permanentes, serían más importantes que los factores institucionales a la hora de explicar por qué un presidente es obligado a salir del poder anticipadamente.

Por tanto, el **objetivo central** de este estudio es:

Explicar las principales razones de por qué los presidentes a analizar no son capaces de completar su periodo presidencial.

Objetivos específicos:

- Reconocer y explicar los principales factores de acuerdo a lo planteado en la literatura existente, de las presidencias fallidas en Latinoamérica.
- Analizar los hechos políticos, económicos y sociales ocurridos durante los gobiernos de Otto Pérez Molina y Dilma Rousseff, para reconocer la presencia o ausencia de los factores, que, de acuerdo a la literatura, inciden en una presidencia fallida.
- Evaluar qué factores son más y menos importantes para la salida anticipada de los presidentes en cuestión.

- Examinar de manera detallada los mecanismos causales presentes en ambos casos, para poder clarificar cómo ocurren las presidencias fallidas.

Para poder llevar a cabo los objetivos planteados, resulta importante identificar los principales factores reconocidos en la literatura, los cuales se decide agrupar de acuerdo a su naturaleza en: factores institucionales y políticos, económicos y movilizaciones sociales (Martínez, 2017).

Entre los factores institucionales y políticos, se encuentra el **apoyo legislativo al presidente**, que se mide en relación al rol que puede jugar el partido político del mandatario, su coalición o incluso la oposición política en momentos de crisis, lo que está condicionado por factores de tipo institucional, expuestos más adelante (Negretto, 2006; Hochstetler K., 2008; Ballesteros, 1999; Kim & Bahry, 2008; Álvarez & Marsteintredet, 2010; Hochstetler K., 2008). Otro factor, son los **escándalos políticos**, experimentados por el Ejecutivo o por personas cercanas a él (corrupción, falta de probidad, entre otros) (Hochstetler K., 2008; Kim & Bahry, 2008; Hochstetler & Edwards, 2009; Edwards, 2015).

Dentro de los factores económicos, las **crisis económicas**, principalmente recesiones e hiperinflación, las medidas que un Presidente pueda tomar para salir de ella, y los malos resultados que se pueden generar de dichas decisiones, pueden terminar en una presidencia fallida. (Llanos & Marsteintredet, 2010; Hochstetler & Edwards, 2009; Edwards, 2015). Además, la **implantación de políticas neoliberales** se levanta como otro factor a considerar (Wise & Roett, 2003).

El último factor importante es el **rol de las movilizaciones callejeras** en la inestabilidad presidencial. Varios son los elementos que deben poseer las manifestaciones para que se conviertan en un factor relevante para una presidencia fallida, todos ellos serán

expuestos en un siguiente capítulo (Edwards, 2015; Kim & Bahry, 2008; Hochstetler, 2008; Hochstetler & Edwards, 2009; Valenzuela, 2008).

En esta investigación, se toma para el análisis de ambos casos de presidencias fallidas, todos los factores recién mencionados, pero también la discusión que se ha establecido en torno al rol de la movilizaciones sociales, evaluando su papel en los casos a estudiar. Además, se incorpora el análisis de factores institucionales que han sido recientemente establecidos como una variable de posible relevancia, el **mantenimiento de la estabilidad democrática** (Pérez-Liñán, 2008; Hochstetler, 2008; Mustapic, 2005; Valenzuela, 1996; Mainwaring & Liñán, 2005) y el “**stock democrático**” presente en un país (Martínez C. , 2017a). Ambos factores serán evaluados en los casos de estudio para poder determinar su papel e importancia en dichos contextos.

Con respecto a la metodología a utilizar, ésta se basa en un análisis cualitativo comparado, utilizando dos casos de presidencias interrumpidas en Latinoamérica. Dado que el objetivo es obtener información detallada sobre cómo operan los mecanismos causales que llevan a las caídas presidenciales de ambos mandatarios, la investigación es de carácter cualitativa, enfoque metodológico que posee varias ventajas en este respecto. Entre ellas, permite trabajar con la heterogeneidad de características que puedan presentar los casos, entregando un alto conocimiento de estos. Esto potenciará la posibilidad de indagar con mayor profundidad en el tema y establecer otras nuevas relaciones, generando nuevas hipótesis. Dicha característica, también permite detectar relaciones causales importantes, cómo X está conectada con Y, y toda la cadena de variables intervinientes que conectan causa y efecto, elementos, que por lo que ya se ha planteado, son sumamente relevante para esta investigación (Gerring, 2015). De esta manera, se podrá contribuir teóricamente al debate que hoy existe en torno a cuáles son las causas que priman en una presidencia fallida.

Para efectos de la comparación que se pretende realizar, se seleccionaron los dos casos de estudio, porque presentan características que permiten llevar a buen puerto el análisis, a través del Diseño de Sistema de Máxima Diferencia (DSMD) o el método de la concordancia, definido por Mill (Landman, 2011, pág. 54). Esto, en palabras simples, obliga a seleccionar los casos a partir de su similitud en la variable dependiente y en un par de factores claves, pero que, a su vez, presenten diferencias importantes en otros aspectos. En el caso de este trabajo, los ejemplos a estudiar presentan semejanzas en la variable de interés, ambos son casos de presidencias fallidas producto de un juicio político, además, comparten similitudes con respecto a la presencia de escándalos políticos y movilizaciones sociales, pero difieren en otras diversas características, como: el nivel de democracia existente en ambos países, los casos previos de salidas anticipadas del ejecutivo, que para el caso de Guatemala, se observa un autogolpe fallido, y para Brasil, un primer caso de impeachment, el rol preponderante durante la crisis y el desenlace, de un organismo internacional como la CICIG, las características que presenta el sistema de partidos políticos, el perfil de ambos mandatarios, entre otros. Esto hace que sean casos claves para poder comprobar las hipótesis establecidas y los objetivos de investigación.

Para responder la pregunta principal, se recopila información desde fuentes primarias y secundarias. La recolección de datos se realiza a través del análisis bibliográfico (libros y artículos científicos), documentos y estadísticas oficiales, además, de diarios de circulación nacional e internacional.

La estructura de la tesis está ordenada de la siguiente manera: en el primer capítulo se presentan los diversos casos de presidencias fallidas en América Latina, y los variados factores que los autores han levantado sobre las causas que generan dicho fenómeno. Además, se presenta la pregunta de investigación, objetivos e hipótesis de trabajo y los dos casos de presidencias fallidas a analizar, la de Dilma Rousseff en Brasil y Otto Pérez Molina en Guatemala. Por último, se encuentra una breve presentación de la metodología utilizada para dicha investigación.

En un segundo capítulo se realiza una exposición más acabada de los diferentes estudios que existen en torno a los factores que inciden en mayor y menor medida en una presidencia fallida, reconociendo cuáles son los principales en el ámbito institucional y político, económicos y sociales. Además, se plantearán las contribuciones y limitaciones que presenta esta investigación.

Un tercer capítulo se refiere a la metodología utilizada, el tipo de estudio, y las variables independientes que se toman como guía para la investigación. También se explica por qué se ha decidido analizar y comparar los dos casos de presidencias fallidas ya mencionados.

En un cuarto capítulo, se realiza una descripción del contexto país, una presentación de los mandatarios en cuestión, y se analizan ambos casos reconociendo los principales eventos políticos, institucionales, económicos y sociales que envolvieron a sus respectivas presidencias. Por último, se establecen algunas consideraciones finales para cada caso, con el objetivo de resaltar los principales eventos que llevaron a la salida anticipada de los presidentes en cuestión.

En la conclusión, último apartado de este trabajo, se busca responder la interrogante y comprobar la hipótesis de trabajo, para esto, se realiza una comparación de los principales eventos que llevaron a las presidencias fallidas de Rousseff y Pérez Molina, y se establecen los más relevantes para cada caso, y los nuevos que fueron posibles de reconocer.

CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Revisión de la literatura

¿Qué factores influyen en una salida presidencial?

La temática que se presenta como eje de la investigación, se relaciona con los factores o mecanismos causales que influyen y/o generan presidencias fallidas. Con respecto a esto se ha escrito bastante, pudiendo reconocer factores de diversa naturaleza. Para una exposición más ordenada, se utilizará la categorización ya planteada en otros trabajos (Martínez 2017), donde los factores se agruparán de acuerdo a su naturaleza, reconociendo causas de carácter institucional y políticas, económicas y sociales.

Factores institucionales y políticos

Una idea fuerza que ha orientado los trabajos existentes se vincula con el **rol jugado por el Congreso, a través del apoyo entregado al ejecutivo** en momentos de crisis, elemento que tendría una relevancia vital para las supervivencias o salidas presidenciales (Negretto, 2006; Pérez-Liñán, 2007, 2014; Kim & Bahry, 2008; Marsteintredet, 2009; Llanos & Marsteintredet, 2010; Martínez C. A., 2017a, 2017b). Dicho factor estaría condicionado por otros elementos de la misma naturaleza, como, por ejemplo, el **bajo porcentaje de escaños conseguido por el partido o coalición del presidente en el Congreso** (Pérez-Liñán 2007; Llanos y Marsteintredet 2010; Mustapic 2010), lo que se traduciría en la existencia de una minoría en el parlamento, y, por lo tanto, en una posible baja en el apoyo entregado al presidente, situación que aumentaría el riesgo de una salida anticipada (Kim y Bahry, 2008; Llanos y Marsteintredet, 2010; Marsteintredet L. et al., 2013; Mustapic A. M., 2010; Negretto, 2006; Hochstetler K., 2008; Ballesteros, 1999; Álvarez y Marsteintredet, 2010). Sin embargo, esto puede ser revertido dependiendo de los acuerdos que pueda llegar a establecer el partido político del mandatario o la coalición que lo apoya con el resto de los legisladores (Negretto, 2006), aunque si la **coalición gobernante se compone de un alto número de partidos políticos,**

dificultaría los consensos entre ellos y podría ser contraproducente para el presidente (V.M.Herman, 1971; Warwick, 1994; Somer-Topcu y Williams, 2008)

Por otra parte, algunos autores plantean (Pérez-Liñan, 2008; Martínez, 2017b) que cuando **las fuerzas políticas predominantes en el Congreso corresponden al partido o coalición política del Presidente**, pierden relevancia los escándalos en los que éste pueda estar involucrado o las protestas sociales en su contra, ya que las cámaras se alinearán en favor del Ejecutivo, generando lo que Pérez- Liñan (2008, 2014) llama “escudo legislativo” (Pérez-Liñán, 2008, pág. 123). La fortaleza o eficacia del “escudo legislativo”, no obstante, se encontraría influenciada por otra variable a considerar. De acuerdo a Ballesteros (1999), **el multipartidismo que ha imperado en los sistemas presidenciales de Latinoamérica produce más conflictos entre Ejecutivo y Legislativo**, al intentar conciliar una diversidad de opiniones surgidas de ambos poderes, pero principalmente, del Congreso (Ballesteros, 1999; Mainwaring , 1993). Sumado a esto, si el multipartidismo presente está sobrecargado de partidos, sería más difícil el entendimiento entre ellos, lo que llevaría a una inestabilidad y **fragmentación del sistema partidista**, aumentando significativamente el riesgo de una salida presidencial (Kim & Bahry, 2008; Álvarez & Marsteintredet, 2010; Hochstetler K., 2008) (Valenzuela, 2004).

Autores como Cox y Morgenstern (2002) han reconocido que otro factor importante dentro de una presidencia inestable, son los **desequilibrios de poder entre ejecutivo y legislativo**, ya que estos incidirían, principalmente, en la relación que se establece desde ahí, entre ambos poderes. Por ejemplo, si existe un ejecutivo “poderoso”, este no tendría mayores incentivos para negociar o llegar a acuerdos con el legislativo, por lo que los conflictos tenderían a resolverse de forma menos amistosa (Cox y Morgenstern, 2002), aumentando la posibilidades de una salida anticipada del presidente (Kim & Bahry, 2008). Relacionado con el mismo factor, uno de los elementos que podría hacer a un presidente “poderoso”, sería el porcentaje de votos alcanzado en una elección popular. Sin embargo, si el porcentaje que logra en una primera vuelta o en la única que se realice, es

bajo, el apoyo hacia el mandatario sería débil, lo que aumentaría las posibilidades de que se generara una presidencia fallida (Kim & Bahry, 2008).

Otro factor de carácter político, se vincula con **los escándalos** en los que puede verse involucrado el presidente; corrupción, sobornos, tráfico de influencias, etc. De acuerdo a diversos autores (Hochstetler K., 2008; Kim & Bahry, 2008; Hochstetler & Edwards, 2009; Edwards, 2015; Martínez, 2017a; Marsteintredet, 2009; Llanos & Marsteintredet, 2010) si un Presidente o alguien muy cercano a él se ve envuelto en alguna situación controversial, existen más posibilidades de que no logre terminar su mandato. Sin embargo, Hochstetler (2008) enfatiza en la necesidad de que el mandatario esté directamente involucrado y que exista buena evidencia al respecto para que este factor se vuelva relevante. A esto Pérez - Liñan (2007) agrega que la cobertura mediática también sería un elemento a considerar, ya que gracias a ésta saldría el o los casos a la luz pública, lo que podría influir, tanto en el apoyo hacia el presidente del legislativo, como el entregado por la ciudadanía.

Si bien, la mayoría de los autores concuerdan en que los escándalos políticos son un elemento a considerar, todavía existe el debate si son un factor de riesgo para una salida presidencial. Según algunos estudios (Hochstetler, 2008; Hochstetler & Edwards, 2009), enfocados específicamente a América del Sur, corroboran la relevancia de este factor para la ocurrencia de una presidencia fallida, sin embargo, Kim y Bahry (2008) y Marsteintredet (2009) no reconocen la incidencia directa de este factor para la generación de aquel fenómeno, ya que pueden ser desafiados, pero no necesariamente obligados a dejar el poder.

Como últimos factores de naturaleza político-institucional, se encuentran los que todavía están poco trabajados en la literatura, pero que han formado parte de algunos estudios teóricos y empíricos recientes (Martínez C. A., 2017a, 2017b). Algunos de ellos se relacionan con el concepto de democracia. Al parecer hoy ningún país duda de la

importancia de lograr mantener y evitar el derrumbe de la democracia, que pueda llevarlos a experimentar nuevamente gobiernos autoritarios como los de las décadas de los 60, 70 y 80, la democracia como sistema de gobierno ya no es cuestionada por ninguna vereda política, aunque esto no signifique de forma absoluta, el éxito de las experiencias democráticas o la extinción de la inestabilidad en ellas. (Valenzuela, 1996, 2008; Pérez-Liñán, 2008; Hochstetler, 2008; Mustapic, 2005; Mainwaring & Pérez-Liñán, 2005; Martínez, 2017a, 2017b). Por lo tanto, cuando se está frente a una crisis presidencial, se entiende que, para volver a la estabilidad, se recurrirá a mecanismos democráticos, “la inestabilidad presidencial en América Latina ya casi no supone la inestabilidad del régimen”. (Pérez-Liñán, 2008, p. 108). De esta manera, la búsqueda por **mantener la democracia** puede convertirse en un factor más que explique posibles caídas o permanencias en el poder. A esta estructura democrática que se buscaría mantener, también se incluye otro elemento, y que tiene relación con lo interno de la democracia, es decir, con cómo se generan mecanismos y formas de actuar que perpetúan este sistema.

De acuerdo al trabajo realizado por Martínez (2017a), quien basa sus conclusiones en el análisis de 65 casos de presidencias en América del Sur desde 1979 al 2012, es posible reconocer la siguiente premisa: “el **stock democrático**”, tomando una perspectiva histórica de la democracia, afecta significativamente la supervivencia presidencial, un hallazgo que no se ha observado en estudios previos”. (Martínez C. , 2017a). El concepto de “stock democrático”, surge de las definiciones planteadas por Gerring et al, (2005) y que tiene relación con la acumulación de experiencia democrática, y cómo su duración en el tiempo, permite comprender su grado de institucionalización en un país. (Gerring, et. al, 2005, pág. 333) Todo esto en conjunto, permitirá entender o proyectar el comportamiento de los distintos actores políticos; congreso, presidentes, tribunales, electorado, partidos políticos, militares, sindicatos, asociaciones empresariales, etc., dentro del sistema democrático. Como lo plantea Martínez en su trabajo (2017), mientras más grande es el stock democrático de un país, mayor es la institucionalización de todos los actores ya mencionados, lo que se reflejará en su comportamiento a atenerse

a las reglas del juego en los márgenes que establece la democracia, por lo tanto, serán más propensos a negociar, hacer ajustes, y adecuarse a los márgenes establecidos, lo que servirá para continuar desarrollando, preservando y reforzando patrones democráticos de comportamiento y en definitiva el sistema democrático existente. (Martínez C. , 2017a, pág. 5).

Otro de los factores poco desarrollados en la literatura, es el rol que pueden llegar a jugar los **organismos internacionales** en una crisis presidencial. Como posibles pistas para el análisis, se pueden encontrar en el trabajo de Martínez (2017b) sobre los gobiernos argentinos, donde incorpora la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la crisis presidencial de Fernando de la Rúa. En resumidas cuentas, reconoce el papel que jugó dicha organización para la generación de mayor malestar hacia el gobierno, al, primero, proponer medidas para salir de la crisis económica, relacionadas principalmente, con una significativa reducción del gasto social, pero luego, las impone presionando al ejecutivo a implantarlas, lo que hizo aumentar el descontento tanto del legislativo, como de la ciudadanía, potenciando su caída (Martínez C. A., 2017, págs. 108-109). De acuerdo a declaraciones entregadas por el propio ex mandatario, reconoce que fueron dos los actores responsables de su renuncia: el peronismo y el FMI. Con respecto a este último declara: “la deuda externa (...) pesaba sobre el país y el FMI [decidió] no ayudarnos, fue tan simple como eso. Hay veces en que los organismos internacionales ayudan a los países y hay veces que los hunden” (Cué y Rivas, 2016).

Factores económicos

Para algunos autores **las crisis económicas** que experimenta un país, principalmente, a través de **recesiones o un crecimiento económico lento y prolongado**, pueden influir negativamente en la permanencia del Ejecutivo (Álvarez y Marsteintredet 2010; Hochstetler 2008; Kim y Bahry 2008; Llanos y Marsteintredet, 2010; Negretto 2006; Hochstetler & Edwards, 2009; Edwards, 2015). Por su parte, cuando un país

experimenta inflación, los análisis se dividen, en aquellos, que consideran este factor como un elemento relevante (Edwards, 2015), y otros, que no lo consideran significativo para una salida presidencial (Hochstetler y Edwards, 2009; Kim y Bahry, 2008; Llanos y Marsteintredet, 2010). A diferencia de lo anterior, cuando un país presenta un **alto desarrollo económico**, el presidente está menos propenso a enfrentar situaciones que presionen su salida (Hochstetler & Edwards, 2009)

Por otra parte, el **manejo deficiente que realice el ejecutivo** frente a problemas económicos, resulta ser una constante en varios casos de presidencias fallidas estudiadas (Llanos & Marsteintredet, 2010; Hochstetler & Edwards, 2009; Edwards, 2015). Por lo tanto, cuando un país, considera que su presidente ha iniciado políticas económicas equivocadas o es responsable de los problemas económicos que se experimentan, la salida presidencial resulta más probable (Martínez C. , 2017ae, págs. 42-43). Sumado a esto, si el ejecutivo busca resolver la crisis, **implantando políticas neoliberales** (Wise & Roett, 2003), que además sean de carácter impopular, pueden generar un mayor descontento manifestado a través de protestas sociales (Negretto, 2006, pág.87; Hochstetler, 2008), pero no desencadenarán necesariamente una presidencia fallida (Pérez-Liñán, 2007).

Factores sociales

El principal factor social definido en la literatura se relaciona con las **movilizaciones sociales** y su influencia en una salida anticipada del ejecutivo (Pérez-Liñán, 2008; Valenzuela, 2008; Hochstetler, 2008; Kim & Bahry, 2008; Marsteintredet, 2009; Edwards, 2015; Ollier, 2008; Hochstetler & Edwards, 2009; Llanos & Marsteintredet, 2010; Marsteintredet, 2014).

Se ha escrito bastante, asumiéndola a lo largo del tiempo, y con el desarrollo de todas estas investigaciones como una variable a considerar. Lo que hoy se preguntan los autores, es si dicho factor es suficiente para generar presidencias fallidas. Una premisa que se plantea con respecto a este tema, tiene relación con la magnitud de las

manifestaciones, para que éstas se conviertan en un factor influyente, deben ser numéricamente altas y visualmente agresivas, como lo plantea Hochstetler “la ciudadanía, evidentemente, no sólo es capaz sino reduce los mandatos de los presidentes; unos pocos presidentes han sobrevivido a movilizaciones grandes y violentas en su contra” (Hochstetler, 2008, pág. 68). Además de Hochstetler (2008), otros autores (Pérez-Liñán, 2007; Marsteintredet, 2014) evidencian la importancia de una relación colaborativa entre legislativo y manifestantes, si uno no actúa en concordancia con el otro, difícilmente lograrán el objetivo de remover al presidente, aunque Hochstetler (2008), enfatiza en que las movilizaciones por sí solas, lograrían derrocar al ejecutivo.

Por otra parte, Pérez Liñán (2008) abre una nueva arista al reconocer que no todos los presidentes que se enfrentan a protestas, terminan su mandato antes de tiempo. Ante dicho cuestionamiento, plantea lo siguiente: “cuando múltiples grupos sociales, [no exclusivamente los sectores que tradicionalmente se han movilizad: sindicatos y estudiantes, sino que se incorpora la clase media, campesinos, movimientos indígenas, entre otros y convergen en el espacio público para demandar la caída del gobierno, la posición del presidente suele tornarse insostenible”. (Pérez-Liñán, 2008, pág. 113). Sin embargo, si cuenta con apoyo entre las élites políticas o del poder legislativo, la influencia de las protestas sociales disminuye considerablemente. (Pérez-Liñan, 2008; Martínez, 2017a, 2017b).

Las movilizaciones, a su vez, se generarían según algunos autores (Corrales, 2002; Hochstetler, 2008; Negretto, 2006), por el descontento ciudadano producto de un desarrollo económico pobre o por las políticas neoliberales implantadas. Sin embargo, otros estudios (Edwards, 2015; Kim & Bahry, 2008; Marsteintredet, 2009) han encontrado motivaciones para las protestas callejeras mucho más potentes que una causa económica, si la demanda social se enfoca directamente hacia el titular, pidiendo explícitamente su salida del poder, aumentan las probabilidades de su caída. Por su parte, los escándalos políticos generarían un malestar, que movilizaría a la población a manifestarse en contra

de los corruptos, los políticos y el gobierno en general, generando inestabilidad hacia el mandatario (Corrales, 2002).

Como último punto, varios autores (Hochstetler, 2008; Hochstetler & Edwards, 2009; Valenzuela, 2008) plantean que, si en las protestas sociales se evidencian enfrentamientos, violencia o incluso muertes de manifestantes producto del actuar policial, aumentaría el efecto de las movilizaciones en las salidas presidenciales.

Contribuciones y limitaciones del estudio

Una contribución importante que busca entregar este trabajo, es tratar de aportar a mejorar el entendimiento entre variables durante una presidencia fallida, es decir, lograr comprender con mayor profundidad qué factores de los ya descritos en el apartado anterior, están presentes en el análisis de los gobiernos de Brasil y Guatemala. Además de reconocerlos, lograr entender su papel en ambas presidencias y qué otros factores son posibles de evidenciar en dichos contextos, ya que, a pesar de la pequeña muestra trabajada, lo que se pretende es abrir la posibilidad de que existan nuevos factores, no reconocidos en casos más antiguos y por lo mismo, ausentes en la literatura.

Sumado a esto, se busca aportar también con una evaluación del comportamiento de ciertos factores que han sido poco estudiados o que están recién apareciendo como un elemento a considerar, como es el caso del factor institucional definido como “stock democrático” y el rol de actores u organismos internacionales. Además de aportar con la evaluación de aquellos que han sido trabajados en extenso, pero sin llegar a consenso con respecto a su rol, como es el caso de las movilizaciones callejeras.

Los aportes descritos permitirán contribuir a una observación profunda de los mecanismos causales que operan en una presidencia fallida, y que si bien, no se pretende establecer como una ley o nueva teoría, si se busca abrir perspectiva, considerando que

los dos gobiernos escogidos para el análisis, son unos de los ejemplos de presidencias fallidas más actuales que existen y, por lo mismo, podrían evidenciar nuevas características, escasamente vistas en ejemplos anteriores.

Con respecto a las limitaciones que se reconocen de esta investigación, resulta importante decir, que existía la intención original de incorporar a las dos presidencias fallidas una estable, para poder comprender de forma más profunda el peso de las variables o factores de riesgo. Como lo plantea Hochstetler (2008), en los distintos estudios existe un error metodológico que se evidencia precisamente en la elección de los casos, “seleccionan casos porque los presidentes cayeron y carecen de casos correspondientes donde los presidentes permanezcan en sus cargos todo su mandato a pesar de esfuerzos por hacerlos caer” (Hochstetler, 2008, pág. 54). Sin embargo, se optó por responder al cómo operan los mecanismos causales o los factores ya reconocidos por la literatura, y para esto, lo que se necesitaba como muestra eran casos positivos, donde el evento a evaluar hubiese ocurrido tal como argumentan Beach and Pedersen (2013).

Finalmente, se asume que los casos a analizar son una muestra pequeña del fenómeno en cuestión, por lo tanto, las conclusiones que se logren plantear en relación al comportamiento de los factores causantes de presidencias fallidas, son solo un indicador y no una búsqueda de nuevas teorías al respecto, simplemente, se busca revisar y remover lo que a lo largo de los años se ha dado por sentado. Por eso, es que resulta interesante llevar a revisión los factores definidos por la literatura como principales, con estudios de casos actuales.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA APLICADA

Para dejar clara la metodología utilizada en esta investigación, resulta necesario volver a mencionar la pregunta guía de este trabajo, ¿qué factores influyen en la ocurrencia de presidencias fallidas en América Latina?, intentando reconocer qué tipo de causas tienen mayor importancia y cuáles son los mecanismos causales que operan durante ambas crisis presidenciales.

Para buscar responder dicha interrogante, las herramientas metodológicas a utilizar serán un análisis cualitativo comparado de dos presidencias interrumpidas, la de Otto Pérez Molina en Guatemala (enero de 2012- septiembre de 2015) y el segundo gobierno de Dilma Rousseff en Brasil (enero de 2015- agosto de 2016), realizando un análisis de estudio de casos para ambos gobiernos. Una vez examinados los principales eventos, se realizará una comparación que permita reconocer los factores similares y diferentes, con el objetivo, de determinar los principales factores detrás de la sobrevivencia presidencial.

Análisis cualitativo comparado

Como primer elemento a tener en consideración, el método comparado se utiliza cuando se tiene un “N pequeño”, es decir, cuando el número de casos a analizar es reducido, usualmente desde dos a menos de veinte (Sartori & Morlino, 1994). De acuerdo a los estudios de casos a abordar en este trabajo, resulta adecuado, porque solo se estudiarán dos presidencias fallidas, las que se han seleccionado a partir del Diseño de Sistemas de Máxima Diferencia (DSMD). Este sistema se basa en lo que Mill definió como el método de la concordancia, donde se comparan casos que, además de tener un resultado político a explicar y uno o dos factores claves en común, son diferentes en otros aspectos relevantes (Landman, 2011, pág. 98), característica que es posible reconocer en las dos presidencias fallidas escogidas para este trabajo.

Entre las ventajas que posee este tipo de diseño de investigación, es que evita forzar conceptos, ya que se logran manejar a profundidad los casos en cuestión, llegando a poseer un conocimiento especializado de aquellos. Esto permite reforzar “la validez de los conceptos que se buscan analizar, ya que son operacionalizados de forma que captan significados particulares y matizados con respecto al contexto de los países objeto de comparación” (Landman, 2011, pág. 97). Si bien, con este diseño se sacrifican, de cierta manera, las generalizaciones, se puede obtener una comprensión más profunda de los múltiples factores explicativos para el establecimiento de similitudes y diferencias entre los países estudiados, objetivos importantes de cumplir en esta investigación. Además, con este método se logra descifrar los elementos comunes en países diversos, adquiriendo las variables un mayor poder explicativo. En definitiva, “la forma de elección de los casos se basa en la variable dependiente, utiliza conceptos empíricos con un nivel de abstracción de rango medio y utiliza técnicas cualitativas macro para confirmar relaciones entre variables”, elementos sumamente importantes para la realización de este trabajo. (Ramos L. , 2012)

Por otra parte, se comprende el uso de un análisis cualitativo, cuando se reconocen sus aportes para una investigación. En este caso, su contribución radica en diversas características que lo definen, entre ellas se encuentran: no solo describir e identificar los factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, sino también explorarlos de manera profunda, lo que permitirá conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico (variables a analizar) y la realidad objeto de estudio (los dos casos de presidencias fallidas). (Martínez P. C., 2006, pág. 171). Esta idea se relaciona directamente con la decisión que tome un investigador frente a lo que desea realizar; “saber más acerca de menos o saber menos acerca de más” (Gerring, 2015, pág. 97), enmarcándose los análisis cualitativos en la primera característica. Esto, si se aplica a la investigación realizada, se reconoce en que, al tomar dos casos de presidencias fallidas, se busca un estudio en profundidad, más que un recorrido superficial por la diversidad de casos que existen del fenómeno. Cabe mencionar, que, si bien dicho elemento resulta ser

un aporte para esta investigación, es también una limitación de la misma, puesto que las muestras del estudio son reducidas, lo que se entiende como una falta de *representatividad* (Gerring, 2015, pág. 98). Sin embargo, al escoger las dos presidencias en cuestión, se está decidiendo por la comparación de ambos casos para llegar a inferir cómo se desenvuelven y comportan las variables o factores a analizar en contextos diferentes. Tal como lo plantea Sartori (1994) “las comparaciones que (...) interesan se llevan a cabo entre entidades que poseen atributos en parte compartidos (similares) y en parte no compartidos”. (Sartori, 1994, pág. 35).

Otra característica del análisis cualitativo y específicamente de los estudios de casos, herramienta utilizada en esta investigación, se vincula con las variables a trabajar y la relación causal que es posible reconocer entre ellas. Para el caso de los análisis cuantitativos, el foco de dichos estudios se ubica en los efectos más que en los mecanismos causales, es decir, mide a través de diferentes técnicas el “efecto” de X en Y. Además, al establecer relaciones entre X e Y, las variables que surgirán estarán basadas en *probabilidades*, suponiendo entonces una relación “probable” que genera un determinado efecto, esto hace que el terreno en este aspecto sea algo incierto. La diferencia con respecto al análisis cualitativo, es que este último busca estudiar la conexión entre X e Y, además de toda la interacción que se desarrolla entre ellas, “permite curiosear dentro de la caja de causalidad hacia las causas intermedias que yacen entre algunas causas y su presunto efecto” (Gerring, 2015, pág. 99), y es precisamente esto lo que se pretende realizar en esta investigación.

A través de lo anterior es posible inferir, la naturaleza exploratoria de un análisis cualitativo, y específicamente de los estudios de casos, y que se contraponen a la naturaleza confirmatoria de los trabajos cuantitativos. Un trabajo cualitativo generalmente llevará a la generación de nuevas hipótesis y teorías, mientras que los cuantitativos pondrán su foco en probar o confirmar dichas teorías. Sin embargo, es necesario tener presente que todos los estudios, sean de la naturaleza que sean, necesitan de etapas

exploratorias y confirmatorias, y si se mira desde ese prisma se entiende que no es perjudicial para ninguno de los dos análisis, poseer una u otra ventaja. (Gerring, 2015)

Continuando con los costos y beneficios del carácter exploratorio de los estudios de casos, para esta investigación resulta fundamental dicha característica, ya que al indagar en profundidad las presidencias mencionadas, es posible abrir la investigación hacia múltiples hipótesis, y si bien, este estudio plantea solo dos, enriquece aún más dicho trabajo el que surjan nuevas interrogantes del tema en cuestión. Esto es lo que por su esencia permiten los estudios de casos, ya que poseen una característica clave definida por Gerring (2015) como *soltura metodológica*, que permite generar nuevas conceptualizaciones, hipótesis o aristas de investigación. ¿A qué se refiere con dicho concepto? al carácter subjetivo y amplio margen probatorio que posee este tipo de estudios, debido a que la elección de lo que se investigue y cómo se indague en él, depende de las decisiones que tome el autor, lo que entrega un carácter bastante “personal” y flexible a la investigación, pero no menos válido. (Gerring, 2015)

Como acaba de ser expuesto, los análisis cualitativos, y específicamente los estudios de casos, poseen ventajas y limitaciones. Para efectos de esta investigación resulta sumamente útil dicha herramienta, principalmente, porque, como fue expuesto en el capítulo anterior, se pretende indagar en los tipos de factores y en los mecanismos causales que se generan en los dos casos de presidencias fallidas.

Conceptualización y operacionalización de variables

Para efectos de dicho trabajo resultan sumamente relevantes las variables de análisis que se han seleccionado para responder la pregunta de investigación. De acuerdo a lo planteado en el capítulo I, los factores a analizar en los dos casos de presidencias fallidas latinoamericanas, Rousseff y Pérez Molina, estarán compuestos por las principales causas reconocidas en la revisión bibliográfica. De acuerdo a lo anterior, se reconocerá la **variable dependiente** como *presidencias fallidas*, y que, de acuerdo, a la definición

entregada por Pérez-Liñan (2008) se entienden como: situaciones o eventos que presionan u obligan a los presidentes electos a concluir su mandato antes de tiempo, por motivos de naturaleza política, no por asuntos privados, como una enfermedad. (Pérez-Liñán, 2008, pág. 107). Por su parte, la **variable independiente** será bastante más extensa, ya que estará conformada, no por uno, sino por varios factores de distinta naturaleza, englobándolos en:

1.- Factores institucionales y políticos:

Se decide trabajar en conjunto, ya que están directamente relacionados, muchas veces uno no se explica sin el otro. Entre ellos se encuentran:

1.a) Apoyo legislativo al Presidente: se va a entender como el apoyo entregado al Ejecutivo en situaciones de crisis, ya sea cuando se destapan casos de corrupción o escándalos protagonizados por él o por sus cercanos (Ministros y otras autoridades políticas) o también cuando el descontento social por una u otra medida se manifiesta a través de protestas. El apoyo hacia el presidente podrá ser entregado o no, por parte de su propio partido político o los que componen su coalición, además de evaluar el rol que pueda jugar la oposición en un contexto complejo (Negretto, 2006; Pérez-Liñán, 2007, 2014; Kim & Bahry, 2008; Marsteintredet, 2009; Llanos & Marsteintredet, 2010; Martínez C. A., 2017a, 2017b).

1.b) Escándalos políticos: se relaciona con todas las situaciones irregulares en las que un presidente o personas cercanas a él, pueden verse involucrados, como, por ejemplo; corrupción, sobornos, tráfico de influencias, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros. Dichas situaciones aumentarían las posibilidades de una presidencia fallida (Hochstetler K., 2008; Kim & Bahry, 2008; Hochstetler & Edwards, 2009; Edwards, 2015; Martínez, 2017). En este punto, no existen planteamientos claros, con respecto a qué características deben presentar los escándalos, no hay referencia a la cantidad o tipo de delito cometido, sin embargo, lo que si se ha establecido como discusión en la literatura, se vincula con la relación directa entre escándalos políticos y presidencias

fallidas. Algunos autores plantean una relación causal, otros, en cambio, plantean una consecución de hechos, entre los que se encontrarían presentes los escándalos para la generación de caídas presidenciales.

1.c) Fragmentación en la coalición de gobierno: Resulta importante considerar como un factor relevante, el número de partidos políticos presentes en el gobierno, porque, si se está en presencia de un multipartidismo, el ejecutivo deberá saber negociar con todos ellos, y, probablemente, terminará incorporándolos a su gabinete ministerial. Además, el ejecutivo para poder gobernar deberá formar coaliciones, facilitando la toma de decisiones. Esta situación obliga a los presidentes a ceder ante otros partidos afines o incluso a armar acuerdos con la oposición, acuerdos que muchas veces son frágiles (Valenzuela, 1996, págs. 19-20). De esto dependerá la decisión que tome el Congreso para con el presidente cuando este último esté pasando por situaciones difíciles.

1.d) Tradición democrática y stock democrático: estos factores no son lo mismo, pero están bastante relacionados. Ambos se vinculan con una idea central, que será la que orientará el análisis; el grado de institucionalización que tiene el sistema democrático en un país. Esto se medirá a través de las acciones llevadas a cabo por los distintos actores políticos, las cuáles permitirán observar si se ciñen a los márgenes de la democracia, conservando y reforzando dicho sistema (Martínez C. A., 2017; Gerring, Bond, T.Barndt, & Moreno, 2005). Esta variable, presenta una característica que la diferencia de los otros factores descritos, y que tiene relación con su poca o nula presencia en los estudios sobre presidencias fallidas. Si bien, la idea de tradición o mantenimiento de la democracia, ha sido expuesta en estudios sobre el tema, no ha sido relevante a la hora de definir factores o causas del fenómeno. Por su parte, el “stock democrático” es un elemento nuevo, que ha comenzado a aparecer en estudios recientes, por lo tanto, tampoco presenta mayor desarrollo en la literatura.

2.- Factores económicos:

2.a) Crisis económica: la situación de crisis, se observará a partir de situaciones extremas, ya que son éstas, las que se han definido como factores de riesgo para las presidencias inestables. Se ha planteado que la presencia de recesión, hiperinflación o el alto desempleo en un país puede hacer tambalear a los gobiernos.

2.b) Implantación de políticas neoliberales: dicho factor se vincula con el anterior, ya que dependiendo de las decisiones que tome el presidente para intentar mejorar la situación crítica, éstas podrían afectar la estabilidad de su gobierno y su permanencia en el poder, sobre todo, si las reformas impulsadas se vinculan con medidas de carácter neoliberal y afectan a la población, como, por ejemplo, reducción significativa y en poco tiempo del gasto público, disminución de salarios de funcionarios del Estado, recorte o eliminación de subsidios, y/o privatización de empresas estatales, entre otros.

3.- Factores sociales:

3.a) Manifestaciones callejeras: Una de las razones que producen la movilización social, se vincula con el malestar que puede generar la crisis económica o la implantación de políticas neoliberales, pero se ha planteado también, que otras situaciones son más influyentes para el estallido de las protestas. Una de ellas, se relaciona con el mensaje de las manifestaciones, si este se enfoca directamente en pedir la salida o renuncia del presidente, aumentan las probabilidades de que esto ocurra. Es importante decir también que la permanencia y masividad de las movilizaciones sociales, generan mucho más ruido llegando a desestabilizar una presidencia. La idea que aquí se relaciona es que, si las movilizaciones consiguen una alta convocatoria inter-clase, podrían influir en las acciones que llevaría a cabo el legislativo en contra del presidente. Por otra parte, si la reacción de las autoridades es de una alta represión, esto generaría un incremento del malestar y un aumento tanto del número de protestas como de participantes. Finalmente, consignar si las huelgas generales, aquellas convocadas por agrupaciones “paraguas” de trabajadores

(como la CUT en Chile, CGT en Argentina, etc.), tienen un impacto significativo o no en la salida presidencial.

Selección de casos

¿Por qué estudiar los casos de Brasil y Guatemala?

Se escogieron los casos de Brasil y Guatemala, primero, porque son ejemplos positivos con respecto al fenómeno a analizar, las presidencias fallidas, lo que permite examinar de manera profunda los mecanismos causales que generan el fenómeno. Como lo plantean Pedersen y Beach (2013), los casos positivos, son ideales, puesto que resultan ser un aporte para identificar las conexiones entre variables, sobre todo, cuando esas relaciones solo han sido planteadas desde la teoría o a partir de estudios cuantitativos, faltando indagar en los estudios de casos.

Tal como se planteó anteriormente, y como se puede observar en la siguiente tabla, los casos escogidos presentan similitudes y diferencias que convierten a dichas presidencias en casos ideales para ser comparados y descubrir los mecanismos causales y los principales factores que tuvieron relevancia en ambas presidencias fallidas.

Presidencias fallidas de Brasil y Guatemala

Similitudes (Y)	Diferencias (Xs)	
	Brasil	Guatemala
<ul style="list-style-type: none"> • Presidentes destituidos mediante juicios políticos. • La presencia de diversos escándalos políticos. • Diversas manifestaciones en su contra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caso previo de presidencia fracasada: juicio político contra Fernando Collor de Mello. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caso previo de presidencia fracasada: Autogolpe de Jorge Serrano Elías (hecho bastante menos democrático que lo ocurrido en Brasil).
	<ul style="list-style-type: none"> • Brasil tuvo gobiernos de coalición (exitosos por lo demás). 	<ul style="list-style-type: none"> • No tuvo gobiernos de coalición.
	<ul style="list-style-type: none"> • Alto nivel de democracia 	<ul style="list-style-type: none"> • Democracia debilitada

	<ul style="list-style-type: none"> • Trayectoria política Rouseff: tecno-burócrata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trayectoria política Pérez Molina: outsider
	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de crisis económica durante sus mandatos. 	<ul style="list-style-type: none"> • No hubo.
	<ul style="list-style-type: none"> • Diversos escándalos de corrupción en los que se vinculan políticos cercanos, no directamente la presidenta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversos escándalos de corrupción, en los que el presidente y sus cercanos estuvieron involucrados.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor apoyo legislativo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo legislativo débil.
	<ul style="list-style-type: none"> • No existe organismo internacional que juegue rol importante en la destitución. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rol relevante de un organismo internacional, la CICIG, en la salida del presidente.

De acuerdo a las características en común, ambos casos por estar ubicados en países de la misma región geográfica, hace que compartan contextos históricos y actuales parecidos. Con respecto a sus similitudes históricas, ambos países vivieron los embates ocasionados por la Guerra Fría en Latinoamérica y específicamente, por las políticas implantadas por Estados Unidos para mantener su influencia en la región. Dentro de esas medidas, la más relevante se relaciona con el establecimiento de dictaduras militares que generaron consecuencias más o menos relevantes en términos políticos, económicos y sociales y que han permanecido como legado hasta el día de hoy. Con respecto al contexto actual, ambas presidencias ocurren si bien no de forma exactamente paralelas, están dentro de un margen de tiempo cercano, por lo tanto, el contexto macro regional o mundial que pueda influir en el panorama interno es bastante similar. Con respecto a esto, resulta importante recordar todos los casos mencionados más arriba sobre presidencias fallidas en la región. Probablemente, no sea gratuito que hasta la fecha existan 18 casos y, probablemente, existan más en el futuro. Si bien, esta investigación no tiene el afán de explicar las razones de las salidas anticipadas de todos los mandatarios latinoamericanos, a partir de la investigación de los casos escogidos, se ha logrado reconocer que existen similitudes con respecto, principalmente a las características institucionales presentes en

los distintos países de la región y que pueden tener incidencia en una presidencia fallida, como, por ejemplo, su sistema marcadamente presidencialista o su sistema de partidos políticos de carácter multipartidista.

Con respecto a las características específicas de los mandatarios, al ser de las presidencias fallidas más actuales que existen, exceptuando la reciente situación vivida en Perú con Pedro Pablo Kuczynski, están poco trabajadas y abordadas de forma específica en las investigaciones sobre el tema, lo que podría ser una oportunidad para descubrir nuevas variables o nuevos comportamientos de los principales factores descritos más arriba. Además, ambos casos tienen en común la destitución del presidente mediante juicio político, aunque en este punto, se genera una pequeña diferencia, para el caso de Brasil, la mandataria es obligada a dejar su cargo por decisión del Congreso, manteniéndole sus derechos políticos y beneficios como ex presidenta, a diferencia de lo que ocurre con Pérez Molina en Guatemala, quien es desaforado por el legislativo, sin necesariamente obligarlo a dejar el cargo, cosa que sucede al día siguiente cuando decide renunciar, perdiendo todos sus derechos políticos. De acuerdo al DSMD descrito más arriba, ésta sería la característica similar que comparten los casos en cuestión y en la cual se enfocaría el análisis para descubrir y explicar los factores que lo generan.

Por otra parte, dicho diseño metodológico, además de necesitar para su ejecución, que los casos comparados presenten un par de características en común, también deben existir importantes diferencias, elemento posible de reconocer al comparar los países y los mandatos presidenciales. Como primera característica se encuentra que, si bien, en ambos, ya existían casos previos de presidencias fallidas, no hay mayor similitud entre ellas. Lo que ocurrió en Brasil con Fernando Collor de Mello, fue bastante más democrático que lo vivido en Guatemala con Jorge Serrano Elías, ya que, en el primer caso el presidente se somete a un juicio político en su contra, obteniendo como resultado su destitución, a diferencia del mandatario guatemalteco, quien genera un auto golpe fallido, que lo hace, finalmente, salir arrancando del país (Hemeroteca PL, 2016; BBC Mundo, 2016). Un

segundo elemento que los diferencia, se relaciona con el nivel de democracia que existe en ambos países. En Brasil es considerablemente más alto que en Guatemala, lo que se puede ejemplificar a través de las definiciones que establecen los distintos índices de medición de la democracia, los cuales sitúan al primero, dentro de una democracia imperfecta, en cambio, Guatemala está ubicada en una categoría inferior, siendo definida como un régimen híbrido o parcialmente libre (Holsman y Chamy, 2015; Freedom House, 2018b).

Si se enfoca el análisis en las características específicas de los gobiernos en cuestión, un elemento que los diferencia, se relaciona con que, en el caso de Guatemala y de la salida de Pérez Molina, jugó un papel clave la CICIG, organismo internacional dependiente de la ONU, elemento totalmente ausente en el contexto brasileño.

Otra diferencia importante, se relaciona con el perfil del mandatario, para el caso guatemalteco Pérez Molina podría enmarcarse dentro de los gobernantes outsiders, aquellos que vienen de un contexto y tienen un pasado ajeno o diferente de la política, debiendo reforzar su figura de líder potente, llevándolos muchas veces a ser tildados de populistas. En el caso del presidente Pérez, él viene de una formación eminentemente militar (Ortiz de Zarate, 2016c), siendo parte por muchos años, del ejército guatemalteco, en cambio, Rousseff, tuvo una relación algo más cercana con la política desde joven, teniendo un pasado como guerrillera y luego con destacada experiencia en la burocracia brasileña, aunque antes de la elección presidencial de 2009, nunca había competido por un cargo público de elección popular, por lo tanto, tampoco era posible reconocer en ella una vasta carrera política. Por esa razón, la primera vez que el partido la declara candidata, surgen fuertes cuestionamientos, principalmente, porque existían otras figuras más conocidas y con mayor trayectoria política, sin embargo, gustaba su perfil tecnócrata y había manifestado su preferencia por ejercer un rol más gerencial que político (Europa Press, 2015).

Otra clara diferencia, se relaciona con la existencia de una importante crisis económica en el gobierno de Rousseff, elemento relevante para la salida presidencial, situación que no estuvo presente en Guatemala. Además, la mandataria, durante su primer gobierno e inicios del segundo, tuvo mayor apoyo parlamentario que Pérez Molina, puesto que en este mandato y en los que antecedieron a Dilma, gobernar con coaliciones políticas, consiguiendo apoyo relevante desde los diferentes partidos, muchas veces incluso de la oposición, era parte de las reglas del juego establecidas y un requisito que se debía cumplir si se buscaba gobernar eficientemente. En cambio, en Guatemala, no existe un sistema de partidos políticos fuerte, que facilite la construcción y mantenimiento de alianzas políticas, a trazar y a actuar democráticamente, situación que abre la posibilidad de que lleguen a la presidencia líderes independientes o con apoyo de un partido político nuevo o débil, por lo tanto, las coaliciones que se formen desde esa base, serán mientras convenga o no exista alguien que ofrezca mayores beneficios. Esto es lo que ocurrió en el gobierno de Pérez Molina, ya que, nunca tuvo un real apoyo partidista, y cuando se vio en apuros, la mayoría de los partidos, incluso el PP, le dieron la espalda.

Por otra parte, si bien, ambos mandatarios presentan características diferentes, existen un par de similitudes que son posibles de observar, principalmente, con dos elementos: los escándalos políticos y la presencia de movilizaciones sociales. Con respecto al primero, ambos mandatarios se vieron envueltos en escándalos que influyeron en su credibilidad, debilitando el apoyo recibido durante su gobierno. En el caso de Guatemala, Pérez Molina se vio envuelto directa e indirectamente en un sin número de situaciones irregulares, lo que hizo no solo que dejara el cargo, sino que terminara en la cárcel. Por otro lado, si bien la administración de Rousseff fue cuestionada por escándalos de corrupción, lo que afectó su evaluación y popularidad, fueron las denuncias que apuntaban a miembros del gobierno y no a la presidenta directamente.

El otro elemento, se relaciona con las movilizaciones sociales, en ambos gobiernos se desarrollaron diversas manifestaciones en contra de los mandatarios y también de todas

las situaciones irregulares existentes, aunque, si se evalúan las características presentes para ambos contextos, se pueden reconocer diferencias entre ellas, principalmente, con respecto al rol jugado por el factor económico, elemento que acrecienta el descontento ciudadano en Brasil, pero que no está presente en Guatemala.

De acuerdo a todo lo descrito, es posible reconocer, tanto las características en común, como los elementos disímiles de ambas presidencias, lo que permite justificar el uso de la metodología, pero, además, descubrir, a través de la comparación de éstos, qué factores jugaron un rol importante, cuáles definitivamente no tuvieron tanta incidencia y qué otros nuevos surgieron del análisis.

CAPÍTULO IV: EL CASO DE BRASIL

Para el caso de Brasil y la presidencia fallida de Dilma Rousseff, jugaron un papel relevante diversos factores político - institucionales, económicos y sociales, que se fueron desarrollando durante sus dos mandatos y que finalmente la hicieron caer. Dentro de los primeros, estuvieron presentes el rol del Congreso, y la labor que cumplió la coalición oficialista en dicho espacio. A esto se sumó, la alta fragmentación partidista, manifestada, sobre todo, en su segundo mandato y el desprestigio que comenzó a experimentar su partido político y su propia figura, producto de los diversos casos de corrupción que fueron saliendo a la palestra. A este contexto se sumó la crisis económica experimentada, principalmente, durante su segundo gobierno, que se reflejó en una alta inflación y desempleo y un estancamiento en el crecimiento económico, además, de la adopción de políticas económicas “neoliberales” que generaron una pérdida de apoyo entre los sectores más populares. Por último, el descontento ciudadano también estuvo presente a través de una cantidad importante de movilizaciones callejeras, las cuales congregaron a un alto número de manifestantes, llegando a convocar incluso, a un nuevo grupo social, la clase media. Además, lograron con el paso del tiempo, unificar las demandas ciudadanas, en torno a la salida de la mandataria y el consiguiente término de la corrupción política en el país. Todo esto, permitió realizar una breve reflexión sobre un factor poco trabajado por la literatura, la tradición democrática y el rol que jugó en los mandatos de Dilma Rousseff.

En las siguientes páginas se presenta un breve resumen del contexto político, económico y social previo a las dos presidencias de Rousseff, con el objetivo de comprender con mayor profundidad los factores que estuvieron presentes en la presidencia fallida de la mandataria. Luego, se realizará una descripción y análisis de sus dos mandatos presidenciales, reconociendo el apoyo legislativo, la reestructuración partidaria, el debilitamiento de la coalición oficialista, los escándalos de corrupción, la situación económica y las manifestaciones callejeras, como factores presentes y/o relevantes en su salida. Por último, se plantearán algunas consideraciones que den cuenta de la reflexión

realizada en base a este caso, sobre los factores relevantes para la ocurrencia de presidencias fallidas.

Contexto político, económico y social

Brasil al igual que varios otros países de América Latina experimentó regímenes autoritarios en la década del 60, 70 y 80 que marcaron de una u otra manera al país. El Golpe Militar se produjo en 1964 y dio inicio a 21 años de dictadura, compuesta por diferentes gobernantes que subían y dejaban el poder de forma constante. En 1985 se vuelve a la democracia a través de elecciones libres, llegando al poder Tancredo Neves, quien fallece antes de asumir su mandato, quedando en el cargo su vicepresidente, José Sarney entre 1985 y 1990 (Jaramillo et. al, 2018, págs. 310-314). Quien continuó en el poder fue Fernando Collor de Mello, representante de la centro-derecha, el cual fue electo presidente en segunda vuelta en las elecciones de 1989, terminando su presidencia antes de tiempo, producto de un impeachment en su contra.

Debilidad de los partidos políticos en Brasil

Resulta relevante lo ocurrido en la presidencia de Collor de Mello, debido a que quedan en evidencia diversas características, principalmente, político -institucionales pos dictaduras, que terminan convirtiéndose en elementos definitorios del Brasil actual, por lo que jugarán un papel importante a la hora de evaluar los factores que generaron la salida anticipada de Rouseff.

Primero, se caracteriza la presidencia de Collor de Mello como el primer caso de impeachment en Brasil y en Latinoamérica producto de un escándalo político, pero donde también jugaron un papel importante otros elementos, como la permanente resección económica y el desprestigio que generó una baja en el apoyo político y ciudadano, lo que eventualmente terminó constándole el cargo (BBC Mundo, 2016). Los elementos que estuvieron presentes en esta presidencia fallida, también se manifestarán años después en

el segundo impeachment que ocurrirá en el país en contra de la fuerza política opuesta, la izquierda brasileña, representada por Dilma Rousseff (Bersezio, 2016).

Segundo, Collor de Mello fue el primer presidente elegido por votación popular una vez que se vuelve a la democracia, siendo apoyado por el Partido de la Reconstrucción Nacional (PRN), un partido político “fantasma”, es decir, recientemente creado, con nula trayectoria política y escasa propuesta ideológica (Serrafero, 1996 , pág. 142), el cual generó toda una estrategia de marketing, apoyada por importantes empresarios y políticos de la derecha conservadora, para posicionar a su candidato como una de las opciones presidenciales más fuertes (Ortiz de Zárate, 2016b). Esto, de cierta manera, deja en evidencia el debilitado sistema de partidos políticos heredado de las reformas implantadas en la época autoritaria.

Como lo plantea S. Mainwaring (1996) el período de dictadura generó consecuencias negativas para el sistema de partidos políticos brasileño, primero, debilitó la identidad y el enraizamiento en la sociedad de todos ellos, ya que abolió los antiguos y permitió la creación de nuevos, generando un corte en el arraigo que habían mantenido en el tiempo. Además, al permitir que siguieran funcionando los partidos y el Congreso en un contexto de poder limitado, las contiendas electorales se redujeron a reforzar figuras políticas desligadas de sus partidos y a enfocar sus objetivos y función a conseguir favores para sus distritos, proliferando políticos clientelistas. (Mainwaring, 1996, pág. 300; Pascual & González, 2006, pág. 11). Dicho legado, generó en Brasil un notorio *subdesarrollo partidario*, reflejado en un sistema de partidos políticos: a) “ultra-multipartidista” o “fragmentado” donde el partido mayor no ostenta la mayoría real de los escaños, viéndose obligado a formar amplias coaliciones b) con un alto índice de transformismo, impulsado por un electorado clientelar, y c) partidos débiles, producto de sus quiebres y también de la autonomía que ostentan los políticos en relación al partido que representan (Pascual & González, 2006, pág. 11). Sumado a lo anterior, se ha establecido en Brasil lo que se denomina “presidencialismo de coalición”, donde el partido

político que representa el ejecutivo se ve obligado a armar coaliciones con otros partidos, incluso del lado opuesto del espectro político, para poder llevar a cabo su programa y medidas legislativas (Fleury, 2012, pág. 40). Todo en conjunto, ha generado “problemas para la gobernabilidad democrática, ha ayudado a mantener un orden social injusto y ha limitado severamente la calidad de la democracia en Brasil”. (Mainwaring, 1996, pág. 291).

Por otra parte, y como lo plantea Serrafero (1996) no deja de ser paradójico que durante el gobierno de Collor de Mello se hayan manifestado condiciones estructurales de la sociedad brasileña de debilidad e indisciplina partidaria y de un presidente con minoría en el Congreso, expresión de una cierta “ingobernabilidad, y que todas ellas permitieran que el impeachment tuviera menos obstáculos para concretarse, ayudando a que la estabilidad política volviera al país. El impeachment, por lo tanto, significó, para muchos, la existencia de un sistema presidencial funcional y responsable (Serrafero, 1996 , pág. 147) . Además, le jugó a favor tanto al poder legislativo como al judicial, al permitirles aumentar su prestigio producto de su accionar durante la crisis, emergiendo de ella con más fuerza y confianza en sí mismos y por último, hizo comprender a los líderes políticos la importancia de gobernar contando con mayoría legislativa y fuertes coaliciones (Van Dyck, 2016, pág. 14).

Todo este aprendizaje, de una u otra manera, se fue viendo reflejado en los gobiernos posteriores, ya que, luego de la presidencia interina de Itamar Franco, producto del impeachment experimentado por Collor de Mello, tomó el poder por dos mandatos consecutivos, Fernando Henrique Cardozo entre 1995 y 2002, el cual sentó el precedente de lo importante de trabajar en conjunto con el Congreso. Tuvo la astucia política de conseguir mayoría legislativa a través de favores y fondos entregados a los miembros de su coalición, manteniéndola estable. Fue tal el apoyo de ambas cámaras, que pudo aprobar el 76,5% de su agenda legislativa (Melo & Santos, 2013, pág. 56). Esto también se pudo observar durante el gobierno de su sucesor, Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien

logró forjar una alianza con 11 partidos políticos, incorporando a grupos moderados, lo que hizo que gobernara desde el centro, a pesar de los orígenes de izquierda que tenía su partido, el Partido de los Trabajadores (PT). Esto le permitió aprobar el 88% de su agenda legislativa, fue incluso mayor que lo conseguido por Cardoso (Melo & Santos, 2013, pág. 56}). Así mismo lo hizo Dilma Rousseff durante su primer mandato, fue en el segundo donde comenzó a observar una pérdida de apoyo legislativo, llevándola a una situación de crisis irremediable (Van Dyck, 2016, pág. 14).

Resulta importante destacar acá, el rol que jugó y continúa manteniendo en las coaliciones pro gobiernos el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido de la centro-derecha en Brasil. Desde Collor de Mello hasta el segundo mandato de Dilma Rousseff, ha sido la fuerza política de mayor peso y principal aliado de todos los gobernantes. Si bien, nunca ha logrado llegar a la presidencia de forma directa, pero si indirectamente a través de sus vicepresidentes que por diversas circunstancias han tomado el poder, ha concentrado por largos años su fuerte influencia en el Congreso, lo que le ha permitido influir indirectamente en los gobiernos de turno. Esta característica le permitirá jugar un rol preponderante durante el proceso de crisis experimentado por Rousseff en su segundo mandato (Infobae, 2015; Canal RCN, 2016).

Todo lo anterior refleja, entonces, que la inestabilidad e indisciplina partidaria se ha ido superando con el paso del tiempo, gracias a que los partidos políticos, por una parte, han entendido la importancia de crear y mantener las coaliciones que se formen en apoyo al ejecutivo, y segundo, se han ido afianzando y enraizando en la sociedad brasileña, pudiendo evidenciar una institucionalización de los mismos. Sumado a esto, los mandatarios han entendido que la gobernabilidad y las reformas que se quieran llevar a cabo en un país, necesitan de un apoyo legislativo constante, por lo tanto, debe existir también, una voluntad del ejecutivo para reforzar y mantener la coalición (Alles y Franchini, 2003; Van Dyck, 2016). Estos elementos, sumado a otros, han permitido que la democracia en Brasil se encuentre arraigada nuevamente, alejando el pasado autoritario

y a los militares del poder político, volviendo impensable un futuro golpe de Estado (Van Dyck, 2016, págs. 15-16).

El arraigo de dicha democracia también es posible reconocerlo cuantitativamente a través de los distintos índices que existen a nivel mundial. De acuerdo a Polity IV, estudio de la Universidad de Maryland, que coloca énfasis en las características procedimentales de la democracia, es decir, en las reglas y el modo en que se hace efectivo el poder (Pegoraro, 2014), sitúa a Brasil con 8 puntos en una escala que varía entre -10 y +10 como máximo, quedando dentro de la categoría de “democracias”, un nivel menos de aquellos países que presentan democracias plenamente consolidadas (Mizrahi, 2018). Algo parecido plantea The Economist, índice que cuantifica de 0 a 10 el nivel de democracia existente en un país, considerando el proceso electoral y el grado de pluralismo, las libertades civiles, funcionalidad del gobierno, participación y cultura política (Hola Chamy, 2015), situando a Brasil con un 6,86, definiéndolo como una “democracia imperfecta”, quedando a un par de puntos de aquellos países con plena democracia. Resulta importante mencionar, que previo a la situación política experimentada en el gobierno de Rousseff el 2015, Brasil estaba dentro de las plenas democracias, llegando el 2014 a un puntaje de 7,38. (The Economist Intelligence Unit, s.f).

Un último indicador es Freedom House, que considera dos importantes variables, los derechos políticos y las libertades civiles, estableciendo un rango que va de 1 a 7, donde a los países más libres se les entrega la cifra más baja. Brasil presenta 2 de 7 puntos, ubicándose dentro de la categoría más alta, definiéndolo como un país “libre”, gracias a que se reconoce que dicho país presenta características positivas, como la existencia de una democracia competitiva y una participación activa de la sociedad civil, aunque aún existen factores que no permiten a Brasil llegar al nivel más alto, como las crisis económicas, la corrupción y la exclusión social, que desafían el buen funcionamiento de las instituciones (Freedom House, 2018a).

Una economía en alza

Con respecto a la situación económica en Brasil, ésta comienza a estabilizarse en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, entrando en una serie de ciclos virtuosos y de crecimiento económico estable. Desde 1994, con el lanzamiento del Plan Real por parte del ex mandatario, se logró reducir la inflación, hubo una mejora en la flexibilidad cambiaria y en el control de la deuda pública (Serena Garralda, 2011). Esta situación continuaría con los dos mandatos de Lula, quien mantendría el crecimiento económico en alza, haría disminuir las tasas de desempleo y activaría programas de consumo popular, logrando un ascenso económico de los sectores más empobrecidos del país, 39 millones entre 2003 y 2011 (Goldstein, 2016, pág. 92). Además, gracias a toda la riqueza acumulada por el alza en las materias primas y la exportación, logró sortear los embates de la crisis mundial de 2008, siendo “uno de los últimos países en entrar en recesión y uno de los primeros en salir en 2009, y sin que un solo banco se hundiera” (BBC Mundo, 2018a). Como lo plantea Perry Anderson (2011), Lula terminaría su mandato como el político más exitoso del mundo, con un 80% de aprobación y con el logro de haber posicionado a Brasil, a nivel mundial y en el imaginario de sus conciudadanos, como un “país potencia” (Anderson, 2011).

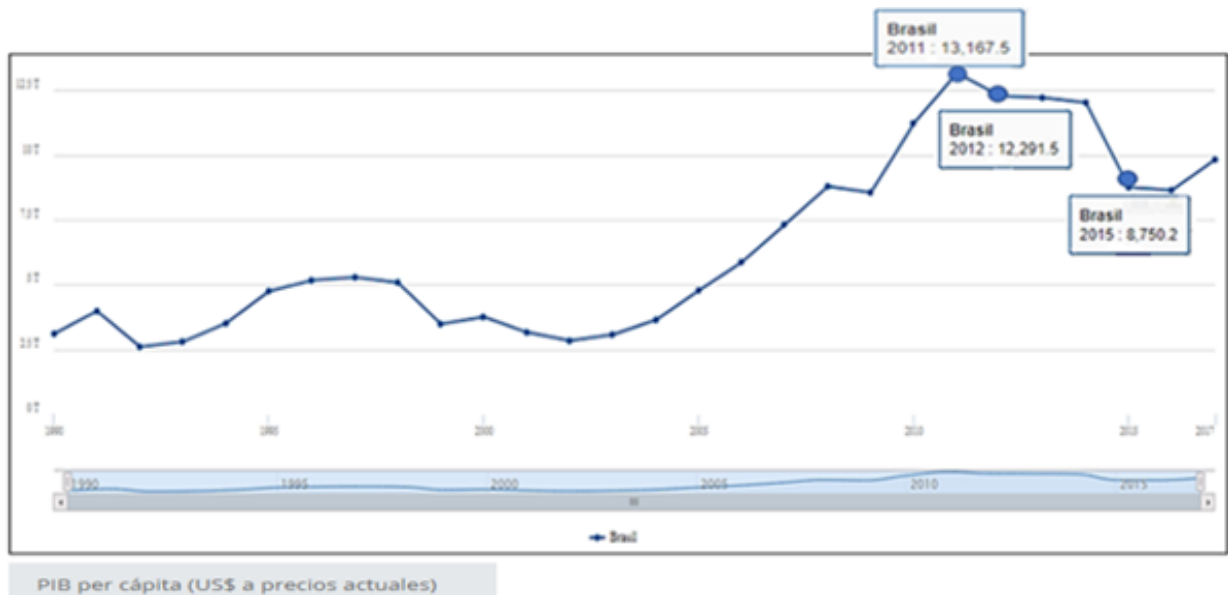
De acuerdo con Van Dyck (2016), Brasil desde 1994 a 2013 entró en una época de estabilidad económica, que se manifestó en que durante dos décadas no hubo crisis prolongadas, se logró controlar la inflación y la economía se mantuvo en constante crecimiento. Además, se continuó reforzando el desarrollo industrial, lo que entregó a la economía brasileña mayor complejidad y diversificación, disminuyendo la dependencia por la exportación de productos primarios, situación contraria a la vivida por otros países de la región.

El éxito económico, también se tradujo en considerables avances en materia social, entre los gobiernos de Cardoso y Lula, hubo un aumento en las matrículas escolares, se implantó la atención médica universal, se crearon programas de salud para personas

enfermas de sida y la mortalidad infantil disminuyó (La red 21, 2002; Goizueta, 2010). “La pobreza y la desigualdad disminuyeron drásticamente gracias al crecimiento económico y a políticas sociales diseñadas para aumentar el ingreso de los hogares más pobres” (Van Dyck, 2016, pág. 14). Un ejemplo de aquello, fueron los programas de transferencia de renta creados en el gobierno de Cardoso y ampliados durante el mandato de Lula, conociéndose con el nombre de “Bolsa Familia”. Ambas gestiones permitieron un aumento palpable del ingreso por parte de la población más desposeída, haciendo disminuir la pobreza extrema y aumentando la clase media de forma considerable en el país (Goizueta, 2010).

Toda esta bonanza se vio reflejada en el ingreso per cápita de la población, el cual se mantuvo en constante crecimiento, llegando a su punto más alto el 2011, con US\$13.167, tal como se evidencia en el gráfico:

**Gráfico 1:
Ingreso per cápita en Brasil (1990 – 2017)**



Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Banco Mundial (2018a)

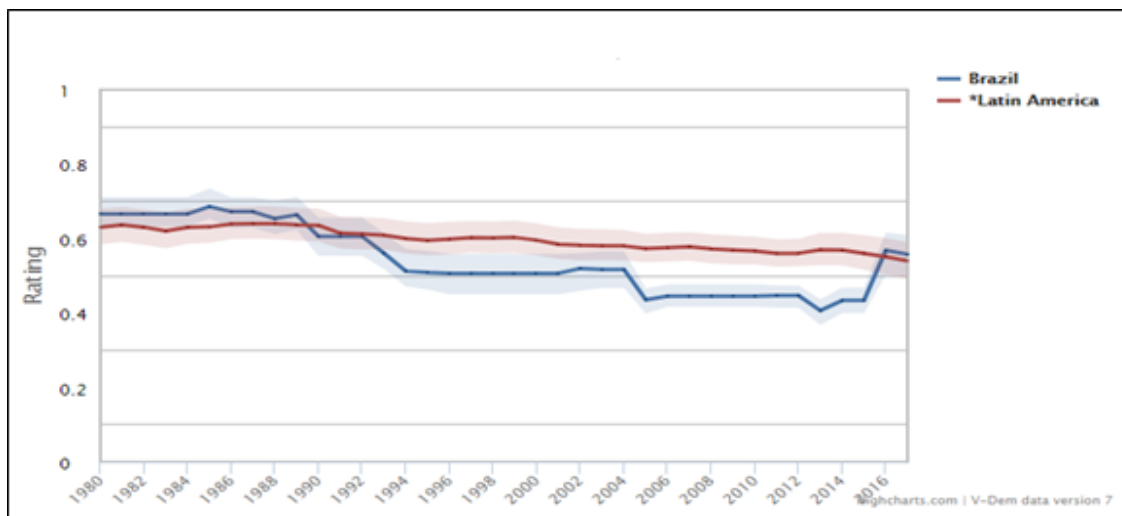
Es posible observar, entonces, significativos avances en términos político- institucionales, económicos y también sociales, sin embargo, aún persisten situaciones que hacen tambalear a la democracia y la gobernabilidad del país.

Escándalos y corrupción política

Desde Fernando Collor de Mello, acusado de lavado de dinero, tráfico de influencia, entre otros (Serrafero, 1996 , pág. 143), hasta los gobiernos más actuales se han visto envueltos en escándalos políticos, lo que evidencia que la corrupción no tiene color político, ni involucra exclusivamente a un mandatario en particular. A partir de lo anterior, se ha planteado que la corrupción se encuentra enraizada, que es endémica y que está extendida en toda la clase gobernante (Taub, 2016). De acuerdo a diversas investigaciones, en el último tiempo, no solo se ha descubierto que el ex mandatario Lula (BBC Mundo , 2018) ha estado envuelto en este tipo de escándalos, otros políticos del más alto nivel, también han sido acusados, o están siendo investigados. Diarios reconocidos de Brasil han publicado una lista que involucra a casi toda la cúpula política brasileña: candidatos presidenciales como Aécio Neves y José Serra, Ministros del actual gobierno de Michel Temer, presidentes de la Cámara de diputados y senadores y los partidos políticos más importantes del país, como; el Partido de los Trabajadores (PT), Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) (Bedinelli, 2017).

De acuerdo al gráfico (Vareities of Democracy, 2018), que abarca desde 1980 hasta 2017, e incorpora distintas variables en torno a la corrupción en Brasil, desde los casos más pequeños hasta los más relevantes, además de las situaciones vividas por todos los poderes del Estado, se observa lo siguiente:

Gráfico 2:
Corrupción política en Brasil (1980-2016)



Desde la vuelta a la democracia hasta 2017, existe una tendencia a la baja con respecto al promedio de América Latina, sin embargo, dicha tendencia comenzó a verse modificada desde el 2013 en adelante, situación que ha ido en crecimiento constante, incluso superando hoy el promedio de la región.

Esta situación, quedará de manifiesta y será un tema recurrente en los medios y en la opinión pública durante los mandatos de Dilma Rousseff, sucesora por dos gobiernos consecutivos de Lula, desde 2011 hasta 2016. Dicha situación, junto con diversos otros factores, llevarán a la mandataria a una pérdida de apoyo y credibilidad, produciéndose un juicio político en su contra que no le permitirá terminar su segundo mandato, obligándola a dejar el poder.

La llegada de Dilma Rousseff a la presidencia de Brasil (enero 2011 - agosto 2016)

Dilma Rousseff, desde joven estuvo vinculada a la política, en 1961, comenzó a frecuentar ambientes políticos de izquierda y en 1964, con 16 años, decidió luchar en

contra del Régimen Militar, integrándose en distintos grupos políticos, hasta que en 1970 es condenada por “subversión”, estando casi tres años en la cárcel. (Embajada del Brasil, 2016). Una vez que es liberada, continuó participando de distintas instancias políticas, hasta que en el año 2000 se afilia al PT, partido al que aún pertenece y que la escoge como su candidata presidencial el 2010 y el 2014.

Previo a sus presidencias, Rousseff participó siendo Ministra de Minas y Energía entre 2003 y 2005, en el primer gobierno de Luis Inacio Lula da Silva, y posteriormente, fue nombrada Jefa de la Casa Civil, convirtiéndose, no solo, en la primera mujer en ocupar ese importante puesto, sino también en la mano derecha del mandatario y en la figura de importantes proyectos impulsados por el gobierno de Lula. Con esto, “Rousseff pasó a asumir un elenco de responsabilidades, como la asistencia y asesoría diarias del presidente, la supervisión de los actos y programas presidenciales, entre otras” (Ortiz de Zárate, 2016a, pág. 10). De acuerdo a todo lo anterior, es posible reconocer en Dilma, un pasado político que comienza con bastante anterioridad a sus mandatos presidenciales, sin embargo, su trayectoria estaba más bien vinculada al área de gestión, llevando a cabo diversas acciones estratégicas, perfilándose como una tecnócrata, más que como una figura política fuerte, lo que no la hacía ser la mejor carta para las elecciones presidenciales de 2010. A pesar de lo anterior, y con la ayuda de Lula, que a esas alturas ya la consideraba su mejor sucesora, logra ser proclamada como candidata del PT en junio de ese año (Arias, 2010; BBC Mundo, 2010b).

Para lograr llegar a la presidencia, los meses previos a la elección tuvo que trabajar arduamente en cambiar su imagen de mujer fría, muy técnica y de lenguaje erudito, a conseguir una cercanía, sobre todo, con las clases más bajas de Brasil, electorado leal del PT. Además, tuvo que convencer a los partidos políticos que habían apoyado los mandatos de Lula, sobre todo al PMDB, principal partido político de Brasil, a que se quedaran del lado del oficialismo, pues ambos sabían que no podría gobernar sin el respaldo de aquella coalición (Arias, 2010). De esta manera, una vez que el PT, la declara públicamente como

su candidata, aparecen los apoyos oficiales de los distintos partidos políticos; además del PT, el cual lideraba la coalición, se encontraba el ya mencionado PMDB, Partido Socialista Brasileño (PSB), Partido Democrático Laborista (PDT), Partido de la República (PR), Partido Comunista de Brasil (PC de Brasil), Partido Republicano Brasileño (PRB), Partido Socialista Brasileño (PSB), Partido Social Cristiano (PSC), Partido Laborista Cristiano y el Partido Laborista Nacional (PTN), además de recibir el apoyo informal del Partido Progresista (PP). En total 10 partidos políticos se unieron en esta amplia coalición, conocida como “*Para el Brasil seguir cambiando*” que terminó conformada por un espectro político que iba desde la extrema izquierda hasta la derecha liberal y conservadora (Ortiz de Zárate, 2016a).

Con el apoyo de aquella fuerza política, Rousseff se enfrenta a las elecciones del 3 de octubre de 2010, consiguiendo un 46,7% de los votos, ganándoles a sus opositores José Serra del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) quien obtuvo un 32,6% y Mariana Silva del Partido Verde (PV) con un 19,4% de los sufragios. Esto, sin embargo, no le permitió llegar de forma directa a la presidencia, pues no logró conseguir el 50% más uno, lo que hizo que ella y su principal contendor, se enfrentaran en una segunda vuelta el 31 del mismo mes (BBC Mundo, 2010a). En esta ocasión Rousseff logra conseguir la mayoría, con un 56,05 % de los votos, distanciándose 12 puntos de su rival, quien obtuvo un 43,95%, eso equivalía a “55, 7 millones de sufragios contra los 43,7 millones de Serra. Un éxito ligeramente más ajustado que los triunfos conseguidos por Lula tanto en 2002 como en 2006, pero no por ello menos relevante” (Tejero, 2010)

Con respecto a la elección de diputados, llevada a cabo junto con la primera vuelta presidencial, la coalición que apoya a Rousseff consigue obtener la mayoría de los escaños, un 58,1%, que equivale a 311 diputados, otros concentrándose un 16,9% en miembros del PT, quienes obtienen la más alta mayoría, luego el PMDB con un 13%, y el PSDB, partido de oposición, con un 11,9% (Lozano, s.f; Sáez, s.f). Otros estudios (Melo & Santos, 2013; Vireia, 2016) plantean un número mayor de diputados, entre 324 y 351,

que equivalen más o menos al 63,2%. Por su parte, en el Senado Federal dicha coalición concentró 54 puestos, que equivale a 66,7% del total de fuerzas políticas que lo componían (Melo & Santos, 2013, pág. 57). De esta manera, la mandataria recién elegida comienza un mandato con mayoría en el Congreso, situación que irá cambiando a medida que su gobierno avance.

Primer Gobierno (enero 2011-diciembre 2014)

Rousseff llega por primera vez a la presidencia con 63 años de edad, el 1 de enero de 2011, siendo la primera mujer en ocupar el cargo en Brasil. Llega, estando muy relacionada con Lula da Silva, lo que resulta, en un primer momento, sumamente beneficioso para ella, ya que la popularidad con la que termina su gobierno el ex mandatario le ayuda, primero, a ganar las elecciones, y segundo, a comenzar un gobierno con bastante apoyo ciudadano y partidista. Esto explica, lo categórica que siempre fue al plantear su total sintonía con Lula y sus propuestas (Arias, 2010). Su gobierno, por lo tanto, se encargaría de continuar con las políticas macroeconómicas, que tuvieron tan buena aceptación por parte de los mercados externos y mantendría un fuerte compromiso con la estabilidad fiscal y el control de la inflación, aunque con una visión de crecimiento más estatista y social (Arias, 2011). Pero, su principal objetivo, sería buscar erradicar la pobreza extrema, además de ampliar y reforzar las políticas específicas de salud, educación, empleo y reajuste salarial por encima de la inflación. (Ortíz de Zárate, 2016). Con esos objetivos comienza su primer mandato presidencial.

Apoyo legislativo y primeros escándalos en la coalición de gobierno

Durante el primer año de gobierno (2011) contó con una mayoría legislativa importante, gracias a la amplia coalición que la apoyó desde su candidatura presidencial, y que se debe, en parte, a la situación heredada de los gobiernos de Lula. Además, para mantener dicho apoyo, debió incorporar en su gabinete de Ministros a varios

representantes de los partidos políticos integrantes de su coalición. De 37 cupos, 17 quedaron en manos del PT, 6 fueron para el PMDB, 2 del PS y uno para el PDT, el PC de Brasil, el PR y el PP, además, ocho carteras fueron ocupadas por ministros sin vínculo partidista (Melo & Santos, 2013, pág. 57). Dentro de esta distribución, llama la atención la cantidad de ministerios entregados al PMDB, esto claramente no es casual. La alianza PT-PMDB era el pilar fundamental que garantizaba la estabilidad de la coalición y la gobernanza del mandato de Rouseff, por eso, el interés explícito que demostró la presidenta en “tratar bien al partido”, entregándole Ministerio claves como el de Minas y Energía con Edison Lobão, el Ministerio de Defensa con Celso Jobim y la Secretaria de Asuntos Estratégicos con Moreira Franco (Flôres, 2012, pág. 23). Además, del apoyo oficial, Rouseff contó con la oposición política para la realización de sus propuestas.

Sin embargo, a fines de ese año y en el siguiente (2012) hubo una leve baja partidista, explicándose esta situación, principalmente, por la salida del PR del equipo ministerial, sapicado por denuncias de corrupción, que involucraban a su representante ministerial, Alfredo Nascimento de la cartera de Transporte (Referi, 2011). Esta situación, deja en evidencia conflictos internos dentro de la coalición, la cual comienza a debilitarse producto de la pérdida de apoyo del PR, situación que de alguna manera, se estabiliza, gracias a la oposición política, quienes “prácticamente doblaron sus tasas de convergencia con el PT de 2011 para 2012” (Melo & Santos, 2013, pág. 66).

Esta situación de tensión dentro de la coalición política, se vincula tal como se observa para el caso del PR y su Ministro de Transporte, con los escándalos de corrupción que empañaron los gobiernos de Dilma. El primer escándalo salió a la palestra meses después de haber llegado a la presidencia, específicamente en mayo de 2011, cuando se acusa al Ministro jefe de la Casa Civil, Antonio Palocci, de “posible enriquecimiento ilícito con tráfico de influencias” (Ortíz de Zárate, 2016). Si bien, no hubo pruebas suficientes para acusarlo, el Ministro en cuestión renuncia a su cargo una vez que acaba y se archiva la investigación. Este fue el punto de partida a una serie de casos, donde se vio

caer a un número considerable de Ministros entre 2011 y 2012; a Carlos Lupi del Ministerio del Trabajo (PDT), a Mário Negromonte del Ministerio de las Ciudades (PP), a Wagner Rossi del Ministerio de Agricultura (PMDB) y a Pedro Novais del Ministerio de Turismo (PMDB) (Goldstein, 2016; Zárate, 2016). Dicha situación generó “tensiones dentro de la coalición de gobierno, principalmente respecto de las alianzas del PT con el PMDB, que contaba con el vicepresidente Michel Temer y una importante proporción de diputados y senadores” (Goldstein, 2016, pág. 93).

La cascada de dimisiones podrían haber empañado la imagen de Rousseff y haber hecho disminuir sus índices de aprobación, sin embargo, lo que ocurre estos primeros años de su gobierno es todo lo contrario. Gracias a la rápida decisión de remover a sus Ministros, entregó una señal potente a la ciudadanía de intolerancia a la corrupción aumentando su popularidad (Goldstein, 2016, pág. 94).

Sin embargo, la leve baja partidista comenzó a acrecentarse hacia fines de este primer mandato, cuando en septiembre de 2013 el PSB anuncia oficialmente su salida de la coalición de gobierno, puesto que buscaban, según sus propias declaraciones, tener libertad para debatir sobre el futuro de Brasil y poder tomar decisiones, que tiempo después se entendieron, al presentar su propia candidatura presidencial para los comicios del 2014 (Voz de América, 2013). Esta situación hizo que Rousseff perdiera, no solo apoyo de un partido político, sino también a sus Ministros, Fernando Bezerra, de Integración Nacional, y José Leonidas, secretario especial de Puerto, quienes dejaron los cargos por orden de su partido (20 minutos, 2013), lo que debilitó, de una u otra manera, a la mandataria para enfrentar las elecciones de 2014.

Signos de una economía inestable

Con respecto a lo económico durante los dos primeros años de su mandato, la situación no se mantuvo como en los gobiernos de Lula, ya que el crecimiento y la

inflación se observaron inestables y con cifras no esperadas. El PIB marcó un “índice de 1,0 en 2011 y de 0,9 el 2012, mientras que la inflación volvió a preocupar, con tasas del 6,5% y el 5,8%” (Melo & Santos, 2013, pág. 56), manteniéndose en esas cifras durante todo su primer gobierno, tal como se puede observar a través de los datos en la variación de los precios al consumidor, presentes en la siguiente tabla:

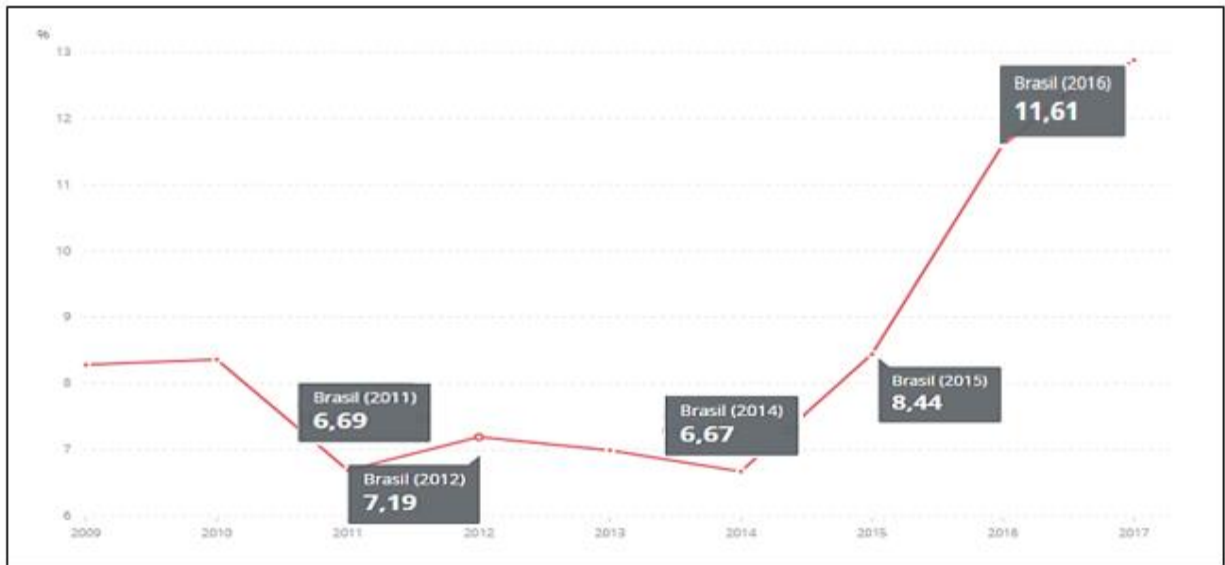
Variación de los precios al consumidor (2009-2016)

2009	4,3
2010	5,9
2011	6,5
2012	5,8
2013	5,9
2014	6,4
2015	10,7
2016	6,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL (2017)

El PIB per cápita, por su parte, llegó a su auge el 2011, iniciando su baja de ahí en adelante, situación que coincide con los dos gobiernos de Rousseff, el 2012 marcó US\$12.291 y el 2015 llegó a su mayor retroceso con US\$ 8.750, cifras que se puede observar en el gráfico 1 (pág 40). El desempleo para inicios de su gobierno, no marcó cifras tan preocupantes, de hecho se presentó una baja entre 2010 y 2011, sin embargo, para el año siguiente, este aumentó en un 0,5 %, aunque para el 2013 la cifra disminuyó levemente. El problema se presenta, principalmente, a inicios de su segundo mandato, tal como se muestra en el gráfico:

Gráfico 3:
Índice de desempleo (2009-2017)



Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Banco Mundial (2018b)

De acuerdo a Goldstein (2016), lo que comenzó a experimentarse a partir de 2012, se relaciona con el deterioro del *ciclo económico nacional- desarrollista*, el cual habría sostenido el crecimiento principalmente en la demanda interna y que Lula en su mandato quiso repeler estimulando a los nacionales al consumo, pero que no pudo mantenerse en el tiempo, producto de la crisis internacional y las reformas económicas llevadas a cabo con mayor fuerza durante el segundo periodo presidencial de Rousseff (Goldstein, 2016; Tapia, 2016). A pesar de observar durante los primeros años de su gobierno, indicios de una desaceleración económica y que claramente, la mandataria no estaba manteniendo el éxito económico de su antecesor, “ los estudios lo decían y muchas personas podían percibirlo en sus bolsillos: en el Brasil de 2012, pese al cambio de ciclo económico, que relegaba para mejores tiempos las tasas de crecimiento altas, las desigualdades sociales seguían disminuyendo y la clase media seguía aumentando” (Ortiz de Zárate, CIDOB, 2016a). En definitiva, si bien la economía no iba en aumento, la percepción de bienestar de la población y de mejoras en su calidad de vida, al parecer sí, lo que tenía a Dilma

situada con un alto porcentaje de aprobación, con alrededor del 70% (Goldstein, 2016, pág. 94).

Dicha popularidad, lamentablemente, la mandataria no pudo sostenerla en el tiempo, producto, en primera instancia, de la desaceleración económica que fue acrecentándose con el paso de su gobierno. Los números muestran que el 2013 la economía creció un 2,3 % y que para el cierre de su mandato llegaría a un promedio del 2%, el desempeño económico más débil desde Fernando Collor de Melo en 1992 (El Observador, 2014). “A principios de 2014, Brasil cayó en su peor crisis económica en casi un siglo” (Van Dyck, 2016, pág. 11), reflejada en una alta inflación, por encima de lo esperado, déficit fiscal producto de un alto gasto público y un saldo negativo récord en la balanza de pagos (Infobae, 2014a), a su vez, generó un aumento del desempleo y una disminución considerable y sostenida de la popularidad y apoyo hacia la mandataria.

Primeras manifestaciones callejeras en contra de la presidenta

Todas las situaciones complejas observadas en el primer mandato, inevitablemente, generaron repercusiones sociales, que comenzaron a manifestarse a partir de 2012, cuando tuvo que hacer frente a manifestaciones sociales compuesta por diversos actores con demandas vinculadas a su sector. Desde funcionarios público y federales, hasta docentes universitarios protestaron en las calles de Brasil, sin embargo, esta oleada de movilizaciones no sería la única ni la más significativa (Ortiz de Zárate, CIDOB, 2016a).

El 6 de junio de 2013 un grupo conocido como Passe Livre (MPL) organizó una manifestación en Sao Paulo en contra del aumento de la tarifa del transporte público, a la que se sumaron estudiantes, partidos de izquierda y otros movimientos sociales, congregando a un gran número de personas. Con este hecho se da inicio a una seguidilla de manifestaciones, conocidas como las “Jornadas de Junio”, propagándose por las

distintas ciudades de Brasil y congregando una tras otra a más y más manifestantes, generándose las protestas más multitudinarias desde la búsqueda por la redemocratización en 1984. Junto a la población que adhería a las protestas, se sumaron también una mayor cantidad de demandas; mejora en los servicios públicos, terminar con la corrupción y disminuir el enorme gasto generado por los eventos deportivos y traspasar esos recursos a la ciudadanía brasileña, pero ninguna pancarta, discurso o consigna, se dirigía todavía hacia la mandataria o hablaba de una posible caída presidencial (Zárate, 2016; Breda, 2016). Gracias a la presión ejercida por las masivas y reiteradas manifestaciones, el gobierno dio marcha atrás al alza tarifaria, lo que hizo rebrotar la esperanza en la lucha social (Breda, 2016, pág. 8).

Dos características importantes se expresaron durante estas manifestaciones y que jugaron un papel significativo en el segundo mandato de Dilma. Primero, la actitud inédita de desaprobar las manifestaciones por parte del oficialismo y específicamente, del PT. Habitualmente este partido político entregaba apoyo, si no a todas, a la mayoría de las manifestaciones sociales, por su cercanía con las demandas ciudadanas y con las clases más desposeídas, pero esta vez, el descontento afectaba directamente a uno de los representantes del partido, quien estaba ejerciendo el cargo de Alcalde en Sao Paulo, Fernando Haddad. Esto generó una clara diferencia en el actuar del gobierno, reaccionando con violencia y represión en contra de los manifestantes, lo que, a medida que crecían las protestas, aumentaba también el distanciamiento ciudadano con el PT y los partidos de izquierda (Breda, 2016, págs. 7-8), sin embargo, el mayor distanciamiento, no se generó aquí, sino que vino después, producto de otros factores. Y la segunda característica, fue la participación significativa de grupos sociales distintos a los que tradicionalmente estuvieron vinculados a las manifestaciones, ciudadanos de clase media, especialmente la “nueva clase media”, se unieron a las movilizaciones con un mensaje potente en contra de la corrupción, pero con un matiz distinto a lo planteado por los otros actores políticos, la corrupción la asociaban principalmente con el “comunismo y el PT”, a pesar de las ya sabidas denuncias y condenas en contra de miembros de casi todos los

partidos políticos. Dicha situación comenzó a evidenciar la polarización social, que en el segundo gobierno de Rousseff se desarrollará a gran escala (Breda, 2016; Goldstein, 2016; Zárata, 2016).

Balance al cierre de la primera administración

Durante este primer periodo presidencial se presentaron factores que permitieron a Rousseff terminar con un apoyo político y social importante, sin embargo, no se asimilaba al que había recibido a inicios de este gobierno. Por una parte, la cercana relación con el ex mandatario Lula da Silva, hizo que consiguiera un amplio apoyo partidista, sobre todo, de los miembros del PMDB, partido clave para mantener la coalición oficialista en pie, además, de permitirle tener la mayoría de las fuerzas congresistas de su lado. Por otra parte, gracias a la afortunada reacción que tuvo frente a los casos de corrupción que comenzaron a destaparse desde mayo de 2011 en contra de varios Ministros de su gabinete, logró desenmarcarse de dichas irregularidades, permitiéndole mantener, por un tiempo no muy largo, el apoyo de partidos políticos como de una parte de la población, aunque no se libra del todo, puesto que producto de los escándalos, en agosto de ese año, pierde un partido aliado de la coalición, el PR.

Dicho apoyo ciudadano, también se mantuvo gracias a que la población más desposeída seguía recibiendo los positivos efectos de las políticas sociales llevadas a cabo en el período presidencial anterior. Esto es posible de reconocer, por ejemplo, a través de las cifras de desempleo, las cuales, si bien muestran una leve alza el 2012, los años siguientes disminuye.

Sin embargo, el bienestar social, se contraponía cada vez más con las débiles cifras macroeconómicas que comenzaban a evidenciarse a través de un crecimiento e inflación inestables. Esto hizo que, un grupo importante de la población, principalmente la clase media, empezara a mostrar su descontento en las calles, primero, demandando una mejora

en los servicios públicos, pero a medida que crecían los casos de corrupción política, ésta se convertía en una demanda ciudadana importante, generando, primero una polarización social, que luego iría disminuyendo en pro de un aumento y unificación de las manifestaciones.

Así como se iba evidenciando el debilitamiento progresivo de la figura de Rousseff y de su labor, el apoyo partidista también comenzaba a tambalear. Una primera situación se observa con la salida del PR, aunque dicha pérdida se debe a una decisión gubernamental, más que una propia del partido, no así lo que ocurre en septiembre de 2013 con la renuncia de la coalición del PSB, partido que decide lanzar su propia candidatura presidencia y convertirse en una fuerza opositora al gobierno.

Es este contexto que envuelve las elecciones de 2014 y que encuentra a la candidata del PT bastante más debilitada que en la primera elección.

Segundo gobierno (2015-2016)

El segundo mandato de la presidenta, comenzó bastante distinto al anterior. Primero, el porcentaje de votos alcanzados en la elección presidencial de 2014, se redujo en un 4,41% y la distancia con su contrincante fue de un 3,28% con respecto a la elección anterior, margen sumamente estrecho si se compara con la diferencia del 12,1% alcanzada el 2010. Adicionalmente, Rousseff decidió jugar sus fichas en soledad, alejándose poco a poco de Lula, su mentor político. Planteó que su segundo gobierno sería más “dilmista” que el anterior, lo que se reflejó, en un primer momento, en un gabinete en el cual no incorporó a ninguna figura de confianza del ex mandatario, generándose un espacio íntimo entre ella y sus colaboradores cercanos, a los que recurriría cuando necesitara consultar sobre algún tema y apoyarse. Sin embargo, de acuerdo a algunos analistas, como Clovis Rossi de Folha de Sao Paulo: “Dilma es una criatura de Lula y romper con el creador es como escupir en la cruz. Lo que parece haber es el montaje de un gobierno más dilmista

que lulista, lo que es normal. Esta vez, Dilma debe su victoria a sí misma y a su jefe de marketing” (Perfil, 2015).

Sumado a lo anterior, el segundo mandato presentó claros signos de inestabilidad, no solo por la crisis económica heredada de su primer gobierno, sino también por las cifras en las votaciones de octubre de 2014. Un hecho que jugó a favor de Rousseff en las elecciones, fue el éxito, contrario a muchos pronósticos, con el que se desarrolló la Copa Mundial de Fútbol, lo que se reflejó en un alza en las encuestas, recobrando su imagen ante la opinión pública de buena administradora (Goldstein, 2016, pág. 94). Sin embargo, esto no sería suficiente para ganar en primera vuelta el sillón presidencial, si bien logra obtener la mayoría de los votos, un 41,59%, no logra ganar de forma definitiva a los candidatos Aécio Neves del PSDB que obtuvo un 33,55% y a Marina Silva del PSB con un 21,32% (El País , 2014).

Con estos resultados, el 26 de octubre se realiza la segunda vuelta, logrando el triunfo, por un margen sumamente estrecho, la candidata del PT. “Con el 100% de los votos escrutados, que equivale a 146 millones de ciudadanos, Rousseff obtuvo el 51,64% contra el 48,36% del liberal Aécio Neves. Esos poco más de tres puntos son la diferencia más corta registrada en unas elecciones presidenciales desde el final de la dictadura en Brasil, en 1985” (El País, 2014). Esto, generó como consecuencia, algunas situaciones problemáticas con las que tuvo que lidiar la presidenta. Primero, las fuerzas políticas opositoras, al asumir su derrota en las urnas, recurrieron a una nueva estrategia para buscar desestabilizar el nuevo mandato. Neves reconoció inmediatamente, luego de los resultados, el triunfo de su contrincante, sin embargo, días después, él y su partido sembraron la desconfianza, al deslegitimar la victoria de Rousseff, cuestionando en los diversos medios de comunicación el conteo de votos. Además, recurrieron al Tribunal Superior Electoral para que realizara una auditoría en las urnas electrónicas, lo que finalmente se hizo sin encontrar ninguna irregularidad. (Breda, 2016, pág. 6).

Cambios en la coalición y recomposición partidaria en el Congreso

A pesar de aquello, las fuerzas políticas que conformaban la coalición pro Dilma en su segundo mandato, se redujeron solo en un número, pues hubo una reestructuración partidaria, que hizo salir, pero también entrar a nuevos partidos. Además del PSB, que había dejado la coalición oficialista el 2011, también salió el PSC, quien presentó su propio candidato presidencial en las elecciones de 2014, quedando conformada la coalición “*Con la fuerza del pueblo*” de la siguiente manera; además del PT, continuó siendo parte el PMDB, el PDT, el PC de B, el PRB, el PP, el PR, y dos formaciones nuevas, el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Republicano de Orden Social (PROS) (Ortiz de Zárate, CIDOB, 2016a). Sin embargo, como lo plantea Vireia (2016) la base de apoyo político presente en esta coalición no era sólida, debido, principalmente, a que los partidos que la componen no comparten el mismo programa político, manteniéndose esta unidad solo a través de constantes negociaciones que giran en torno a recursos y mayor cantidad de cargos en el gobierno.

Por otra parte, las elecciones parlamentarias de 2014 hicieron que la natural fragmentación partidaria que caracteriza al Congreso brasileño, aumentara aún más. De 22 partidos que se encontraban ocupando escaños en el Parlamento, pasaron a 28, seis más que en el 2010, cifra nunca antes vista en el país (Fernández y Henrich, 2016, pág. 194; Infobae, 2014). Esto también manifiesta, un recambio de fuerzas políticas, abriéndose espacios partidos pequeños y de reciente fundación, frente a los más grandes y que tradicionalmente tenían la mayoría legislativa, a su vez, y de acuerdo a lo que plantean Fernández y Henrich (2016), dichos partidos han generado un viraje a la derecha política, característica que probablemente no le favorezca a la mandataria. Estas situaciones lógicamente serán complicadas de abordar, ya que Rousseff deberá lograr mantener un apoyo mayoritario en un espacio altamente fragmentado y donde su personalidad, no le jugará a favor, “dada su falta de habilidad para negociar con los parlamentarios y partidos de su base” (Vireia, 2016).

Con respecto a la distribución partidaria dentro del Congreso, los 9 partidos que apoyan a Rousseff, quedaron con 294 diputados de un total de 513, lo que equivale al 57,3% de los escaños, más de la mitad de las fuerzas políticas que lo conforman. El PT, al igual que en la elección de 2010, fue el más votado, sin embargo, sus puestos en el parlamento disminuyeron, de 88 a 70 diputados, lo que equivale a una baja porcentual de 3,3 %. La segunda mayor bancada continuó siendo el PMDB que también disminuyó sus escaños, de 78 a 66. Del bando opositor a Dilma, el PSDB sumó diez diputados y avanzó hasta los 54, convirtiéndose en la tercera fuerza política (Infobae, 2014b; Fernández y Henrich, 2016, pág. 195). Con respecto a la composición del Senado Federal, hubo pocos cambios, ya que solo correspondía renovar un tercio, el PMDB continuó siendo la principal fuerza con 18 escaños, perdiendo 1 con respecto a la elección anterior, al igual que el PT, que quedó con 12. El partido que más creció fue el PSB, que hace ya un tiempo había decidido abandonar la coalición oficialista, ganando 3 representantes y quedando con 7 puestos (Infobae, 2014b).

Esto en cifras generales, significó, que el arco de apoyo al oficialismo perdió diputados, quedando con 304, también perdió apoyo independiente, quedando con 43 de 51 que tenía en el gobierno anterior. Por su parte, la oposición amplió su fuerza, ganando ocho partidos y más escaños, llegando a 176. De acuerdo a Vireia (2016) el fortalecimiento de la oposición, junto con la fragmentación de la base de apoyo del gobierno fueron los factores fundamentales que influyeron en el quiebre con el legislativo el 2015, impidiendo el avance de la agenda política de la mandataria, aumentando el ambiente de crisis que ya podía percibirse en Brasil.

El PMDB y la inestabilidad del gobierno de Dilma

Otra idea para sumar a este contexto, se relaciona con lo ocurrido en el parlamento a inicios de 2015, cuando se elige a Eduardo Cunha como presidente de la Cámara de diputados, representante del PMDB, partido miembro de la coalición oficialista, pero a su

vez, un ferviente opositor de Rousseff. Si bien, él aclara públicamente que no pretende convertirse en un escollo para el ejecutivo, existe el temor por parte de éste, de que indirectamente movilice fuerzas contrarias en un espacio que ya se observa hostil para la mandataria, a lo que se suman, las facultades que posee Cunha al ser presidente de la Cámara, quien “tiene gran poder para definir lo que entra y no entra en la pauta de votaciones del Congreso, además de ser el responsable para autorizar la apertura de procesos políticos contra altas autoridades, incluyendo el jefe de Estado” (El País, 2015), situación que le jugará en contra a Rousseff unos meses después, cuando Cunha pida a la Cámara que se realice un impeachment en su contra (Breda, 2016).

Estas situaciones algo inestables en términos políticos para la mandataria, generaron una consecuencia irreversible en la coalición de gobierno, la que se vio debilitada, producto de la salida de dos partidos políticos. En diciembre de 2015, a casi un año de la reelección, el Vicepresidente Michel Temer, miembro del PMDB, envió una carta a la mandataria, manifestándole sus profundas diferencias y malestar por sentirse excluido de varias decisiones gubernamentales. Esta carta se filtró en los medios públicos, enterándose toda la población de las tensiones entre ellos. Entre los mensajes más fuerte y claros, había uno que decía: “pasé los primeros cuatro años en el cargo como vice ornamental. Usted lo sabe. Perdí todo el protagonismo político que tuve en el pasado y que podría haber sido útil para el gobierno (...). Fui un mero accesorio” (El Salvador, 2015). Dicha declaración dirigiría posteriormente las acciones de aquel partido. En marzo de 2016, el PMDB decidió retirarse de la coalición oficialista, declarándose “independiente”, dejando vacantes los ministerios con los que contaba, el único que continuaría al lado del gobierno sería Temer (Deutsche Welle, 2016). Junto con esta salida, se produce también la renuncia del PRB de la coalición, producto de los escándalos de corrupción que continuaban sobre el gobierno (Excelsior, 2016). Un mes después, en abril de 2016, el PP toma la misma decisión (La Voz de Galicia, 2016).

La salida, principalmente, del PMDB, fue un duro golpe para la mandataria, ya que había sido el principal aliado del PT desde 2003 y, además, contaba con una importante representación en el Congreso y una base ciudadana contundente, siendo el partido con la mayor cifra de militantes en el país (El Mundo, 2016). Al percibir que los costos de continuar en la coalición eran mayores que los de retirarse, el PMDB decidió abandonar el gobierno, no solo por la crisis económica evidente, sino también por los escándalos de corrupción que se habían destapado hace un tiempo, pero que de a poco iban acercándose a la mandataria (Deutsche Welle, 2016). Sumado a este contexto, surge nuevamente la figura de Eduardo Cunha, que en ese entonces ya estaba afianzado como líder en la Cámara de diputados. Cunha en 2015 presentó una petición de juicio político en contra de la presidenta, sin embargo, su petición no prosperó en ese momento, pero sí unos meses después. De acuerdo a algunos autores (Breda, 2016; Goldstein, 2016) Cunha fue un político hábil, e incluso lo han tildado de “zorro”, al colocar la atención en los errores de la presidenta y desviar las acusaciones que existían en su contra y que lo involucraban con el caso Lava Jato (Goldstein, 2016). De esta manera, sus acciones se enfocaron de ahí en adelante a lograr que Rousseff cayera, ya que tenía muy claro que su permanencia en el cargo dependía de aquello. Sin embargo, él no fue el único que pidió la realización del impeachment. En octubre de 2015 tres abogados brasileños, Hélio Bicudo, Miguel Reale Jr. y Janaina Paschoa, también buscaron la destitución de la mandataria, quienes recibieron apoyo de Cunha, la oposición política y movimientos sociales contra el Gobierno. (Lissardy, 2016).

Lava Jato, Lula y el comienzo del fin

Ese era el contexto político con el que terminó el 2015 y comenzó el 2016, y recién había pasado el primer año de su segundo gobierno. Si el apoyo político ya era deficiente, un hecho que agravó la situación fue lo ocurrido a principios de 2016, cuando la policía realizó una redada en casa de Lula en Sao Paulo, bajo las órdenes del Juez Moro, para ser interrogado por los casos de corrupción en la compañía petrolera Petrobras (Romero,

2016). Cabe recordar, que dos años antes, en marzo de 2014, se había generado el destape de uno de los casos de corrupción más grande que haya existido en la historia de Brasil, la famosa *Operación Lava Jato*. Uno de los primeros en caer, fue Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, quien con su testimonio hizo explotar el caso, ya que reveló una extensa red de corrupción que consistía en la adjudicación por parte de ejecutivos de Petrobras de diversos contratos de gobierno a empresas privadas, a cambio de enormes sumas de dinero que en parte se destinaban a sobornar a políticos, entre ellos a miembros del PT, PDMB y el PP (Cifuentes, 2015; Centro de Economía Internacional de Libertad y Desarrollo, 2015; Van Dyck, 2016). Esto produjo un efecto dominó, donde poco a poco fueron cayendo los involucrados. En febrero del 2015 fue detenido Joao Vaccari Neto, tesorero del PT y una de las personas más cercanas a Rousseff, por recibir sobornos y lavar dinero. Vaccari ya había sido investigado previamente por este mismo caso, sin embargo, conservó su puesto de gobierno, hasta que finalmente fue llevado a prisión preventiva, lugar donde aún se encuentra. Esto desató el malestar y la crítica de opositores al PT, por haberlo mantenido dentro del gobierno (BBC Mundo, 2015).

Como ya fue anunciado, a inicios de marzo de 2016, la fiscalía presentó una serie de cargos en contra de Lula por “presunto delito de blanqueo de dinero mediante ocultación de patrimonio y falsedad documental” (Paredes & Sevilla, 2016, pág. 2). A este hecho, hay que sumar uno anterior, ocurrido durante su propio mandato. El 2005 se destapó el caso *mensalao*, donde se comprobaron los constantes sobornos entregados por su propio partido político a legisladores, para conseguir su apoyo en las iniciativas llevadas a la Cámara alta (Paredes & Sevilla, 2016, pág. 3). Este último hecho, no afectó tanto a Lula, como el ocurrido el 2015, cuando se comprueba su vínculo con el sonado caso Lava Jato, donde habría aceptado sobornos por la constructora OAS y Odebrecht, empresas implicadas en el caso, que se verían reflejados en la entrega y remodelación de un departamento de lujo en Sao Paulo (La Nación, 2018). Esta situación lo llevó a prisión, donde se encuentra desde el 7 de abril de 2018 cumpliendo una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero (BBC Mundo , 2018).

Antes de que Lula llegara a la cárcel, la mandataria realizó una última estrategia política. A fines de marzo de 2016 Rousseff lo incorporó al gobierno, nombrándolo Jefe de la Casa Civil, o en palabras simples, Jefe de Gabinete, esto buscaba blindar a Lula ante la justicia, ya que, en Brasil, ministros, congresistas, vicepresidente y presidente, pueden ser juzgados solo por el Supremo Tribunal, y el Juez Moro, quien llevaba el caso de Lula, pertenecía a un tribunal inferior (Breda, 2016, págs. 13-14). Esto hizo que el caso casi de inmediato fuera traspasado a un Tribunal Superior competente para continuar con las investigaciones de aquellos políticos con fuero, además, logró frenar la toma del cargo por parte de Lula (Paredes & Sevilla, 2016), sin embargo, él realizó las funciones de manera informal, sin nunca desligarse de la mandataria (Camarotti, 2016).

Desde la oposición política hasta numerosos analistas consideraron aquel nombramiento como uno de los mayores errores cometidos por la mandataria, ya que dio una muy mala señal de querer obstruir la justicia, siendo que desde su primer mandato había tenido la precaución de desligarse de situaciones irregulares. Lo que plantearon en ese minuto partidarios del PT, es que Rousseff buscaba, con este hecho, recuperar el apoyo de la amplia base social que aún apoyaba a su antecesor, además, de conseguir el apoyo político en el legislativo para evitar su impeachment (Paredes & Sevilla, 2016, pág. 4) (Fuentes, 2016).

Lo que en concreto consiguió, no solo con el nombramiento, sino también con los hechos de corrupción en los que se vio envuelto Lula, Vaccari Neto e integrantes del PT, fue acrecentar el descontento, pero, sobre todo, la desconfianza en su gobierno y en la política y democracia en general. No es menor, que la administración de Lula se haya erigido como la regeneradora del progresismo y la transparencia en el país, además, de haber tenido una gestión donde incluyó de forma concreta a la sociedad civil, buscando afianzar la democracia brasileña (Pascual & González, 2006, pág. 11). Sin embargo, todos sus esfuerzos e intenciones se vieron, de una u otra manera, opacados producto de todas

las situaciones irregulares ya descritas. Logicamente, el desprestigio que envolvía de cerca a la mandataria, salpicó hacia su propia figura, desestabilizando aún más su gobierno.

Masivas protestas callejeras y una economía sin signos de mejora

Esta situación tuvo repercusiones en la sociedad civil, que desde el inicio de su segundo gobierno, comenzó a manifestarse. Además, de la falta de legitimidad política con la que tuvo que cargar Rousseff, su estrecho margen de votos con los que consiguió el triunfo, le jugaron en contra en términos sociales. A pesar de haber salido victoriosa mediante elecciones democráticas, dicha contienda nutrió y profundizó la polarización social que había comenzado a gestarse con las manifestaciones del 2013, e incluso con anterioridad a estos hechos (Breda, 2016). Apenas se dieron a conocer los resultados, los Estados del sur del país, más ricos e industrializados, con una población con mayores recursos, y que entregaron su apoyo al candidato de derecha Aécio Neves, comenzaron a manifestar en las redes sociales expresiones de racismo en contra de los ciudadanos del nordeste pobre y menos desarrollado, quienes entregaron un apoyo contundente a la candidata de izquierda. Dicha situación, acrecentó no solo las diferencias socioeconómicas entre los ciudadanos del norte y sur del país, además hizo que la polarización social, ya no solo tuviera este carácter, sino que también adquiriera ribetes políticos, manifestándose en las protestas callejeras que comenzaron a desarrollarse a favor y en contra del gobierno (El País , 2014; Goldstein, 2016).

Las manifestaciones continuaron, y se fueron haciendo más habituales a medida que los casos de corrupción continuaban apareciendo en la palestra pública. Fue así, como a partir de marzo de 2015 comenzaron a generarse grandes jornadas de protestas, donde las principales consignas estuvieron dirigidas con especial énfasis hacia la corrupción, pero no olvidaron manifestar su descontento por los crecientes problemas económicos que evidenciaba la población día a día, producto del crítico estancamiento económico e inflación en alza (Van Dyck, 2016, pág. 11). Si bien, existían demandas generales entre

los manifestantes, también quedaban de manifiesto notorias diferencias en sus peticiones. Entre los grupos sociales que se tomaron las calles, existían simpatizantes de Rousseff y su gobierno, que estaban totalmente molestos con la corrupción, pero defendían la inocencia de la presidenta (O Globo, 2016). Por otra vereda, estaban los grupos más acomodados, una clase media y alta, predominantemente blancos y con un nivel de escolaridad más alto, que dividía sus demandas entre un número minoritario que pedía abiertamente a las Fuerzas Armadas un golpe de Estado en contra del “gobierno comunista” (Breda, 2016, pág. 11; Betim, 2016), otros, pedían la remoción de Rousseff, y, por otro lado, se encontraba un grupo que rechazaba la idea de pasar a llevar una elección democrática. Sin embargo, la postura que fue tomando cada vez más fuerza a medida que se repetían las manifestaciones, se relacionaba con la idea de un *impeachment* en contra de Dilma, consigna principal de la clase media y alta del país (Breda, 2016, pág. 11; Lissardy, 2015). Sin embargo, también fue adquiriéndola la clase más baja, producto del descontento que generó en dicho grupo, las reformas económicas implantadas por el gobierno para apalea la crisis (Goldstein, 2016, pág. 97).

Entremedio de toda esta efervescencia social, debido a los enormes problemas económicos que aquejaban al país y para dar señales positivas a los sectores empresariales, y a los grupos sociales que se identificaban con sus principios, Dilma decidió “aplicar el programa de los perdedores”, lo que la presidenta creyó que operaría como un factor de estabilización política y económica para el país, ya que lograría tranquilizar a la oposición que se manifestaba tanto en el Congreso como en la calle (Goldstein, 2016, pág. 97). Esto se tradujo, primero, en la salida de Guido Mantenga del Ministerio de Hacienda, miembro del PT y con una mirada más bien desarrollista, de mayor participación económica y gasto social por parte del Estado, y la llegada de Joaquim Levy al cargo, un economista formado en la Universidad de Chicago con una marcada orientación neoliberal. Las medidas tomadas por el nuevo Ministro, buscaron reencaminar la economía, realizando duros ajustes al gasto fiscal, traduciéndose en recortes en educación, sanidad, vivienda y derechos laborales. (Bedinelli, 2015). Esto generó un clima de desconfianza hacia la

mandataria, tildándola de haber “roto sus promesas de campaña cuando adoptó medidas de austeridad como remedio para la deuda pública y la inflación” (Van Dyck, 2016, pág. 11), lo que generaría desgaste en la relación que durante tantos años había establecido el PT con la ciudadanía más empobrecida, los movimientos sociales y su apoyo a la izquierda. Esto, lógicamente se evidenció en las calles, perdiendo poco a poco aquel apoyo ciudadano que en un inicio de su mandato, todavía se manifestaba con fuerza.

Cabe recordar, que ya desde mediados y fines de 2015, existían intenciones de llevar a Rousseff a juicio político. Esta situación se acrecentó producto de los escándalos de corrupción que continuaron apareciendo en la palestra pública. El más relevante y que generó un giro en las movilizaciones, fue lo ocurrido con Lula a inicios de 2016, cuando la fiscalía decidió allanar su casa, situación que se agrava aún más, producto de la decisión de Rousseff de incorporarlo en su Gabinete. Esto hizo que las movilizaciones estallaran, pero ahora enfocadas en una principal demanda, el impeachment en contra de la mandataria (Van Dyck, 2016, pág. 11).

De acuerdo al diario O Globo (2016), no hay consenso en relación al número de manifestantes congregados en las manifestaciones, ya que según la Policía Militar fueron 3,6 millones de personas, los organizadores hablan de 6,9 millones, y si las cifras se concentran en la capital paulista, la Policía Militar estima alrededor de 1,4 millones y el Instituto Datafolha habla de 500.000 manifestantes. A pesar de las diferencias numéricas, existe un consenso en que fueron las mayores manifestaciones registradas durante el segundo mandato de la presidenta (O Globo, 2016). Protestas multitudinarias en las calles “con el objetivo de presionar a los legisladores indecisos para que votaran a favor del juicio político” (Van Dyck, 2016, pág. 11). Cabe decir que, si bien el mayor número de manifestantes se expresó en pos de aquella demanda, en estas mismas protestas se presentó un apoyo minoritario a Dilma, Lula y el PT.

Dichas manifestaciones se mantuvieron a lo largo de ese año, durante todos los meses que duró el proceso de impeachment en el Congreso, tomando fuerza en los días previos a los Juegos Olímpicos (julio de 2016). En la ciudad de Río de Janeiro, sede de los juegos, se concentraron los manifestantes, quienes desplegaron un enorme cartel con el mensaje “Fuera Dilma y prisión para Lula”, dicha situación se expandió hacia distintas ciudades, como Sao Paulo, Brasilia, Recife, Belo Horizonte y Salvador, repitiéndose el mismo fenómeno ya descrito; una considerable mayoría apoyando el impeachment y un grupo pequeño en contra de éste (Prensa Libre , 2016). Las demandas que tenía la ciudadanía, para ese entonces, si bien se enfocaban en el juicio político, su mensaje era más amplio, manifestando una indignación contra todas las élites políticas que acusaban de llenarse los bolsillos con dinero público mientras la población sufría los embates de la crisis económica (Van Dyck, 2016, pág. 12).

El impeachment

A pesar del mensaje entregado por la población en contra de todos los políticos y partidos del país, la responsabilidad cayó exclusivamente en contra de la mandataria, a través del impeachment, proceso que comenzó en la Cámara de Diputados el 17 de abril de 2016 (Breda, 2016, págs. 10-11; Bersezio, 2016). Después de casi 43 horas, la cámara baja votó a favor, con un total de 367 diputados (71,5%) de 513, más de los dos tercios que se necesitaban. Un mes después, el Senado también aprobó la realización del impeachment, con un total de 55 votos (67,9%) contra 22 y 4 ausencias, lo que significó que la mandataria quedara suspendida de su rol hasta que se resolviera la destitución definitiva, tomando el cargo de presidente interino Michel Temer (Bersezio, 2016; República, 2016)

El proceso podía durar 180 días máximo, desarrollándose entre mayo y octubre del mismo año, pero el Senado entregó una decisión final, el 31 de agosto, un par de meses antes de que se cumpliera el plazo. Con 61 votos a favor (75,3%) y 20 en contra, Dilma

Rousseff fue destituida (Bersezio, 2016, pág. 2). La causa central del resultado senatorial, para sorpresa de muchos, no tuvo relación con los escándalos de corrupción, sino más bien con la reiterada práctica usada por la mandataria, conocida como “pedalada fiscal”, esto es; tomar dinero prestado de un banco propiedad del gobierno para ocultar un déficit presupuestal (Taub, 2016), lo que, según se argumentó, habría agravado la crisis en la que estaba sumida la economía nacional. Si bien, dicha práctica se encuentra prohibida en Brasil, ha sido utilizada, no solo por Rousseff, sino por varios otros mandatarios, los que no fueron cuestionados y expuestos a un impeachment.

De acuerdo a las votaciones realizadas por los parlamentarios en este proceso, lo que plantea Olivarría (2017) en torno a esto, es que la dinámica definitiva que sepultó el gobierno fue el quiebre de la coalición oficialista y el abandono de la mayoría de los partidos del bloque, ya que, lo que se evidenció en los votos fue, no solo el término de la coalición, sino también el apoyo casi automático entregado por aquellos partidos al impeachment y el protagonismo que adquirió el PMDB en este proceso. Lo que se pudo observar entonces, fue “una rápida transición de un gobierno de mayoría a uno de minoría concluyendo en una destitución presidencial” (Olavarría, 2017).

Por otra parte, el impeachment ha generado polémica en relación a su veracidad, enfrentándose dos posturas opuestas, una a favor y otra que lo define como una maniobra política de aquellos sectores que querían la salida de la presidenta, tildándolo de un Golpe blando (El Desconcierto, 2016). “Amy Eric Smith, profesora adjunta de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Iowa, que se especializa en Brasil, dijo que los delitos: “No están a la altura del tipo de acusaciones que merecerían la destitución”, y añadió: “No es un uso legítimo del proceso de destitución” (Taub, 2016), sin embargo, la destitución se produce dentro de los márgenes de la democracia, pues quienes llevan a cabo el proceso son el Congreso Nacional y el poder Judicial, no las fuerzas militares (Van Dyck, 2016, pág. 19; Europa Press, 2015).

Las conclusiones a las que se han llegado, luego del juicio, es que la destitución no responde exclusivamente a las faltas cometidas por Rousseff, sino a un descontento generalizado de la ciudadanía, por los numerosos casos de corrupción, por la crisis económica que ha afectado su calidad de vida, características que trascienden a su gobierno, pero que se acrecientan en aquel período presidencial (Bersezio, 2016; Gestión, 2016; Taub, 2016).

Consideraciones finales

Como síntesis del proceso vivido por Rousseff durante sus periodos presidenciales, hay que partir situándose en enero de 2015, cuando llegó al poder por segunda vez. Dicho mandato comenzó mucho más débil que el anterior, producto de varios factores. Una de las dificultades se relacionó con la elección presidencial de 2014, donde los resultados la dieron como ganadora, pero por un estrecho margen con respecto a su contrincante. Esto le acarreó problemas, principalmente de legitimidad, que generaron consecuencias tanto en el plano social como en el político, convirtiéndola en una figura vulnerable.

Desde el punto de vista social, la ciudadanía estuvo más susceptible a cualquier hecho que le pudiese haber generado descontento, situación que se evidenció producto de la *crisis económica* heredada de su primer mandato. Las cifras positivas que pudieron observarse durante el gobierno de Lula, se mantuvieron a medias en su primer gobierno, pero en el segundo se derrumbaron, manifestándose en un crecimiento económico regular, una inflación creciente, y un alto desempleo, llegando a los dos dígitos el 2016. Esta situación, generó descontento en un grupo social más acomodado, la clase media, que fue apareciendo de forma cada vez más recurrente en las manifestaciones sociales, y que terminaron protagonizándolas, cuando salieron a la palestra pública, los mayores casos de corrupción que se habían vivido en el país, y que de forma indirecta vinculaban al gobierno de la mandataria.

Sumado a lo anterior, y producto de la cifras económicas deficientes, Dilma decidió buscar una solución a la crisis, la cual se enfocó principalmente, en reducir el gasto fiscal, afectando los programas sociales. Esto lógicamente, generó un malestar en la población más cercana a la mandataria, ya que los avances sociales que se habían iniciado con la primera presidencia de Lula y el PT, comenzaron a reducirse en este mandato, generando una pérdida de apoyo de las clases más desposeídas del país, que tradicionalmente, simpatizaban con el partido y su ideología.

Se puede concluir entonces que, lo ocurrido en términos económicos durante los mandatos de Rousseff, *crisis económica* más *políticas neoliberales*, hicieron que la polarización social, que se venía evidenciando desde su primer gobierno, se acrecentara durante este y se evidenciara con mayor fuerza a inicios del segundo, pero fuera disminuyendo con el tiempo, unificando, no absolutamente, pero si de forma considerable, a una población dividida. Esto además, se vio potenciado porque la sensación de bienestar que había mantenido la población más desposeída durante el primer mandato de Rousseff, fue disminuyendo a medida que las cifras de la inflación y el desempleo se disparaban.

Acá aparece un punto relevante de acuerdo a la literatura, ya que según lo planteado por autores como Pérez-Liñán (2008), el impacto de las manifestaciones aumentaría si más grupos sociales se incorporan. En el caso de este gobierno, la *clase media jugó un papel relevante*, al aparecer como un grupo social nuevo y protagónico en las manifestaciones y colocar en la opinión pública y como principal demanda ciudadana, el impeachment hacia Rousseff. Lo que impulsaría aún más dicha demanda, y la convertiría en el mensaje principal de las movilizaciones y de todos los grupos sociales, incluso de los que seguían apoyando a la presidenta, serían los *escándalos de corrupción* en los que se vio involucrado el gobierno.

Desde el 2011, su primer mandato presidencial, comenzaron a destaparse situaciones irregulares en las que personas cercanas a la presidenta se vieron envueltas.

Desde su Ministro jefe de la Casa Civil, pasando por su tesorero y otras autoridades, hasta llegar a inicios de 2016 a su mentor político y figura más cercana, Lula da Silva, quien fue acusado de estar involucrado en el caso de corrupción más grande vivido en Brasil, el caso Lava Jato. A partir de estos y otros hechos vinculados a la falta de probidad de autoridades y políticos brasileños, hay autores que han planteado la presencia de una corrupción endémica en Brasil, donde ha predominado una cultura de impunidad, situación que quedaría aún más respaldada con la acción llevada a cabo por la mandataria, de incorporar a pesar de las acusaciones, a Lula en su gabinete ministerial en marzo de 2016, hecho que no se concretó formalmente, pero si mantuvo, a pesar de todo, una relación cercana con el ex mandatario.

Lo que en un primer mandato le había jugado considerablemente a favor, desde ese minuto, la imagen de la presidenta se desmoronó, comenzando a ser encasillada dentro del mismo saco de autoridades corruptas y poco confiables. La acción tomada por la mandataria hizo que las demandas de los manifestantes, se unificaran en un mensaje claro y directo en contra de Rousseff y a favor del impeachment.

Esto último, se relaciona con otra idea planteada en la literatura por Pérez Liñan (2008), quien cuestiona el impacto de las movilizaciones sociales y se pregunta si en realidad es suficiente para una salida presidencial, que solo se produzcan protestas, respondiendo que no, pero si éstas poseen la característica de incorporar a *otros grupos sociales*, no solo los que habitualmente protestan, y de en conjunto exigir la salida anticipada de la presidenta, la situación se vuelve insostenible, consiguiendo su objetivo. Es decir, si las movilizaciones sociales incorporan a nuevos grupos y además, manifiestan un *mensaje concreto y directo en contra del mandatario* en cuestión (Edwards, 2015; Kim & Bahry, 2008), en este caso, Rousseff, y su salida del gobierno, lograrán más efectivamente su objetivo, elemento que, como ya fue planteado, fue totalmente visible en las manifestaciones brasileñas.

Si a este contexto ciudadano sumamos la pérdida de apoyo entre las élites políticas, se generaría la situación ideal para que se produjese una presidencia fallida. Aquí hay que dejar claro, que para autores como Pérez Liñan (2008) o Martínez (2017a, 2017b), el papel del Congreso resulta crucial en este tipo de circunstancias, cuando existe una ciudadanía organizada manifestándose de forma permanente, pero su objetivo no es el mismo a nivel legislativo, probablemente su influencia pierda relevancia. Para el caso brasileño fue posible observar una misma sintonía entre ciudadanía y poder legislativo, al tener como mensaje en común, la realización de un impeachment y la salida anticipada de la presidenta. Lo que tomó relevancia acá fue cómo el Congreso llegó a alinearse en contra de la mandataria y logró hacer efectivo el juicio político en su contra.

Tal como se planteó en un inicio, la mandataria comenzó su segundo mandato con dificultades en términos políticos. Primero, se observó una *fragmentación partidaria más alta* que en el gobierno anterior, producto de la llegada de nuevos partidos al Congreso, partidos, en su mayoría, de tendencia derechista, lo que dificultó la unión de aquellas fuerzas políticas en pro del ejecutivo, además de evidenciarse, un *aumento en el número de escaños de la oposición* y una disminución de las fuerzas oficialistas. Sumado a esto, la figura de la mandataria no representó lo mismo que en su primer gobierno, ya que el estrecho margen con el que ganó las elecciones, la hicieron bastante más vulnerable a los embates de cualquier tipo, lo que no generó un apoyo irrestricto a su mandato. Esta situación también dejó en evidencia, su falta de experiencia política, volviendo a aparecer las críticas en torno a su personalidad, más parca y menos conciliadora. Todo esto en conjunto hizo que, producto de las deficiencias observadas en sus gobiernos, partidos políticos que conformaban la coalición oficialista, como el PR y el PSB, que salieron en su primer mandato, así como el PRB, el PP y el PMDB continuaran con sus renunciaciones, *disminuyendo el poder y la influencia que le permitía tener dicha coalición en las fuerzas políticas del Congreso*. Tal como lo entendieron los presidentes que antecederon a Rousseff y también ella, durante su primer gobierno, el “presidencialismo de coalición” resulta fundamental para poder gobernar el país, situación que en algún minuto olvidó,

echándose encima fuerzas políticas bastante leales a los gobiernos del PT, pero que no pudieron sostener su compromiso durante su segunda presidencia. Una de las bajas más importantes se vivió a inicios de 2015 con la salida del PMDB, partido del Vicepresidente y también del Presidente de la Cámara de diputados y uno de los principales impulsores del juicio político, Eduardo Cunha, además de ser la fuerza política con mayores adherentes en el país y la más influyente en términos legislativos.

La pérdida de apoyo partidario, y la transición de un *gobierno de mayoría a uno de minoría* parlamentaria, quedó totalmente manifestado cuando se dio luz verde al impeachment, primero en la Cámara de diputados y luego en el Senado, procedimiento que llegó a su fin el 31 de agosto de 2016, cuando se decidió, a través de un controversial juicio, destituir a Rousseff y acabar con 13 años de liderazgo del PT en la presidencia (Bersezio, 2016).

Una vez cerrado el proceso inmediato en contra de la mandataria, y ya con un nuevo presidente a la cabeza, Michel Temer, resulta importante preguntarse por el último factor a analizar, el que se relaciona con la *Tradición democrática*, elemento que es necesario considerar en perspectiva. Primero, el factor *tradición democrática*, en este caso, si estuvo presente, si bien, el juicio político, todavía es criticado por un porcentaje importante de personas, tildándolo de “golpe de Estado” o de “golpe blando” (El Desconcierto, 2016; Europa press, 2018), la mayoría asumió el resultado como la mejor manera de frenar una situación crítica que estaba viviendo el país. Relacionado con lo mismo, cabe recordar que en algunas manifestaciones desarrolladas durante el segundo mandato de Rousseff se observó una postura de manifestantes bastante radical, que demandaban la vuelta de los militares al poder político (Breda, 2016), postura que no tuvo mayor apoyo ciudadano ni político, debido, principalmente, a la experiencia dictatorial que tuvo el país por 21 años, terminando recién en 1985.

El apoyo irrefutable que hoy tiene la democracia como el mejor o el menos malo de los sistemas políticos que existen, se ha planteado con bastante claridad en la literatura (Valenzuela, 1996; Mustapic, 2005; Mainwaring & Pérez-Liñán, 2005; Pérez-Liñán, 2008; Hochstetler, 2008; Valenzuela, 2008; Martínez, 2017), donde se explicita que la sociedad en general va a preferir la mantención de la democracia, a pesar de ciertos costos, que un cambio de régimen político. Esta situación pesó considerablemente en Brasil a la hora de buscar soluciones a la crisis y que para este caso, tuvo bastante sentido. El impeachment, pudo haber sido visto, como la mejor manera de mantener el orden político establecido, a pesar, de que quienes quedaron a cargo del gobierno, no fueron los ciudadanos más idóneos, sin embargo, se prefirió aquello que poner mayormente en riesgo al país. Sumado a esto, las acciones tomadas por la justicia, donde figuras políticas y económicas han terminado en el tribunal o en la cárcel, han reforzado la idea de que algo está cambiando en Brasil, puesto que dicha situación habría sido impensada hace 30 años atrás.

Todo esto da cuenta de que existe una institucionalidad que, de una u otra manera, funciona, puesto que se evidencia el accionar tanto del poder judicial como del Congreso, en pro de resolver el contexto de crisis que asechaba a Brasil desde hace un tiempo. Sin embargo, no sería correcto plantear que la institucionalidad funciona a la perfección, puesto que, si bien, se consigue instaurar una mayor estabilidad política, la forma y los mecanismos para lograrlo no fueron los más transparentes, sobre todo, porque la acusación en contra de la mandataria y que la llevó al impeachment, no tenía relación con los casos de corrupción, sino con una alteración del déficit presupuestal, acción que otros mandatarios ya habían realizado, pero nunca llegaron a ser cuestionados al punto de

CAPÍTULO V: EL CASO DE GUATEMALA

Con respecto a Guatemala y al gobierno de Otto Pérez Molina, los factores político-institucionales y también los de naturaleza social jugaron un importante papel en la salida del mandatario, a lo que se sumó un nuevo elemento, el rol de un organismo internacional. Con respecto a los primeros, los innumerables casos de corrupción en los que se vieron envueltos tanto el mandatario como autoridades cercanas a él, minaron considerablemente su prestigio. Esta situación se vio reflejada en la falta de apoyo que comenzó a manifestar la única cámara del Congreso, y que llegó a su máxima expresión, cuando los legisladores deciden por unanimidad quitarle la inmunidad, dejándolo expuesto a las decisiones de la justicia. Toda esta situación, se verá acrecentada por la enorme debilidad que presenta el sistema de partidos políticos guatemaltecos y también otras instituciones públicas, lo que abrirá un espacio para que un organismo internacional como la CICIG juegue un importante rol en esta presidencia fallida, rol que será apoyado por la ciudadanía a través de las numerosas y masivas movilizaciones callejeras pidiendo la renuncia del mandatario y de todos los políticos corruptos.

En las siguientes secciones se discute el contexto político, económico y social que antecedió al mandato de Pérez Molina y que permite entender con mayor claridad los factores que estuvieron presentes en su salida anticipada. Luego de esto, se realiza una descripción de los hechos que envolvieron su mandato presidencial y que fueron debilitando su figura. Finalmente, se presenta una reflexión final en torno a los factores que estuvieron presentes en dicha presidencia fallida y cómo se relacionan con lo que la literatura ha planteado en torno al tema.

Contexto político, económico y social

Al igual que Brasil, el contexto general del país guatemalteco, se verá influenciado por el paso de la Guerra Fría por la región Latinoamericana. La consecuencia más

relevante del proceso quedó en evidencia durante el gobierno de Jacobo Árbenz (1951-1954) cuando en 1954 Estados Unidos, junto con la élite económica local, decide dar un Golpe de Estado en contra del mandatario (Soriano, 2004, pág. 17), frenando todo el avance que se había hecho hasta ese entonces por convertir el Estado Policía de Guatemala en un Estado de derecho y un país con mayor democracia (Elías, 2014). La Operación Éxito, como se llamó a dicha intervención militar, trajo como consecuencia una larga cadena de dictaduras militares, además, generó una polarización social y política que llevó al desarrollo de una Guerra civil de casi cuatro décadas, desde 1960 hasta 1996. Esta situación, generó un clima de permanente represión, manifestada en asesinatos, refugiados, exiliados y la herencia de una población atemorizada (Ball, Kobrak, & Spirer, 2005). Además, hizo que las cúpulas políticas fueran manejadas por una élite militar, que acaparó también riqueza económica, por lo tanto, todo el poder se concentró de forma permanente en aquel grupo (Soriano, 2004, pág. 18). Todos estos hechos, mermaron considerablemente el buen funcionamiento del Estado, debilitando la mayoría de sus instituciones políticas, característica que, quedó de manifiesto principalmente, a través del rol preponderante que jugó un organismo internacional como la CICIG en la salida anticipada de Pérez Molina, demostrando, con este hecho, el carente funcionamiento de la institucionalidad propiamente guatemalteca.

La primera presidencia fallida de la vuelta a la democracia

El proceso de apertura política comenzó en 1985, cuando se vive en Guatemala, una nueva elección democrática, ganando el candidato de la Democracia Cristiana, Marco Vinicio Cerezo. Junto con la llegada de un gobernante civil a la presidencia, en 1986 se eligió una Asamblea Constituyente que redactó una nueva Constitución para el país (Villatoro, 2008). Quien sucedió a Vinicio Cerezo, fue Jorge Serrano Elías en 1991, primer mandatario en protagonizar un relevo democrático desde 1951 (Rodríguez, 2016). Serrano llegó al poder con apoyo de un débil partido político, Movimiento de Acción Solidaria (MAS), y con pocos escaños en el Congreso, situación que lo impulsó a gobernar

buscando una unidad nacional, que le permitiera llevar a cabo sus propuestas a nivel legislativo (Galicia, 2018). Con respecto a los derechos humanos prometió poner fin a los abusos en esa materia, promesa que no concretó, a lo que sumó un aumento en la violencia, la pobreza y una grave crisis económica, lo que generó la frustración y el descontento de la población.

El malestar hacia el gobierno se convirtió en falta de apoyo, tanto desde la ciudadanía como del Congreso, donde supuestamente había estado teniendo injerencia a través de un “tentáculo político” que habían conformado en ese poder, el partido político del presidente con la Unión del Centro Nacional (UCN) y la Democracia Cristiana (DC). A esto se sumó la apertura de una investigación en su contra por el aumento de su patrimonio (Galicia, 2018).

Todas estas presiones, llevaron al mandatario a anunciar por cadena nacional en mayo de 1993, la suspensión de la Constitución y la clausura del Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (Rodríguez, 2016). Además, restringió varias garantías individuales y censuró a la prensa. Lo que estaba llevando a cabo el mandatario era un golpe de Estado constitucional, más conocido como el “Serranazo” (Galicia, 2018), el cual tenía un enorme parecido a lo ocurrido en Perú con el “auto-golpe” llevado a cabo por Alberto Fujimori un año antes. Esta situación, sin embargo, no pudo ser sostenida, debido a la falta de apoyo político, debiendo dejar el cargo y el país días después. Esta fue la primera presidencia fallida que experimentó Guatemala pos dictaduras, y como ya se sabe, no ha sido la única.

Una sociedad pos conflicto: el legado del período autoritario

De ahí en adelante, los esfuerzos políticos se enfocaron en afianzar la paz e instaurar nuevamente la democracia en Guatemala y en construir una agenda con proyecciones a futuro con respecto a transformaciones políticas, sociales y económicas

tan necesarias para el país (ireness, 2007). El 29 de diciembre de 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, se firmaron los Acuerdos de Paz Firme y Duradera (Jaramillo, 2018, pág. 377; Lemus, 2015), terminando definitivamente con 36 años de Guerra civil.

A pesar del tímido avance que ha mostrado el Estado guatemalteco hacia la instauración de una plena democracia, es innegable que han existido progresos dirigidos hacia ese objetivo. En términos legislativos e institucionales por primera vez en la historia de este país se cuenta con una Constitución legítima por 33 años y con una permanencia en el tiempo de procesos electorales transparentes. Además, se ha avanzado en la apertura de espacios para el diálogo entre el Estado y la sociedad civil (Balcárcel, 2011) (Salvadó, s.f). En el ámbito económico, Guatemala ha suscrito diversos acuerdos de libre comercio, constituyéndose como la novena economía a nivel latinoamericano, y la primera de Centroamérica, resaltando por tener uno de los mejores desempeños económicos de la región (Banco Mundial , s.f), sin embargo, también presenta carencias, estancamiento y trabas para entenderlo del todo como un Estado de derecho (Salvadó, s.f) (Balcárcel, et al. 2011) (Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, 2014).

Las deficiencias que aún presenta el país, son producto en parte, de las consecuencias que generó el conflicto de casi cuatro décadas, no siendo casualidad que analistas e investigadores, continúen hablando de una sociedad pos conflicto (ireness, 2007; Azpuru, y otros, 2007). Los legados de aquel período, dejaron un país inestable, donde se evidencia cada vez más una pérdida de gobernabilidad, lo que hace la labor del Estado cada vez más compleja, producto de la desconexión que durante años tuvo el Estado con su población, y que ahora se traduce en la poca cercanía que siente la ciudadanía hacia este y viceversa (Balcárcel, 2011, pág. 14). Teniendo un Estado débil, las repercusiones que acarreará hacia otros aspectos, resulta casi inevitable. Los problemas que existen hoy en el país van desde el aspecto político-institucional hasta temas sociales. En el aspecto político aún existen grupos de poder que se mantienen reacios a apoyar cambios estructurales que superen las desigualdades e injusticias, teniendo bajo su control

los límites y alcances de las transformaciones. Esto se evidencia en que se mantiene una influencia importante de la élite castrense en el poder político, generándose un estado intermedio entre el autoritarismo y la democracia (Torres-Rivas, 2006). Además, las instituciones que deben ser garantes de paz, justicia y democracia, no funcionan correctamente, pues están al acecho de las élites poderosas que no permiten su accionar de forma autónoma e imparcial (ireness, 2007). Esto queda de manifiesto en que las prioridades del Estado siguen enfocadas en aspectos como el gasto bélico, dejando de lado su preocupación por temas sociales, lo que repercute, por ejemplo, en la carente cobertura escolar, insalubridad, altos índices de mortalidad e inseguridad social, aumentando la violencia y el crimen organizado, (Villatoro, 2008, págs. 135-136; ireness, 2007) hechos que desprestigian aún más la imagen del Estado

El sistema de partidos guatemalteco

Esta deficiencia institucional, también es posible reconocerla en el sistema de partidos políticos que presenta Guatemala, el cual se encuentra altamente fragmentado, llegando a tener una de las bases institucionales más débiles de América Latina (Ambrus, 2017). Dicha característica se refleja, por ejemplo, en la frecuencia con que se crean y se desintegran partidos políticos, siendo bastante habitual que pocos participen en más de dos eventos electorales y, además, en su mayoría, inician su declive tras ocupar la presidencia. Si bien existe una alta cantidad de partidos políticos que habitualmente participan de las elecciones, el número de los que llegan a ser relevantes a tenor de sus resultados electorales o parlamentarios es mucho menor (Martínez M. d., s.f, pág. 16). Todo esto se manifiesta, además, en que la antigüedad promedio de cada uno de ellos, es de solo seis años (Brolo, 2012, pág. 43).

La debilidad partidaria, se manifiesta también, en que la mayoría no tiene un sustento ideológico o proyecto político afianzado, lo que genera repercusiones en las coaliciones que se intentan conformar, ya que dicha alianza no tendrá argumentos de peso

para mantenerse, quedándose unidos por intereses personales o adquisición de recursos (Brolo, 2012, pág. 50). Esto vuelve muy habitual que se produzca el tránsito de los legisladores de uno a otro partido político durante su carrera, siendo bastante volátil su militancia. Dicha característica se ha definido como “transfuguismo parlamentario”, y que se produce, cuando un legislador evalúa los costos y beneficios de pertenecer a cierta bancada en determinado momento y decide colaborar en una u otra sobre la base de cuál le permite obtener una mejor renta, entendiéndola como las ganancias generales que saca de aquella decisión (Fortin, 2010, pág. 163) .

Lo que queda en evidencia acá, es que los partidos políticos no representan las preferencias de la mayoría de los votantes, sino el interés de grupos de poder que los financian, quedando excluidos sectores importantes de la población en la representación y toma de decisiones. Esto a su vez, ha generado un enorme distanciamiento entre los partidos y la ciudadanía que no se siente identificada, quedando de manifiesto en que ninguno de ellos ha logrado ocupar dos veces la presidencia (Ambrus, 2017).

Todo esto en su conjunto hace que se genere una pérdida de confianza e incluso rechazo y falta de credibilidad en las instituciones y en el sistema político en general (Ambrus, 2017). Sin embargo, y aunque parezca paradójico, la mayoría de la población piensa que los partidos políticos son necesarios, prefiriendo su existencia para el buen funcionamiento democrático (Martínez M. d., s.f, pág. 21).

Esto también se ve reflejado en la inestabilidad de los gobiernos, los cuales buscan alianzas políticas con el objetivo de mantener la gobernabilidad del país, pero que, al ser tan frágiles, producto de todo lo anteriormente mencionado, se rompen con mucha facilidad, afectando la estabilidad general del país.

Guatemala, una democracia no consolidada

Todas estas características permiten definir a Guatemala como una democracia aún no consolidada, coincidiendo con varios índices que miden empíricamente los avances democráticos en el país. De acuerdo a la medición de Polity IV, Guatemala ha evidenciado desde los 90 en adelante un avance importante, pasando de 3 puntos en 1994 a 8 el 2003, considerando como puntaje máximo 10. El incremento en las cifras coincide con dos relevantes sucesos ocurridos en el país, los acuerdos de paz firmados en 1996 y la incorporación al sistema de partidos políticos de los grupos guerrilleros que lucharon durante la Guerra civil (Azpuru, y otros, 2007, pág. 549). Sin embargo, de ahí en adelante se ha generado un estancamiento con respecto al desarrollo democrático, quedando la cifra estancada en 8, considerándola como una democracia, pero no de las mayormente consolidadas (Mizrahi, 2018).

De acuerdo a Freedom House, otro índice de medición, Guatemala se ubica dentro de los países “parcialmente libres”, entregándole 4 de los 7 puntos totales (Freedom House, 2018b). Por último, el índice de democracia entregado por The Economist, posiciona al país con un puntaje de 5,81 de 10, calzando con la denominación de “régimen híbrido” y faltando para alcanzar a aquellos con democracias plenas (Hola Chamy, 2015).

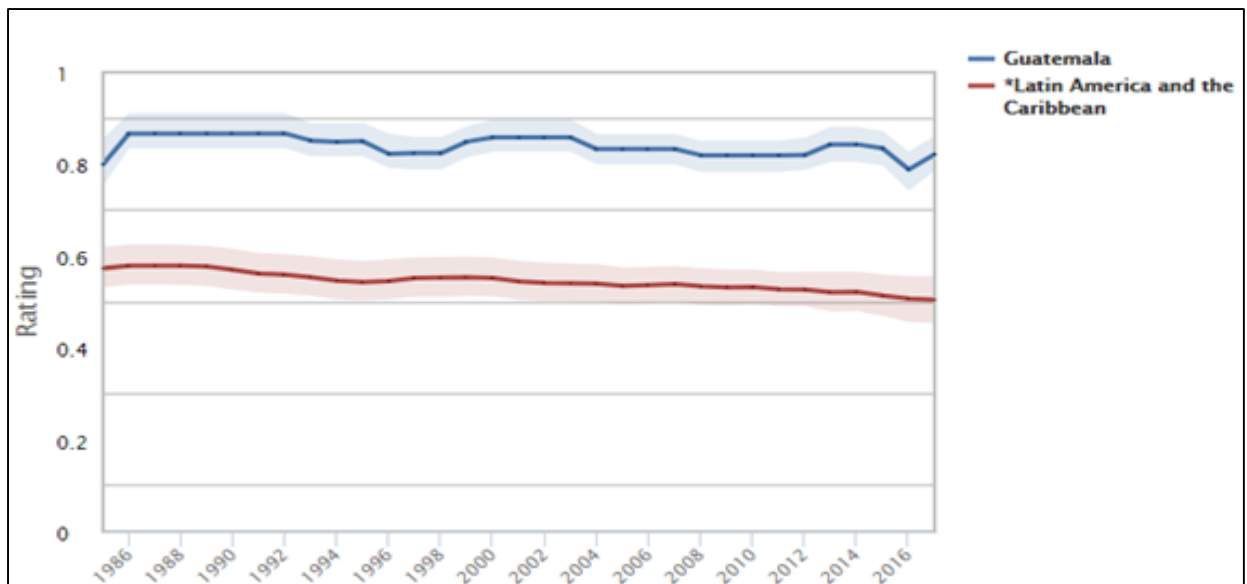
Definir a Guatemala con las denominaciones de democracia (Polity IV), democracia parcialmente libre (Freedom House) y régimen híbrido (The Economist) significa que, a pesar de los esfuerzos y avances, sobre todo, en las características de sus procesos electorales, que se definen como periódicos y libres, aún existen deficiencias en el Estado de derecho que se pretende construir, manifestado en un débil sistema judicial, el cual no logra funcionar de manera independiente al Gobierno de turno o a influencias externas, la presencia de crimen organizado y una fuerte corrupción tanto de empresarios como de políticos, y una alta violencia social que no logra ser controlada con los recursos judiciales que ofrece el país, lo que lógicamente abre una brecha para que se aproveche la

débil institucionalidad para fines personales (Hola Chamy, 2015; Berzaín, 2015; Freedom House , 2018).

La presencia permanente de la corrupción política

Con respecto a los mandatarios que ocuparon la presidencia de Guatemala, uno que de 1996 en adelante, se encuentran una diversidad de perfiles. Desde Álvaro Arzú (1996-2000) quien llega al poder post acuerdos de paz, hasta el gobierno de Álvaro Colom Caballeros, antecesor de Otto Pérez Molina, todos, desde sus propios partidos políticos e ideologías, aportaron al desarrollo económico y social del país, sin embargo, la mayoría de ellos, de una u otra manera, estuvieron envueltos en escándalos de distinto tipo; lavado de dinero, financiación ilícita, malversación de fondos públicos, llegando incluso algunos, a prisión. (Pocasangre, 2018; Soy502, s.f; El Salvador, 2018). Esta situación de alta corrupción política, queda de manifiesta en el siguiente gráfico (Vareties of Democracy, 2018):

Gráfico 4:
Corrupción política (1986 – 2016)



Desde la vuelta a la democracia, se evidencia un alto nivel de corrupción política, característica que se mantiene hasta la actualidad, con cifras que sobrepasan el promedio de América Latina.

El nacimiento de la CICIG

A pesar de estas situaciones negativas, también hubo esfuerzos para que la corrupción y el abuso se acabaran en el país. Ese fue el caso del expresidente, Óscar José Rafael Berger, quien el 2006 firmó un acuerdo con la ONU, para establecer en Guatemala una Comisión Internacional contra la Impunidad, más conocida por sus siglas CICIG. El objetivo de esta organización, era entregar apoyo a la Fiscalía, la Policía Nacional Civil y otras instituciones estatales encargadas de investigar delitos, además de ayudar a fortalecer las instituciones judiciales, fuertemente intervenidas por poderes externos. El organismo, una vez instalado en Guatemala el 2007, se centró en combatir la corrupción dentro del Estado, que de acuerdo a su diagnóstico, estaría enquistada en todo el aparato estatal y afectaría de forma significativa y expansiva a la clase política. Esto frenaría, “todo esfuerzo por convertir a Guatemala en un Estado moderno y democrático” (Galicia, 2016).

La iniciativa de aquel mandatario, no solo nació de su propia voluntad, sino también fue incentivado o presionado por el contexto país, y específicamente, por la lucha que durante años estuvieron dando algunos fiscales nacionales, por conseguir mayores cuotas de transparencia y efectividad en su labor (Ambrus, 2017). Sumando a esto, en el gobierno de Óscar Berger, se cumplían diez años de la firma de los acuerdos de paz de 1996. Dentro de los diversos puntos establecidos en ese proceso, uno de ellos se enfocaba en la lucha que daría el Estado guatemalteco por combatir a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, logrando garantizar, con esto, el resguardo de los derechos humanos de todos sus ciudadanos (WOLA, 2006). Esto, hasta antes de la implantación de la CICIG, no estaba ocurriendo, quedando en evidencia las enormes deficiencias que todavía presentaba el Estado frente a esta y otras materias. Los diez años desde el término

de la Guerra civil, generarían una presión sobre el ejecutivo, a quien no solo lo observaban sus ciudadanos, sino también la ONU y los miembros de la UE, quienes entregaron su apoyo para que lo establecido en los acuerdos se hiciera efectivo (Parlamento Europeo, 2007).

De la mirada de la CICIG, no quedará impune el ex presidente, Otto Pérez Molina, quien gobernó Guatemala entre 2012 y 2015, y al igual que los anteriores, también se vio envuelto en escándalos de corrupción, obligándolo a renunciar y terminar su mandato antes de tiempo (Malkin, 2018).

Otto Pérez Molina: El perfil de un militar outsider de la política

Pérez Molina nació el 1 de diciembre de 1950 y en 1966 se integró a la Escuela Politécnica como Cadete, vinculándose desde los 15 años con las Fuerzas Armadas y específicamente, con la milicia. En 1973 se integró al ejército, recibiendo una vasta formación técnica. Durante los años de Guerra Fría, estudió, al igual que muchos otros uniformados, en la Escuela de las Américas y también pasó por el Inter- American Defense College en Washington, D.C, lugares donde aprendió tácticas de contrainsurgencia, inteligencia y estrategia militar (De los Reyes, 2011; Prensa Libre, 2015; Ortiz de Zarate, 2016).

Cuando comenzó su carrera política, fue tildado de haber estado involucrado entre los años de Guerra civil, en la violación a los Derechos Humanos, siendo de sus mayores opositoras la activista indígena y excandidata presidencial Rigoberta Menchú, quien acusa a Pérez Molina directamente de "aniquilar a las comunidades mayas" de Guatemala (De los Reyes, 2011) acusación que el mandatario desmintió categóricamente, enfatizando que los objetivos de su labor estuvieron dirigidos a organizar la seguridad de las fuerzas militares y rescatar a la población civil de la guerrilla (Ortiz de Zarate, 2016c). Tenía en

ese tiempo, hombres bajo su unidad, a los cuales, de acuerdo a sus declaraciones, siempre ordenó respetar la ley y a los civiles.

En 1983 jugó un papel importante dentro del Ejército, al dirigir a un grupo de oficiales jóvenes en contra del general Efraín Ríos Montt, quien se había autoproclamado Presidente de la República, y que luego será sacado del poder por un golpe en su contra (Gunson, 2018). En 1993, cuando ejercía el cargo de jefe de los servicios de inteligencia del Ejército, se opuso al autogolpe de Estado, llevado a cabo por el expresidente Jorge Serrano Elías. Ambos hechos, fueron sumamente relevantes para instaurar y proteger la vida democrática, por esto, ese mismo año Pérez Molina fue declarado por la Cámara de Libre Empresa de Guatemala, como uno de los diez líderes más relevantes y por Prensa Libre como uno de los 10 personajes del año (Prensa Libre, 2015; Alvarado, 2015). Sin embargo, el momento cúlmine en su trayectoria militar, ocurrió en 1996, cuando representó al Ejército de Guatemala en los Acuerdos de paz firmados con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), representante de las fuerzas guerrilleras del país, los cuales pusieron fin al conflicto armado de 36 años (Ortiz de Zarate, 2016; Alvarado, 2015). Cuatro años después de este suceso, Pérez Molina se retiró del Ejército, sin antes recibir la Cruz del Mérito Militar, la máxima condecoración castrense, por los servicios prestados.

A partir del año 2000 buscó “llevar a la práctica un proyecto personal que venía acariciando desde hacía tiempo: entrar en la política profesional al frente de su propia agrupación” (Ortiz de Zarate, 2016c, pág. 7). El 2001, fundó el Partido Patriota (PP) junto a Roxana Baldetti y el 2002 fue inscrito formalmente ante el Tribunal Electoral. Los principios de dicho partido, estaban orientados claramente al conservadurismo, sin embargo, se diferenciaba de otros como el Partido Republicano Institucional (PRI) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) que conformaban ese espectro político, porque presentaba un discurso tradicional y multclasista, basado en ideas como la protección de la patria y la mantención de la ley y el orden, siendo considerado por algunos, como de

extrema derecha (República, 2015). A pesar de aquellos postulados, el PP era considerado como un partido nuevo, recién entrando en el espacio político y con diversos conflictos internos producto de la diversidad de sus integrantes (Solano, 2012, pág. 6).

Entre 2004 y 2008, Pérez Molina ocupó en el Congreso unicameral de Guatemala, y en 2007 se lanzó por primera vez a la presidencia. Si bien, logró llegar a segunda vuelta, fue derrotado por el candidato de centro-izquierda, Álvaro Colom, sin embargo, esto le ayudó para reforzar el apoyo hacia su partido político y hacia sí mismo.

Posterior a este hecho, Pérez, comienza inmediatamente a preparar su segundo golpe para las elecciones de 2011. Esta vez, otra sería la historia. Basado en su binomio electoral, con su vicepresidenta, Roxana Baldetti, logra ganar la presidencia, con una votación del 53,74%, derrotando al empresario y abogado Manuel Baldizón, del partido Libertad Renovada Democrática (LIDER), de centro-derecha, quien logró el 46,26% de los sufragios (La Información, 2016).

En las elecciones legislativas, el PP de Pérez Molina se convirtió en la primera fuerza del Congreso con una mayoría simple de 56 escaños, ocho más que la lista conjunta de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de centro-izquierda y Gran Alianza Nacional (GANAN), hoy partido Crecer, de centro-derecha, la cual apoyaba al candidato opositor. Esto, si bien, era un triunfo, no le permitía al mandatario tener la mayoría absoluta, por lo que tendría que conseguir apoyos legislativos de más de un partido (Ortiz de Zarate, 2016c). El Congreso, en definitiva, quedó conformado por dos bancadas mayoritarias, una compuesta por el PP y la otra por el partido LIDER, que si bien, aún no establecían una alianza de forma oficial, ambos tenían intereses bien parecidos, sobre todo, al estar vinculados estratégicamente con las cúpulas militares y el empresariado (Solís & Oliva, 2015).

Gobierno de Otto Pérez Molina (enero 2012- septiembre 2015)

En su discurso inaugural, Pérez Molina planteó que había heredado un país en crisis, afectado por problemas económicos, desorden administrativo y financiero, una corrupción masificada y un manejo de las políticas públicas de carácter clientelista y populista, por lo tanto, él se encargaría de superar esas dificultades (Ortiz de Zarate, 2016c).

Durante los meses previos a la elección y también en su mandato, el candidato, conocido como “*el General*”, se encargó de reforzar sus propuestas programáticas, las cuales se caracterizaron por tratar de incorporar amplios contenidos, sobretodo de carácter económico, social y también temas de seguridad. De hecho, su eslogan de campaña fue “Seguridad y empleo con Otto Pérez se puede lograr”, utilizado, no solo para su postulación el 2011, sino también para las elecciones de 2007, lo que manifiesta las prioridades en sus objetivos (Prensa Libre, 2015).

Primeros meses en el gobierno: Tolerancia cero en contra de la corrupción y la violencia social

De acuerdo a lo anterior, propuso un plan sobre Seguridad y Justicia, donde reforzó lo necesario que era para el país, conseguir una disminución de la violencia e inseguridad que, de acuerdo a cifras oficiales, se ha ido incrementando a lo largo de los años (Ortiz de Zarate, 2016c; Solano, 2012). Con ese objetivo en mente, reforzó la idea de implantar *mano dura* contra corruptos y violentos, y para eso creó dos fuerzas policiales encargadas de prevenir secuestros y femicidios, además de realizar algunas reformas en el sistema judicial, para que los delitos no continuaran quedando impunes (La Razón, 2011). También buscó reducir el narcotráfico través de métodos menos convencionales. Fue enfático en plantear su apoyo a la despenalización de algunas drogas, con el objetivo de reducir su tránsito y la violencia que genera la clandestinidad, proyecto que no logró concretar (Ortiz de Zarate, 2016; Prensa Libre, 2015). Importante enfatizar que en el

discurso del mandatario siempre estuvo presente su afán de justicia en contra de todos los corruptos y criminales, fuera quien fuera, lo que significaba, que si existían militares involucrados en algunos casos, no dudaría en castigarlos al igual que a cualquiera (Solano, 2012, pág. 10).

Promesas de mayor crecimiento económico y mejoras sociales

Otro ejemplo importante de su agenda programática fue lo relacionado con la economía. Pérez Molina buscó fortalecer la imagen de Guatemala como un país confiable para la inversión tanto nacional como extranjera, situación que podría llevar a la generación de mayores empleos y lograr la promesa de crecimiento con la que el presidente se había comprometido, de un 4 % o un 5% anual. Además, pretendía, con una mejora económica, aumentar las condiciones de vida de la población más vulnerable, a través de diversos programas; *Pacto Hambre Cero*, ayudar a madres o padres solteros que no tuvieran los recursos económicos para alimentar a sus hijos, el Estado se encargaría de su nutrición; *Desarrollo rural sostenible*, para que el bienestar también llegara al campo (Ortiz de Zarate, 2016c).

Como es posible observar, los compromisos adquiridos por el mandatario no eran simples de realizar, por eso, se generó una relación ambivalente con su gobierno. Por una parte, se entendió su triunfo como la incapacidad de los civiles de mejorar las áreas estratégicas del país, y se tuvo confianza en que un ex militar, sabría con mayor precisión qué hacer, sobre todo, en temas de seguridad, además, de ser una señal potente de madurez y reconciliación. Por otra parte, se tenía desconfianza, especialmente desde el sector de izquierda, de las medidas que se implantarían y que podrían afectarlos directamente (De los Reyes, 2011).

Inicios de protestas en contra del presidente

Otro de los temas polémicos durante el gobierno de Pérez Molina, tuvo relación con las protestas que comenzaron a surgir a los pocos meses de llegar a la presidencia. La primera fue realizada en julio de 2012 por un grupo de estudiantes, molestos por un plan de reforma educativa impulsado por el gobierno. El malestar se manifestó hacia Cynthia del Águila Mendizábal, Ministra de Educación y Mauricio López, Ministro de Gobernación, quienes fueron atacados por los manifestantes. Pero ésta no fue la más preocupante y violenta. En octubre del mismo año, los pobladores, la mayoría indígena, de la provincia de Totonicapán se movilizaron y cortaron la carretera interamericana por la subida del precio de la electricidad y otras medidas de desregularización en los valores de los servicios básicos. La respuesta del gobierno fue de bastante represión, resultando seis campesinos indígenas muertos (El Nuevo Diario , 2012). Esto no pasó desapercibido para los defensores de los Derechos Humanos, quienes a través del procurador y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, condenaron los hechos y dejaron a Pérez en una situación delicada (Agurto, 2012).

¿Buen primer año de gobierno?

A pesar de esto, el balance realizado por el mandatario en su primer año de gobierno fue positivo, destacando una disminución histórica de las cifras de muertes violentas, tasas de homicidios, femicidios y secuestros (Ortiz de Zarate, 2016c), aunque, reconoció que aún falta avanzar en materias como la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, que se encuentran arraigados en instituciones del Estado y también en la sociedad (Publinews, s.f) Las cifras oficiales también avalaban al mandatario. Un sondeo realizado a inicios de su segundo mandato posicionaba a Pérez Molina con un 70 % de aprobación (El Tiempo Latino, 2013), además, hubo una reducción de los asesinatos violentos y una estabilidad económica, hechos que entregan al país una sensación de mayor seguridad. Sin embargo, si se profundiza en los temas, se evidenciarán las falencias que todavía presentan. En términos de violencia, si bien hubo un descenso en los

homicidios registrados, estos fueron hechos con mayor saña y brutalidad. Por el lado económico, todavía no se entiende la incongruencia entre el bienestar de la economía, y la pobreza en la que vive más del 52% de la población (Publinews, s.f). Por lo tanto, pareciera ser que los temas de fondo aún no son abordados por el gobierno, crítica que algunos analistas locales, ya han expuesto en los medios (El Tiempo Latino, 2013).

La creciente importancia de la CICIG

A pesar del esfuerzo realizado por el presidente por mostrar la mejor cara de su mandato, a inicios de 2013, se vio nuevamente envuelto en una situación delicada. Gracias al aporte que venía haciendo la CICIG desde el 2007 en materia judicial, transparentando estos espacios para la realización de investigaciones serias y responsables (CMI, 2015), y en alianza con el Ministerio Público, se logró ese año, la apertura de un juicio en contra de Efraín Ríos Montt, ex dictador de Guatemala entre los años 1982 y 1983, y considerado como uno de los gobernantes “más sanguinarios de América Latina” (Elías, 2018). Durante las investigaciones apareció un testigo llamado Hugo Ramiro Leonardo Reyes quien vinculó a Pérez Molina con aquella dictadura, al describir el papel jugado por el mandatario, a través de su seudónimo *Tito Arias*, en las matanzas a población civil durante ese período. La acusación no era ligera, sobretodo porque el testigo interrogado trabajó con Pérez Molina, sirviendo a una unidad del cuerpo de ingenieros del Ejército (Ramos, Valdez, & Vásquez, 2013). Lo que ocurrió después, afectó aún más al mandatario. Ese mismo año Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad, sin embargo, debido a ciertas “irregularidades” en el proceso el poder judicial anuló la sentencia, hecho que generó un sin número de detractores y declaraciones al respecto (Elías, 2013).

Diversas asociaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos plantearon que durante el juicio existieron trabas de tipo procesal, presión política y de toda índole, para evitar que el proceso se hiciera transparentemente. Por otra parte, de acuerdo a

declaraciones entregadas por el periodista estadounidense Allan Nairn, la decisión de suspender el proceso, se hizo producto de la presión directa del gobierno guatemalteco, para evitar que la investigación llegara hasta el mandatario (Rodríguez, 2013). Nairn fue uno de los testigos citados a declarar, quien al igual que Hugo Leonardo Reyes, involucró a Pérez Molina, al reconocer que, en la época de la dictadura de Ríos Montt, entrevistó a un ex general, llamado Tito, el que dirigía las operaciones del Ejército en contra de la población indígena (Ortiz de Zarate, 2016c). De acuerdo al periodista, “la decisión de suspender el proceso fue técnicamente tomada por un tribunal de apelaciones, pero detrás de ella se encuentra la intervención secreta del actual presidente de Guatemala, como también las amenazas de muerte contra jueces y fiscales hechas por asociados del ejército” (Rodríguez, 2013). Dichas declaraciones fueron totalmente desmentidas por el mandatario, sin embargo, dejaron dudas instaladas sobre su veracidad, debilitando su imagen ante la opinión pública y la ciudadanía (Pérez, 2013).

Primeros roces entre el gobierno y la CICIG

Las situaciones ya descritas no fueron las únicas de ese tipo, puesto que la CICIG descubrió un nuevo escándalo, pero ahora vinculado a la **corrupción de funcionarios públicos**. En septiembre de 2014, el ex capitán del Ejército, Byron Lima Oliva, fue condenado a 20 años de presidio por el brutal asesinato del obispo Juan José Gerardi Conedera en 1998. Lima Oliva en uno de los interrogatorios mencionó el nombre del Ministro de Gobernación de Otto Pérez Molina, Héctor Mauricio López Bonilla, el cual habría estado liderando una red criminal que operaba en las cárceles y que se dedicaba a extorsionar a reclusos y traficar drogas. Resulta importante mencionar, que Pérez Molina y Mauricio López siempre tuvieron una estrecha relación, ambos fueron parte del Ejército durante los años de guerra civil, además participaron de los acuerdos de paz en 1996 y cuando Pérez Molina lanzó su candidatura presidencial el 2011 pidió ayuda a Bonilla convirtiéndolo en su jefe de campaña (Ortiz de Zarate, 2016; Dudley, 2016). Por lo tanto,

aquel testimonio pesaría en la hoja de vida no solo del Ministro, sino también del mandatario, sobre todo, porque no sería el único caso en el que estaría involucrado.

El 16 de abril de 2015 fue destapada otra situación irregular, cuando nuevamente la CICIG junto al Ministerio Público revelaron una enorme red de defraudación aduanera por parte de funcionarios del Servicio de aduanas y de la Superintendencia de Administración Tributaria, los cuales falsificaban documentación de bienes importados, y con esto ganaban una suma gigantesca, más o menos el 25 % del dinero estafado al fisco, por sobornos de empresarios que pagaban un menor valor de lo establecido por la ley en aranceles. A este caso se le llamó *La Línea*, y se descubrió, en una primera instancia, que la cabeza del fraude era el secretario privado de la vicepresidenta Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, el cual inmediatamente descubierto, fue sacado de su cargo (Elías, 2017; Ortiz de Zarate, 2016). Esto generó repercusiones en los miembros del partido oficialista, sobre todo, en el ya elegido precandidato presidencial, Alejandro Sinibaldi, figura política fuerte del PP, quien días después del escándalo renunció a su candidatura y al partido, buscando no ser vinculado con aquellas situaciones (Contreras & Patzán, 2015). De acuerdo a declaraciones de Édgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales (Ipnusac) y Óscar Vásquez, analista político y director de Acción Ciudadana, la dimisión de Sinibaldi terminó por hundir el proyecto del PP, puesto que su decisión refuerza los señalamientos de corrupción ya mencionados, lo que quita al partido toda viabilidad para mantenerse como una alternativa política seria (NODAL, 2015).

“Tira y afloja” entre el presidente y la CICIG

A esto se sumó una situación bastante polémica protagonizada por el presidente. Justo durante su mandato le correspondió corroborar dos veces la permanencia de la CICIG y permitir con esto, que siguiera funcionando en el país, permanencia que cada dos años debía ser renovada. La primera vez fue el 2013, donde el mandatario se mostró a favor de la organización, reconociendo la necesidad de mantenerla en el país para lograr

fortalecer las entidades encargadas de impartir justicia en Guatemala y conseguir la solidez institucional necesaria (El Mundo, 2012), actitud que cambió dos años después. El 2015, cuando se cumplió el nuevo plazo, el mandatario se mostró indeciso, incluso meses previos al vencimiento, ya había dado por concluidas las labores de aquella organización (Bermúdez, 2015). Según sus disidentes, lo que frenaba a Pérez Molina eran los diversos casos de corrupción ya conocidos, que podrían terminar exponiéndolo directamente ante las investigaciones que pudiese llevar a cabo la CICIG. Para protegerse de las consecuencias políticas que tendría su decisión, pidió al presidente de la Corte Suprema, al fiscal general y al Ministro de Gobernación, López Bonilla, que crearan una comisión con el objetivo de investigar y analizar el desempeño de la organización durante los años de permanencia en Guatemala (Dudley, 2016). En una declaración entregada en medio de las investigaciones, planteó lo siguiente:

“Yo no tengo miedo que me investigue, no tenemos ningún temor, es una serie de mentiras y falsedades, lo que quieren hacer es presionar, pero no me voy a dejar chantajear, no voy a dejar que se me imponga porque -la continuidad de la CICIG- es una decisión soberana” (Pocasangre, 2015).

Finalmente, a inicios de mayo de 2015, Pérez terminó por aceptar su continuidad, producto, principalmente de las presiones externas realizadas tanto por Estados Unidos, país que más recursos ha aportado al funcionamiento del organismo en Guatemala, así como por Noruega, Canadá, Suecia y la Comunidad Europea (Bermúdez, 2015). Entre las avalanchas de críticas generadas por esta situación, el mandatario sufre otro golpe, donde si bien, no era el directo involucrado, vinculaba a alguien muy cercano, su Vicepresidenta.

La renuncia de Baldetti y nuevos escándalos que golpean al gobierno

El 8 de mayo de 2015, la CICIG nuevamente destapa un escándalo, donde Baldetti se vio obligada a renunciar, ya que se le culpó de haber encubierto hechos ilícitos de Mozón y de ser la responsable de su fuga, además de estar involucrada en un contrato

millonario para limpiar el Lago de Amatitlán, lo que resultó ser un fraude. Ante las presiones y pérdida de apoyo, principalmente, de las élites tradicionales, las cuales habían usado a la vicepresidenta como chivo expiatorio y la habían lanzado a la palestra, con el objetivo de concentrar las miradas e investigaciones en ella, entregó una carta al Congreso manifestando su renuncia (Prensa Libre, 2015; Ortiz de Zarate, 2016c). La situación de la ex vicepresidenta se agravó cuando, el 21 de agosto, fuera detenida y se comprobaran esos delitos y otros, vinculándola directamente con el caso la Línea, por asociación ilícita, fraude aduanero y cohecho pasivo, terminando días después en la cárcel (Ortiz de Zarate, 2016c).

Como si esto fuera poco, el 14 de mayo dejó su cargo el ministro de Energía y Minas, Erick Archilla Dehesa, presionado por ocho peticiones de antejuicio político por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Estas acusaciones fueron comprobadas el 2016, cuando la CICIG desbarató un nuevo caso de corrupción, denominado *La Cooperacha*, el cual consistía en la entrega para los cumpleaños de suntuosos regalos por parte de ministros y autoridades de Gobierno al presidente Pérez y a su vicepresidenta Baldetti para mantener su beneplácito y de paso su cargo público. De acuerdo a la investigación, los aportes para comprar los regalos se realizaban en efectivo para ocultar las transacciones y no dejar rastro del dinero, lo que manifestaba un interés por ocultar el origen y destino de los fondos. En este caso, se comprobó también la participación de los Ministros; Manuel López Bonilla, de Gobernación y ya acusado de otro hecho ilícito, Héctor Manuel López Ambrosio, de Defensa, Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial del PP y anteriormente Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entre otros. (Ministerio Público, 2016; Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, 2016).

El 20 de mayo de 2015 tanto la CICIG como el Ministerio Público centran sus miradas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), institución pública cuya directiva fue detenida por haber concedido a Droguería Pisa, filial de la empresa mexicana

Farmacéutica Pisa, contratos vía sobornos para entregar tratamientos a pacientes renales (Ramos J. , 2017). Lo grave de este hecho, fue que dicha empresa entregó una atención negligente, llegando, en algunos casos, a agravarse las dolencias hasta llegar a la muerte. Se sabe que hubo alrededor de 57 casos de pacientes fallecidos por esas circunstancias. Entre los apresados se encontraba el director de la empresa, Juan de Dios Rodríguez López, quien antes de ocupar dicho cargo, fue nada menos que secretario privado de Pérez Molina y uno de sus hombres de confianza. Esto generó repercusiones negativas hacia el mandatario, sobre todo, porque los arreglos económicos que favorecieron a la empresa en 116 millones de quetzales, no parecían ser casuales (Ortiz de Zarate, 2016; Torres, 2015; Ramos J. , 2017). (Torres, 2015)

Sumado a lo anterior, al día siguiente de aquel suceso, deja su cargo, a pedido del mandatario, López Bonilla, Ministro de Gobernación y considerado la mano derecha de Pérez Molina. El Ministro abandonaba el Gabinete para ayudar a disipar la oleada de hechos ilícitos que envolvían al mandatario, puesto que dicha figura también estaba involucrada en presuntas irregularidades (Infobae, 2015). A su dimisión se sumaron, a petición de Pérez Molina, las de otros seis servidores gubernamentales, entre ellos la Ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez Kelly, y el recién nombrado titular de Energía y Minas, Edwin Rodas Solares, debido a que también estaban siendo cuestionados (Ortiz de Zarate, 2016c). Todos estos hechos dejaron al mandatario en una situación de máxima debilidad, lo que hizo que las miradas tanto del Congreso como del poder judicial se concentraran directamente en él. Por supuesto, que la opinión de la ciudadanía no quedó al margen y se hizo notar a través de una seguidilla de manifestaciones, que comenzaron a inicios del 2015, pero que tuvieron su punto culmine en el periodo previo a la renuncia e impeachment en contra del mandatario.

En definitiva, el papel que jugó la CICIG como apoyo del Ministerio Público, resultó fundamental para lograr destapar situaciones irregulares realizadas tanto por autoridades y figuras políticas de períodos anteriores como también más actuales,

logrando llevar a la palestra pública, a nada menos que al presidente de la República, Pérez Molina. Esta situación, debilitó profundamente al mandatario, quien fue perdiendo apoyo, de todos los frentes; sectores políticos, grupos de interés y la sociedad civil. En una primera instancia figuras vinculadas a su partido político, fueron quitando su apoyo, como el caso de Alejandro Sinibaldi, quien el 2015 renuncia a su candidatura presidencial por el PP, para evitar su vinculación con la corrupción que estaba envolviendo al partido y sus integrantes. Sumado a lo anterior, el mismo mandatario debió tomar medidas, y desvincularse de algunos de sus colaboradores más cercanos, como Mauricio López y otros Ministros de su propio partido político, para, con esto, intentar limpiar su imagen de los casos de corrupción que envolvían a todos ellos. Esto generó un efecto en cadena, donde empresarios guatemaltecos, sus aliados tradicionales, comenzaron a dar una señal de descontento y lejanía con respecto al gobierno y a favor de la CIGIG. Esto también ocurrió con periodistas y medios de comunicación, quienes, no solo entregaron su apoyo a las labores llevadas a cabo por dicha institución, sino también respaldaron a los funcionarios del sistema judicial, enfatizando su importante responsabilidad en el destape de todas las situaciones irregulares que hasta la fecha se manejaban (Labrador, 2015).

Nuevas movilizaciones callejeras

El 2015 fue el año de las **manifestaciones sociales**, si bien habían existido otras al inicio de su gobierno, las de este año tuvieron la característica de mantenerse en el tiempo, tomando cada vez más relevancia, por su convocatoria y demanda. Las protestas comenzaron a emerger a fines de abril como una reacción de malestar frente al destape más grande de corrupción conocido en el país, el caso *La Línea*, donde el presidente y su vicepresidenta, hasta ese minuto, eran cómplices. El 25 de ese mes, las protestas brotaron con fuerza en las calles, exigiendo la renuncia de ambas autoridades, además de pedir que se hiciera pública la lista de empresarios involucrados en el fraude. La convocatoria fue liderada por jóvenes a través de las redes sociales, utilizando la consigna “#RenunciaYa” (Torres, 2015), nombre que adquirió el movimiento y lo mantuvo durante el resto de las manifestaciones, congregando a más de 20.000 personas en la capital del país, número

que no se presentaba, por lo menos, desde hace tres décadas (Elías, 2017). Si bien fue masiva, mantuvo un carácter pacífico, reflejándose en que una vez concluida la jornada, los manifestantes se preocupaban de barrer las calles por las que habían transitado (Ortiz de Zarate, 2016c). Un comentario que se repitió entre los asistentes fue lo sorprendidos que quedaron de la ecléctica convocatoria que generó la protesta, desde miembros de la comunidad LGBT, colectivos de organizaciones sociales, activistas de distintas causas, niños acompañando a sus padres, familias custodiadas por guardaespaldas, estudiantes de universidades privadas, personas mayores, (...) hasta asociaciones religiosas, todos manifestaban su malestar (Barreto, 2015). Sin embargo, también hubo ausencias, principalmente de los sindicatos y del Frente Nacional de Lucha, agrupaciones que habían recibido del gobierno beneficios salariales. En la misma línea se mostró un sector de la organización campesina, quienes manifestaron su desacuerdo con la corrupción, pero no responsabilizaban exclusivamente al gobierno de Pérez Molina (Barreto, 2015). Ante esto, se evidencia una diferencia social entre los que lideraron dicha convocatoria y las manifestaciones del 2012. Los orígenes del movimiento #RenunciaYa se encuentran en los sectores medios y altos que habitan principalmente el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, a diferencia de grupos más populares, principalmente indígenas, campesinos y sindicalistas, que lideraron las protestas de 2012. Sin embargo, el movimiento que lideró las manifestaciones de 2015, planteó su más absoluta disposición a una mayor inclusión, para que la convocatoria consiguiera ser realmente inclusiva y tuviera mayor peso (Velásquez, 2015).

A pesar de lo anterior, las movilizaciones lideradas por #RenunciaYa y otros colectivos, se mantuvieron por semanas, y fueron tomando mayor fuerza a medida que los casos de corrupción aumentaban, sumando a éstas, manifestantes que en un inicio se mostraron reacios. Mientras tanto, el presidente Pérez intentaba aplacar los ánimos a través de un mensaje oficial, donde hacía un llamado a la calma, y manifestaba su preocupación por las situaciones vividas, planteando que la CICIG continuaría cumpliendo su labor para que todos los culpables enfrentaran a la justicia. Además, no

perdió el minuto para manifestar su total rechazo a todas las irregularidades ya conocidas, diciendo que le parecían indignantes y vergonzosas (Ortiz de Zarate, 2016c), declaraciones que tuvieron nula repercusión en la ciudadanía.

Las protestas continuaron hacia el siguiente mes, acrecentándose una vez que salieron a la palestra las acusaciones en contra de Baldetti, quien renunció a inicios de mayo de 2015. La ciudadanía convocó a una masiva demostración de júbilo cuando se supo de su dimisión y, además, exigió que el mandatario hiciera lo mismo (Elías, 2015). Las manifestaciones durante ese mes llegaron a congregarse a alrededor de 60.000 personas y unas 15.000 en otras zonas del país (Torres, 2015, pág. 6). Las protestas continuaron los meses siguientes, sin bajar de unas 20.000 personas reunidas en la capital y en otras zonas del país, sumándose manifestantes de todos los estratos sociales, aunque la clase media continuaba siendo el grupo predominante (HispanTv, 2015). Todas las consignas de ahí en adelante, se concentraron en manifestar el profundo malestar por lo que estaba ocurriendo en el gobierno de turno y con mayor fuerza se arraigaba la idea de que el mandatario podía estar involucrado, por lo tanto, la exigencia de la renuncia y procesamiento de Pérez se volvió un mensaje aún más reiterativo. Además, manifestaban una profunda desilusión hacia la clase política, y no hacían distinción entre partidos, ya que existía la convicción de que la corrupción estaba extendida entre las autoridades. Pedían que los involucrados recibieran castigo, además de la devolución de los bienes robados al Estado. De esta manera, el tono de las demandas se fue concentrando cada vez con mayor fuerza en mensajes de carácter moral y político (Torres, 2015).

Conflictos inter-institucionales: La Corte de Constitucionalidad, La Corte Suprema y la Comisión Pesquisadora

En este contexto de alta efervescencia social, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio una señal potente, cuando el 10 de junio de 2015 aceptó la querrela presentada unas semanas antes en contra del presidente Pérez Molina, por el diputado Almícar Pop, representante del Winaq, partido indigenista de izquierda. La demanda se centraba en

delitos como: incumplimiento de deberes, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y estafa con respecto a los casos anteriores (Sánchez, 2015). Ante estos hechos, y los anteriores que envolvían a varias autoridades y Ministros de Estado, el Congreso conformó cuatro Comisiones Pesquisidoras, entregándole a una de ellas la labor de investigar las acusaciones en contra de Pérez Molina (Juarez, 2015). Cabe destacar, que ya a inicios de este proceso, se comenzaba a evidenciar una alianza estratégica entre el PP y LIDER, bancadas mayoritarias en el Congreso. Esto quedó plasmado, cuando se realizó una primera votación para quitar la inmunidad al mandatario, situación que, según algunas declaraciones, fue manipulada por los miembros de LIDER, a través de sus diputados, y principalmente, del congresista Manuel Baldizón, quien manifestó públicamente su desacuerdo con el antejuicio, y por el Presidente de la Cámara Luis Rabbé, quien habría evitado que se decidiera un plazo definitivo para que la Comisión Pesquisidora entregue el informe con los resultados de la investigación (Rodríguez M. , 2015).

A esta situación, se sumó otra. El 18 de junio, la Corte de Constitucionalidad (CC), organismo que resguarda el cumplimiento de la ley y funciona de forma autónoma al gobierno y los otros poderes del Estado, aceptó el amparo presentado por la abogada Karen Fischer, planteando como argumento, anormalidades en el procedimiento para llevar adelante el antejuicio, enfatizando en que su actuar va en defensa de la institucionalidad y no del mandatario, lo que significaba, en definitiva, paralizar la labor de la Comisión de forma temporal (El Salvador, 2015). Esta situación, duró bastante poco, ya que el 1 de julio, la CC decidió revocar el amparo que había otorgado semanas atrás, dejando nuevamente al mandatario expuesto a la decisión del Congreso (Ortiz de Zarate, 2016c).

Es este contexto que utiliza la CICIG y el Ministerio Público para solicitar a la Corte Suprema un nuevo proceso de antejuicio en contra del mandatario, producto de las nuevas acusaciones que aparecieron en su contra, que lo vinculaban con los mismos delitos realizados por su Vicepresidenta, ya acusada y en la cárcel desde el 26 de agosto (El Espectador, 2015). A la luz de las investigaciones realizadas durante ocho meses,

donde grabaron más de 66.000 conversaciones telefónicas y revisaron más de 6.000 correos electrónicos, se comprobó que los líderes del caso La línea, esta enorme red de corrupción aduanera, eran el presidente Pérez junto a su vicepresidenta y no Monzón, como se había planteado en un principio (Elías, 2015). Por esta razón, la CSJ acogió la solicitud, enviando al Congreso el trámite de antejuicio contra el presidente (Ramos J. , 2015).

La investigación en la Cámara quedó en manos de una Comisión Pesquisidora, liderada por el diputado Baudilio Hichos, quien renunció a su cargo por ser acusado de fraude unos días después del nombramiento, debiendo elegir a un nuevo integrante (Sánchez, 2015). Lógicamente, el mandatario reaccionó al antejuicio, buscando detenerlo, y para eso, fueron claves los integrantes que quedaron conformando la Comisión. De los 5 diputados participantes, dos pertenecían al PP, Mario Linares y Gloria Sánchez, dos eran de LIDER, Jorge Mario Barrios y Sergio Celis, y Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala. Durante varias horas la Comisión presentó evasivas para reunirse a revisar el informe enviado desde el poder judicial, tanto así, que surgieron quejas desde los partidos minoritarios, como de Montenegro, integrante de la Comisión, quienes reconocieron una alianza entre los integrantes del PP y LIDER para frenar el proceso (Orozco, 2015), acuerdo, que en una primera instancia resultó, ya que pudieron retrasar el procedimiento, pero a medida que aparecían más irregularidades, la situación se volvía insostenible (Ortiz de Zarate, 2016c).

Intensificación de las movilizaciones, antejuicio y la renuncia del presidente

Esto generó el estallido del descontento ciudadano, más de 100.000 personas, entre “universitarios, médicos, campesinos, estudiantes, maestros, religiosos, indígenas, comerciantes, niños, ancianos, familias y hasta policías se hicieron escuchar al llenar la Plaza de la Constitución” (Contreras G. , 2015) y también en otras partes del país, un paro nacional unió a todos los manifestantes. Las consignas se gritaron con más fuerza pidiendo

la renuncia inmediata del mandatario a través de mensajes como: “Por dignidad y respeto, basta ya”, “Presidente renuncia ya” y “¡Guatemala es tu patrón, y Guatemala te despide, Otto Pérez Molina”. Con éstas no quedaba ninguna duda de cuál era la demanda más potente de la ciudadanía (Contreras G. , 2015). El presidente se resistió hasta el último momento, anunciando en cadena nacional que no dejaría el cargo, porque era inocente (Contreras G., 2015; TeleSur, 2015). A esas alturas, sin embargo, ya había perdido el apoyo de varios Ministros y autoridades del gobierno, que renunciaron a sus cargos de forma inmediata y algunos, salieron del país para evitar ser procesados (Ortiz de Zarate, 2016c).

El antejucio continuó su curso, y en 48 horas, en medio de las multitudinarias protestas, la Comisión tuvo un veredicto, recomendó a los congresistas que quitaran el fuero al presidente para que pudiese ser procesado ante la justicia (Álvarez, Ramos, Gramajo, & Sánchez, 2015). El 1 de septiembre con 132 votos, los parlamentarios decidieron de forma unánime quitar la inmunidad a Pérez Molina, contexto en que incluso los miembros de PP votaron a favor (Elías, 2015; Ortiz de Zarate, 2016). Dos días después de este suceso, el mandatario presentó su carta de renuncia a Luis Rabbé, presidente del Congreso, donde manifestaba una vez más su inocencia, pero asumía la necesidad de presentarse ante la justicia para lograr acabar con todas las acusaciones en su contra (El País, 2015).

El mismo día de su renuncia, el Juez Miguel Ángel Gálvez, pidió al reciente ex mandatario sus declaraciones. Tras escuchar los argumentos, tanto del presidente como del Ministerio Público y la CICIG, dictó encarcelamiento provisional para el acusado. “Se trata de un dictamen histórico porque involucra a un presidente y a su ex vicepresidenta, algo sin precedentes en la historia jurídica del país” (Elías, 2017). Hasta el día de hoy, Otto Pérez Molina continúa en la cárcel.

Consideraciones finales

Pérez Molina llega a la presidencia de Guatemala por primera vez el 2012, acompañado de su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos pertenecientes al PP. Desde ese punto de vista y de otros, la llegada del mandatario se veía como positiva, ya que se tenía la esperanza que con la llegada de un ex militar al poder, pudieran por fin entenderse los uniformados con la sociedad civil, que durante tantos años habían sido enemigos. Además de entregar con su imagen, un mensaje potente de seguridad y orden, algo que la ciudadanía buscaba con fuerza. Sin embargo, debido a las mismas características, existía un grupo no menor de personas que sentían una profunda desconfianza hacia el mandatario y sus políticas de gobierno, mayormente vinculadas con los intereses de una clase social más adinerada y con las fuerzas militares, bastante conservadoras que tenían un pasado lleno de atrocidades (Ortiz de Zarate, 2016; Relea, 2007).

Estas dos visiones eran las que primaban sobre el presidente recién electo, por esta razón es que toma el mandato, planteando en que acabaría con la corrupción y la violencia, a través de mano dura en contra de los delincuentes, buscando eliminar la impunidad que estaba enraizada en el país. Sin embargo, desde muy temprano a su llegada, comenzaron a generarse situaciones que minarían profundamente su figura como líder.

Por medio del trabajo realizado por el poder judicial, pero principalmente por la *alianza hecha desde 2007 entre Ministerio Público y la CICIG*, varios *casos de corrupción* comenzaron a salir a la palestra. Algunos de ellos fueron protagonizados por personas cercanas al presidente, como Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación y ex jefe de campaña, Juan de Dios Rodríguez López, director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que anterior a ese cargo, había sido secretario privado del mandatario y Erick Archilla Dehesa, Ministro de Energía y Minas, quien estaría involucrado en el caso La Cooperacha.

A todo lo anterior , se sumaron las situaciones irregulares en las que Pérez Molina tenía directa responsabilidad. A inicios de 2013, aparece el mandatario, sin buscarlo, mencionado en un testimonio sobre las violaciones a los Derechos Humanos ejercidas por el Ejército durante la Guerra civil (Elías, 2018; Kinzer, 2018), vinculándolo con el régimen dictatorial de Efraín Ríos Montt, donde habría asesinado a un número considerable de civiles. Sin embargo, uno de los casos de mayor envergadura fue el que salió a la palestra el 16 de abril de 2015, cuando se descubrió una enorme red de defraudación aduanera, conocida como La Línea, donde el principal involucrado, en un principio, era el secretario privado de la vicepresidenta Baldetti, Juan Carlos Monzón, sin embargo, meses más tarde, se descubrió, que no solo él era parte, sino también su jefa y por supuesto, el presidente de la República.

Todas estas situaciones se relacionan con uno de los factores bastante discutido por la literatura, los *escándalos políticos*, los cuales, para algunos autores, pueden ser causa directa de una caída presidencial, y, para otros, pueden ser relevantes si otras variables se entrecruzan. Para el caso de Guatemala, los escándalos estuvieron presentes de principio a fin, vinculando a Ministros, funcionarios públicos e incluso al mandatario en cuestión, lo que deja en evidencia un arraigo profundo de la corrupción en el aparato institucional. Esta situación tan desmedida en el país, hizo que la ciudadanía manifestara su descontento en las calles.

A meses de haber asumido como presidente, Pérez debió enfrentar las primeras, de muchas *manifestaciones* que surgirían en su periodo, sin embargo, las que tuvieron mayor relevancia para su desprestigio y pérdida de apoyo, fueron las que comenzaron a evidenciarse a inicios de 2015. Dichas manifestaciones presentaron diversas características que, de acuerdo a la literatura, deben poseer para convertirse en un factor de incidencia para una salida presidencial.

Debieron pasar casi tres años y un cúmulo de casos de corrupción, para que la ciudadanía acumulara descontento y comenzara a manifestarse de forma permanente. Estas primeras movilizaciones, congregaron a un número importante y variado de personas, siendo los *grupos predominantes, la clase media y alta*, marginándose en un inicio de éstas, aquellos que tradicionalmente lideraban las protestas callejeras, las clases populares. A medida que los casos de corrupción continuaban apareciendo, el número de manifestantes aumentaba, logrando congregarse incluso, a los grupos que en un inicio se habían marginado. Esta característica toma mucha más fuerza, cuando sale a la palestra el caso La Línea, pero más aún, cuando se comprueba unos meses más tarde, la participación directa en este delito, de Baldetti y Pérez Molina, situación que hizo a los manifestantes, además de crecer en número, más de 100.000 personas protestando, entregar un *mensaje claro y directo para pedir sus renunciaciones*, características que dan mayor fuerza a las manifestaciones en una crisis presidencial.

Aquí resulta importante enfatizar una premisa planteada por Hochstetler (2008), si las movilizaciones callejeras se vuelven cada vez más numerosas y agresivas, lograrían conseguir un peso mayor para la salida anticipada del ejecutivo, siempre y cuando, actuara ciudadanía y legislativo de forma coordinada. Esto lógicamente, no se refiere a una coordinación explícita, sino más bien a un accionar parecido durante la situación de crisis. Dicha relación, en el caso de Guatemala, fue posible de corroborar con lo ocurrido después de aquellas masivas protestas.

Importante reconocer que producto de estas situaciones, el mandatario se vio obligado a pedir la renuncia de varias personas de confianza, que ya estaban siendo cuestionadas por su participación en diversos casos de corrupción. Sumado a esto, miembros de su propio partido, comenzaron a separarse del PP, para evitar ser salpicados por dichos escándalos, hechos que generaron una pérdida de apoyo y un debilitamiento de su figura. Teniendo esto presente, cabe recordar que el presidente llega al poder, con un *apoyo débil en términos parlamentarios*, debiendo durante su gobierno establecer alianzas

con otros partidos políticos. Esto fue lo que ocurrió con los miembros de LIDER, partido que durante la campaña presidencial de 2011, era oposición, pero que con el pasar del tiempo, terminó siendo aliado, por temas principalmente estratégicos, ya que ambos tenían vínculos con las cúpulas militares y el empresariado. Esta alianza, en los momentos más críticos del gobierno, ayudó a que el impeachment fuera retrasado, sin embargo, y producto de la presión ejercida desde instituciones como la CICIG y las protestas ciudadanas, no logró mantenerse en el tiempo, debiendo cambiar de estrategia quitándole completamente el apoyo y dejándolo expuesto a las decisiones del poder judicial. Esto hizo, que con un presidente totalmente manchado por la corrupción, *el Congreso se alineara* en contra del mandatario, decidiendo no utilizar el “escudo legislativo” para protegerlo, quitándole de forma unánime su inmunidad.

Dichas acciones tomadas por el legislativo, evidencian una característica política bastante arraigada en Guatemala, y que tiene relación con la falta de sustento ideológico y de propuestas programáticas presente en la mayoría de los partidos, lo que hace que estos se movilen y lleguen a crear alianzas más bien por intereses personales o influenciados por grupos de poder, que, por un proyecto en común de sociedad. Esta situación queda en evidencia, cuando Pérez Molina, profundamente desprestigiado ante la ciudadanía, pierde el apoyo de los grupos empresariales y de la opinión pública, lo que hace que las fuerzas políticas en el Congreso, incluyendo al PP y a su aliado, el partido LIDER, decidan hacer lo mismo. De esta manera, el 1 de septiembre, los diputados de forma unánime quitan la inmunidad al presidente, entregándoselo a la justicia para su procesamiento.

Como última reflexión, para el caso de esta presidencia fallida al parecer, son relevantes los factores; *tradición y stock democráticos*, ya que, al no estar desarrollados y afianzados dentro de Guatemala, no tienen un correcto funcionamiento, situación que permite que un *actor internacional* tome importancia en esta crisis presidencial, la CICIG.

Tal como se planteó más arriba, la CICIG fue un organismo clave para que las investigaciones judiciales, primero, se pudieran llevar a cabo, y segundo, se hicieran correctamente, lo que llevó a la salida de sus cargos a un número considerable de autoridades políticas, llegando algunas, incluso a la cárcel, situación que quizás no hubiese ocurrido con tal magnitud, si la justicia hubiese actuado sin ayuda de aquella organización.

El poder judicial, así como todo el aparato estatal, quedó marcado por los 36 años de Guerra civil, lo que se evidencia en la poca seriedad y autonomía con la que actúan las instituciones, y que para el caso de la justicia, resultaba evidente antes de la llegada de la CICIG. Esto manifiesta a su vez, que en Guatemala aún no está arraigada una tradición democrática potente, que permita a los actores políticos entender lo importante de actuar en el margen establecido por dicho sistema político, el stock democrático, por lo tanto, estaría poco desarrollado y arraigado en la sociedad. Todavía hay muchas acciones que llevan a cabo estos actores; ministros, presidentes y otras autoridades, que evidencian una falta de probidad profunda. Además, existe una élite poderosa, que no tiene intención de modificar sustancialmente la estructura política, económica y social del país, a pesar de los problemas graves que han aquejado por años a la mayoría de la población guatemalteca. Lo lamentable de esto es que la corrupción está tan establecido y normalizada, que la podría ejercer cualquiera.

Por otra parte, la falta de tradición y stock democrático, también se refleja, como ya fue planteado anteriormente, en el débil sistema de partidos políticos existente en el país, que se manifiesta en que no existe ninguna fuerza política que esté fuertemente arraigada en la sociedad, abriendo una tremenda brecha para que “cualquiera” llegue al poder. En otras palabras, la falta de compromiso político y de identificación con los partidos, facilita la irrupción de proyectos personalistas, pudiendo llegar a la presidencia alguien con poca convicción por el bien común, y con un alto interés por el bien personal. Esto no está tan alejado de lo ocurrido en este caso, Pérez Molina estuvo la mayor parte de su vida vinculado a las fuerzas militares, no solo formándose en sus filas, sino también

trabajando para gobiernos dictatoriales, tan convencido estaba de su labor, que, cuando decide retirarse, es premiado con la máxima condecoración posible, lo que evidencia su profundo compromiso con la institución. Por lo tanto, cuando toma el poder, primero, llega sin mayores conocimientos de cómo gobernar, pero más grave que eso, es que de acuerdo a todas sus acciones, es posible concluir que nunca estuvo convencido de cumplir correctamente con su labor de mandatario, tampoco tuvo un compromiso serio con la política y con aportar a hacer más poderoso al débil Estado de Derecho que existía, incluso estuvo a punto de hacer que la CICIG se retirara del país.

Todas estas características revelan la falta de tradición y stock democrático, que queda manifestado en los índices de democracia estudiados más arriba, que sitúan a este país dentro de las democracias híbridas o poco consolidadas. En otras palabras, aún tambalea en Guatemala su sistema político, ya que las bases en las que se sustenta siguen estando frágiles, hecho que es posible reconocer a través de todas las dificultades ya mencionadas (Hola Chamy, 2015; Berzaín, 2015). Esto permitiría decir, entonces, que para este caso, los factores tradición democrática y stock democrático, al no estar completamente desarrollados y arraigados en la sociedad, no pudieron jugar un papel decisor en la salida presidencial, debiendo actuar un organismo internacional como la CICIG para que esto se llevara a cabo.

CAPÍTULO VI CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo investigado fue posible responder las preguntas de investigación y los objetivos propuestos, los cuales se enfocaron en analizar los factores que influyeron en la ocurrencia de ambas presidencias fallidas estudiadas. Sumado a esto, se buscó reconocer la presencia o ausencia de los factores planteados por la literatura como relevantes, y lograr entender cómo los mecanismos causales generados entre los factores, llevaron a los presidentes en cuestión a dejar el cargo antes de tiempo. Esto podrá evidenciarse a través de las diversas premisas que aquí se presentan.

Con respecto al *apoyo entregado por el Congreso al presidente*, es posible reconocer tanto en la literatura, como en los estudios de casos analizados, que su rol es fundamental, ya que es quien tiene el poder real y concreto de, entregar apoyo y blindar al presidente frente a una situación difícil o quitarle su escudo y dejarlo expuesto a que éste u otros poderes hagan lo suyo. Importante mencionar que el apoyo legislativo puede venir desde el propio partido político del mandatario, la coalición oficialista o incluso desde la oposición.

Para el caso brasileño, el Congreso comenzó a tener un rol importante, desde el inicio del mandato de Rousseff, producto de las características estructurales que presenta el sistema de partidos políticos en Brasil, que empuja a los gobernantes a tener que tranzar y saber negociar, sino con todas, con la mayoría de las fuerzas políticas que componen el Congreso, característica que desde el gobierno de Henrique Cardoso se presenta con fuerza en Brasil, entregándoles la gobernabilidad necesaria a las presidencias.

Si se analiza esto en el primer gobierno de Rousseff, es posible reconocer un amplio apoyo partidista, que se evidenció, no solo en la cantidad de partidos que conformaron la coalición oficialista, 11 en total, sino también en el apoyo que recibió en

el Congreso de la oposición política. En otras palabras, hubo un amplio espectro político alineado con el gobierno de turno, lo que se reflejó en, que, a pesar, del creciente estancamiento económico que comenzaba a evidenciarse, las fuerzas políticas se mantuvieron alineadas con el gobierno, ayudando a mantener la estabilidad del país. Esto, sin embargo, no pudo ser sostenido durante su segundo mandato, debido, entre otros elementos, a la inestabilidad política que generó el quiebre de la coalición oficialista, producto de la renuncia progresiva de varios partidos. El hecho que más afectó a la coalición, fue la salida del PMDB, puesto que dicho partido, no solo ha contado históricamente con una alta representatividad dentro del legislativo y en la población, sino que, además, ha sido la fuerza política de mayor peso y principal aliado de todos los gobernantes, desde Henrique Cardoso en adelante, por lo tanto, su apoyo resulta fundamental, si se busca mantener la gobernabilidad del país. Sumado a esto, producto de las elecciones parlamentarias de 2014, la fragmentación partidista que caracteriza al Congreso brasileño, aumentó aún más, debido a la llegada de nuevos y pequeños partidos políticos de tendencia, en su mayoría, de derecha, lo que hizo que la oposición tomara fuerza en el Congreso. Por último, hay que sumar los conflictos declarados con parlamentarios y políticos importantes, como el presidente de la Cámara de diputados, Eduardo Cunha, quien se convirtió en uno de los principales impulsores del impeachment, y, el Vicepresidente, Temer, miembro al igual que Cunha, del PMDB.

Todas estas situaciones hicieron disminuir considerablemente el apoyo entregado por el legislativo a la mandataria, manifestándose con mayor claridad durante el impeachment, ya que la mayoría de las fuerzas congresistas, se alinearon en contra de Rousseff, destituyéndola de su cargo. Por todo lo anterior, es que el papel del Congreso resultó ser fundamental.

Para el caso guatemalteco, el papel del Congreso también fue importante, lo que se vio reflejado durante el mandato de Pérez Molina, en dos momentos claves. El primero, se produjo cuando, producto del débil apoyo parlamentario con el que comenzó su

gobierno, debió crear alianzas políticas, uniéndose estratégicamente con el partido LIDER, alianza que se mantuvo y le jugó a favor, hasta que su figura se debilitó completamente. Cabe mencionar acá, que el sistema partidista guatemalteco se encuentra debilitado, lo que se refleja en que los acuerdos a los que puede llegar el gobierno con otras fuerzas políticas son sumamente frágiles, debido a que los partidos se sustentan en intereses de grupos de poder, y no, en objetivos colectivos. Esto hace que las alianzas o coaliciones sean igualmente débiles, pudiendo quebrarse rápidamente haciendo cambiar las fuerzas mayoritarias en el Congreso. Esta característica fue la predominante durante el gobierno de Pérez Molina, observándose cuando el partido que había logrado retrasar el juicio político en su contra, le quita apoyo, convirtiéndose en oposición.

Un segundo momento clave, fue cuando, una vez que LIDER ya se había ido hacia el bando contrario, se alían todas las fuerzas parlamentarias y llevan a cabo el juicio político, quitándole la inmunidad al presidente, situación que permite al poder judicial actuar. Esto manifiesta entonces, que, para el caso guatemalteco, no solo fue relevante el rol del Congreso para la realización del impeachment, sino también, para colocar fuera del poder y en la cárcel, al presidente.

Es importante mencionar, que, si bien el rol del Congreso resultó ser muy importante en ambos casos, debió existir una fuerza que presionara incansablemente a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto con respecto a la corrupción. Es aquí donde el papel de las *movilizaciones callejeras* toma relevancia.

Importante mencionar que, de acuerdo a los estudios revisados, es posible reconocer varios elementos que deben presentar las manifestaciones para jugar un rol importante en una presidencia fallida. Éstas deben poseer características como: un mensaje directo que pida la salida o renuncia del presidente, una cantidad importante de movilizaciones y número de convocados y la presencia de nuevos grupos sociales, tradicionalmente no muy vinculados con las manifestaciones. Además, el actuar represivo

que presente el gobierno en contra de los manifestantes, puede generar un aumento del descontento ciudadano. Todo esto en conjunto potenciaría la ocurrencia de una presidencia fallida.

Si se observan las manifestaciones de ambas presidencias, fue posible reconocer el actuar represivo del gobierno, generando un aumento del malestar de la población, aunque, para el caso guatemalteco, no logró tener una relevancia para la salida del mandatario, puesto que dicha acción no se mantuvo en el tiempo, solo estuvo presente al inicio de su gobierno. En Brasil, en cambio, las acciones represivas fueron más constantes, afectando, principalmente, a los sectores populares, lo que generó una baja hacia el apoyo entregado a la mandataria, baja que se acrecentó producto de las medidas económicas “liberales” implantadas en su segundo gobierno.

Otro elemento posible de reconocer en ambas presidencias fue la participación en las manifestaciones, de nuevos grupos sociales. En Guatemala, las protestas comenzaron siendo lideradas por jóvenes, y grupos de clase media y alta, característica bastante irregular. Sin embargo, a medida que tomaban fuerza, se fueron sumando otros, como los sectores populares, que al inicio no tuvieron mayor participación, pero con el tiempo se sumaron a las demandas, generándose grandes movilizaciones. En Brasil, también fue importante la presencia de la clase media, lo que hizo que, al lograr convocar, a nuevos grupos de manifestantes, éstas fueran creciendo en número y expandiéndose a lo largo del país. Esto hizo posible que dichas movilizaciones, en ambos casos, se mantuvieran en el tiempo, convirtiéndose en una molestia para los mandatarios en cuestión, y una presión constante para el Congreso.

Dichas manifestaciones tenían otro elemento en común, las consignas que unían a todos los ciudadanos. En ambos países la demanda principal se enfocaba en pedir explícitamente la salida del presidente, tanto en Guatemala como en Brasil, la gente pedía

a gritos que renunciaran. Este elemento sería fundamental para que las manifestaciones aumentaran la posibilidad de conseguir su objetivo, situación que en ambos países ocurrió.

Ahora es importante mencionar los factores que *gatillan una crisis o inestabilidad presidencial*, entre ellos se encuentran: los escándalos políticos y la situación económica del país.

En ambas presidencias los *escándalos políticos* estuvieron presentes en gran medida, generando una reacción en la ciudadanía que se reflejó en el aumento de las protestas callejeras. Además, generaron una pérdida de apoyo político, que se evidenció de forma clara en el proceso de impeachment experimentado por ambos mandatarios, donde, producto de los resultados, no quedaron dudas de la minoría partidista que tenían en el Congreso.

Resulta importante reconocer que, en el caso de Guatemala, se descubrió que el mandatario estuvo involucrado en diversos casos de corrupción, casi todos bastante relevantes, además, de tener relaciones cercanas con figuras políticas también implicadas. En el caso brasileño, si bien la mandataria fue acusada de llevar a cabo ciertas acciones dudosas, fueron las personas cercanas a ella las que se vieron mayormente envueltas en escándalos de corrupción, desde su tesorero, Ministros hasta el ex presidente de la República, Lula Da Silva. En este punto, queda de manifiesto una diferencia entre ambas presidencias, para el caso de Pérez Molina, la situación llegó a ser tan grave, que generó, no solo grandes y constantes manifestaciones callejeras, sino también la reacción de la justicia y de las fuerzas políticas en el Congreso. En cambio, en Brasil, no existían casos de corrupción que involucraran directamente a la mandataria, sin embargo, cargaba con el desprestigio sufrido por su partido político y sus colaboradores cercanos, además, de los problemas económicos presentes, generando un alto descontento en la ciudadanía, presionando al Congreso a actuar. Estos hechos demuestran que los escándalos políticos

en ambos casos jugaron un papel relevante para la inestabilidad presidencial y para las salidas anticipadas de los mandatarios en cuestión.

Con respecto a la *situación económica* presente en un país, resulta relevante el impulso que entrega, tanto una crisis económica, como la implantación de políticas neoliberales para que el descontento ciudadano nazca o se acreciente, produciéndose un aumento de las movilizaciones callejeras.

Cabe recordar el inicio del segundo mandato de Rouseff, el cual comenzó con una economía débil, manifestada en una recesión y alta inflación que se fue agudizando con el tiempo. Esto efectivamente generó un malestar en la ciudadanía, sobre todo, porque era inevitable comparar la situación económica presente con la vivida en el gobierno de Lula. Dicho factor, actuó como un elemento de descontento ciudadano y despertó a un grupo social, que históricamente no se vinculaba con las protestas, la clase media. A su vez, *las políticas neoliberales*, también reconocidas como un factor relevante en una crisis presidencial, hicieron que la convocatoria y el número de manifestaciones creciera, producto del descontento provocado en los ciudadanos leales a los gobiernos del PT, sobre todo, porque no esperaban que un mandato reconocido de izquierda, tuviera aquel viraje en sus políticas económicas. Estos hechos, no fueron posibles de reconocer en la presidencia guatemalteca, puesto que el *factor económico* no jugó un papel relevante en su salida presidencial.

Con respecto a las contribuciones de esta investigación, todas se relacionan con algunos factores, poco estudiado por la literatura y que, en este trabajo, fue posible de observar y reconocer como relevantes, el *rol de un actor internacional en una presidencia fallida* y el factor *tradición democrática*. La primera variable, se asocia específicamente con el contexto de Guatemala y la presidencia de Pérez Molina, a través del papel jugado por la CICIG. El rol que llevó a cabo dicho organismo para la salida anticipada del presidente fue sumamente importante, ya que fue el que, asociado al Ministerio Público,

investigó en profundidad un sinnúmero de situaciones irregulares en el país, llegando a descubrir diversos casos que vinculaban al mandatario con la corrupción. Además, producto de todas sus investigaciones, logró que el tema se mantuviera en los medios de comunicación de forma permanente, lo que generó un desprestigio del mandatario ante la ciudadanía y las fuerzas políticas, cada vez más grande. Por último, no solo se preocupó de que los diversos casos salieran a la palestra pública, sino también que tuvieran condena, ayudando a la justicia a formalizar y poner en la cárcel al presidente. A partir de todo lo anterior, es posible reconocer entonces la relevancia que tuvo la CICIG en la presidencia fallida del mandatario.

La tradición democrática, por su parte, también estuvo presente, aunque su papel no fue tan relevante como el jugado por la CICIG en Guatemala. Al estudiar en profundidad ambos casos de presidencias fallidas, fue posible evidenciar cómo influye el nivel de desarrollo y enraizamiento del sistema democrático en los actores e institucionalidad política. En Brasil se evidenció una democracia mucho más arraigada y presente en un amplio espectro de actores, situación bastante diferente para el caso guatemalteco. Esto se vio reflejado en que situaciones irregulares llevadas a cabo por autoridades políticas, pudieran salir a la palestra y fueran castigadas como corresponde. Sin embargo, aún en Brasil no se está en presencia de una democracia totalmente consolidada, lo que genera que todavía existan actores políticos con bajas preferencias normativas, reflejándose en el mal uso de mecanismos institucionales. Esto se manifestó, por ejemplo, cuando Rousseff intentó blindar a Lula de la justicia, entregándole un cargo público, o a través del juicio político en su contra, donde se suponía que la principal razón para su ejecución era la corrupción política, sin embargo, terminó destituida por una situación bastante menos relevante que esa.

Para el caso guatemalteco, como se está en presencia de una democracia menos consolidada, las preferencias normativas de los actores políticos son considerablemente menores que en Brasil. Esto fue posible observarlo, por ejemplo, cuando Pérez Molina,

producto de las situaciones irregulares que comenzaron a conocerse gracias a la labor de la CICIG, intentó dar por terminado su funcionamiento en el país, para evitar ser descubierto. Además, debido a todos los hechos ilícitos ya descritos, su presidencia evidenció el carácter personalista de la política en desmedro de la institucionalidad democrática, característica, que trasciende al gobierno del mandatario. La falta de tradición democrática, por lo tanto, generaría inestabilidad en el país, aumentando la posibilidad de una presidencia fallida, elemento reconocido en ambos casos estudiados.

De acuerdo a todo lo expuesto, resulta importante evaluar las hipótesis presentadas al inicio y que guiaron esta investigación. Por una parte, se planteó que los escándalos políticos por sí solos no son suficientemente importantes para la salida de un presidente, pero sí para influir en el apoyo entregado al mandatario, tanto por parte del Congreso, como de la ciudadanía. Esto, para el caso de las dos presidencias analizadas, si es posible reafirmarlo. En el caso de Brasil, los escándalos políticos potenciaron aún más la debilidad que ya venía presentando la coalición oficialista desde inicios de su segundo mandato. A este contexto, hay que sumar la mala situación económica y la vinculación que tuvo con los diversos casos de corrupción, generando un aumento sostenido de las manifestaciones callejeras, factores que hicieron disminuir al extremo el apoyo político hacia Rousseff, puesto que ningún partido quiso continuar relacionado con una presidencia así de impopular. Esto hizo que pasara de un gobierno de mayoría a uno de minoría parlamentaria rápidamente produciéndose el juicio político en su contra.

Con respecto a Guatemala, los escándalos políticos también jugaron un rol importante, al mermar el débil apoyo ciudadano y partidista que presentaba Pérez Molina desde el inicio de su gobierno. Los diversos casos de corrupción hicieron que las protestas se mantuvieran en el tiempo y fueran aumentando su convocatoria, lo que fue debilitando aún más el apoyo político hacia el presidente. Sin embargo, si la CICIG no hubiese ejercido su rol en este caso, quizás nunca se hubiese producido el juicio político en contra

del mandatario, y su posterior encarcelamiento. Por lo tanto, en este contexto el rol de la CICIG fue fundamental para la ocurrencia de dicha presidencia fallida.

Por otra parte, las limitaciones presentes en esta investigación se relacionan principalmente con el número de casos estudiados, ya que para poder analizar con mayor precisión los factores más o menos relevantes en una presidencia fallida y los mecanismos causales observados, deberían evaluarse más casos positivos. Sin embargo, se asume desde el inicio, que los casos a analizar son una muestra pequeña del fenómeno en cuestión, por lo que los objetivos de la investigación están dirigidos más bien a profundizar en los contextos de los respectivos países y evaluar a partir de ambos, cómo se comportan los principales factores reconocidos por la literatura.

De esta manera, fue posible descubrir el importante papel jugado por factores poco trabajados en estudios previos, como el rol de un actor internacional o la tradición democrática, y que por qué no, pueden llegar a tener un papel relevante en otros casos de presidencias fallidas.

BIBLIOGRAFÍA

- Agencias DPA y Redacción La Voz, "La justicia eleva la condena por corrupción a Lula y deja en vilo su candidatura", La Voz, 24 de enero de 2018, en: <http://www.lavoz.com.ar/mundo/la-justicia-eleva-la-condena-por-corrupcion-lula-y-deja-en-vilo-su-candidatura> [23 de mayo de 2018].
- Agurto, J, "Guatemala: ¿Qué sucedió en Totonicapán?", SERVINDI, 6 de octubre de 2012, en: [file:///C:/Users/admin/Downloads/servindi__servicios_de_comunicacion_intercultural_l_-_guatemala_que_sucedio_en_totonicapan_-_2012-10-06.pdf](file:///C:/Users/admin/Downloads/servindi__servicios_de_comunicacion_intercultural_-_guatemala_que_sucedio_en_totonicapan_-_2012-10-06.pdf) [24 de junio de 2018].
- Alles, S. y Franchini, M, "Lula en el poder: algunas notas sobre coaliciones y reformas en Brasil", Análisis Latino, 10 de julio de 2003, en: <http://www.analisislatino.com/opinion/?id=196> [20 de julio de 2018].
- Alvarado, G. "Perfil: ¿Quién es Otto Pérez Molina?" CNN español, 3 de septiembre de 2015, en: <https://cnnespanol.cnn.com/2015/09/03/perfil-quien-es-otto-perez-molina/> [3 de julio de 2018].
- Álvarez, C., Ramos, J., Gramajo, J., & Sánchez, G, "Pesquisidora recomienda retirar la inmunidad a Pérez Molina", Prensa Libre, 29 de agosto de 2015, en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/incertidumbre-en-pesquisidora-de-antejuicio-de-perez-molina> [5 de agosto de 2018].
- Álvarez, M. E., & Marsteintredet, L. (2010). "Presidential and Democratic Breakdowns in Latin America: Similar Causes, Different Outcomes", en M. Llanos, & L. Marsteintredet, *Presidential Breakdowns in Latin America: Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies*, Nueva York, Palgrave McMillan, pp. 33-52.
- Ambrus, S, "Guatemala: la crisis del Estado de derecho y un débil sistema de partidos" Inter American Development Bank , 9 de noviembre de 2017, en: <https://blogs.iadb.org/Ideasquecuentan/2017/11/09/guatemala-la-crisis-del-estado-dederecho-y-un-debil-sistema-de-partidos/> [25 de julio de 2018].
- Anderson, P. (2011). "O Brasil de Lula", *Novos Estudos Cebrap*, núm.91, pp. 23-52.
- Arias, J., "La candidata que fue guerrillera", El País, 21 de febrero de 2010, en: https://elpais.com/diario/2010/02/21/internacional/1266706810_850215.html [21 de julio de 2018].

- Arias, J., "Rousseff, primera presidenta de Brasil", El País, 2 de enero de 2011, en: https://elpais.com/diario/2011/01/02/internacional/1293922801_850215.html [21 de julio de 2018].
- Azpuru, D., Blanco, L., Macías, R. C., Marín, N. L., Ramos, C. G., & Zapata, A. (2007). *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto. Un enfoque comparado entre Guatemala y el Salvador*. Guatemala: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).
- Balcárcel, M. Á. (2011). *Hacia la construcción del Estado de Derecho en Guatemala*. Guatemala: Fundación Konrad Adenauer.
- Ball, P., Kobrak, P., & Spierer, H. F. (2005). *Violencia Institucional en Guatemala, 1960 a 1996: Una Reflexión Cuantitativa*. Nueva York: American Association for the Advancement.
- Ballesteros, E. B. (1999). "Crítica al presidencialismo en América Latina", *Araucaria: Revista Iberoamericana de filosofía, política y humanidades*, núm. 2 , pp. 155-166.
- Banco Mundial, "Banco de datos" 2018a, en: <http://databank.bancomundial.org/data/indicador/NY.GDP.PCAP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators#> [26 de julio de 2018].
- Banco Mundial, "Banco de datos" 2018b, en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2017&locations=BR&name_desc=false&start=2009&view=chart [18 de agosto de 2018].
- Banco Mundial, "Guatemala Panorama general", actualizado el 16 de abril de 2018, en: <http://www.bancomundial.org/es/country/guatemala/overview> [24 de julio 2018].
- Barreto, B. "El clamor de una manifestación: #RenunciaYa", Plaza Pública, 26 de abril de 2015, en: <http://www.plazapublica.com.gt/content/el-clamor-de-una-manifestacion-renunciaya> [3 de agosto de 2018].
- BBC Mundo (a). "Brasil / elecciones: Rousseff gana pero irá a segunda vuelta", BBC Mundo, 4 de octubre de 2010, en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/10/101003_brasil_elecciones_resultados_lr [21 de julio de 2018].
- BBC Mundo (b) "Dilma Rousseff, la candidata de Lula a la presidencia de Brasil". BBC Mundo, 20 de febrero de 2010, en:

https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/02/100220_1152_brasil_lula_rousseff_candidata_presidencia_pea [21 de julio de 2018]

- BBC Mundo, "Brasil: el tesorero del partido de Dilma Rousseff va preso y deja el cargo", BBC Mundo, 16 de abril de 2015, en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150415_brasil_tesorero_pt_preso_gl [20 de abril de 2018].
- BBC Mundo, "Cómo fue el juicio político a Fernando Collor de Mello, el primero en la historia de Brasil y América Latina", BBC Mundo, 16 de abril de 2016, en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160415_brasil_impeachment_collor_d_e_mello_historia_aw [9 de julio de 2018].
- BBC Mundo "Por qué delitos condenaron a Lula da Silva y otras 5 preguntas sobre la sentencia contra el expresidente de Brasil", BBC Mundo, 12 de julio de 2017, en: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40589237> [8 de mayo de 2018].
- BBC Mundo "El expresidente de Brasil Lula da Silva se entrega a la policía para cumplir la condena de cárcel por corrupción", BBC Mundo, 8 de abril de 2018, en: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43684758> [10 de mayo de 2018].
- BBC Mundo. "4 motivos por los que Lula da Silva sigue siendo el político más popular de Brasil pese a su condena por corrupción", BBC Mundo, 25 de enero de 2018, en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42812596> [20 de julio de 2018].
- Bedinelli, T., "Rousseff, entre el mercado y los movimientos sociales", El País, 24 de octubre de 2015, en: https://elpais.com/internacional/2015/10/23/actualidad/1445555640_411079.html [3 de mayo de 2018].
- Bedinelli, T., "La fiscalía brasileña pide investigar a toda la clase dirigente por corrupción" El País, 15 de marzo de 2017, en: https://elpais.com/internacional/2017/03/14/actualidad/1489524802_196077.html [20 de julio de 2018]
- Benidelli, T., & Hermida, X., "La segunda instancia confirma y aumenta la condena a Lula da Silva a 12 años", El País, 25 de enero de 2018, en: https://elpais.com/internacional/2018/01/24/actualidad/1516814621_672380.html [20 de julio de 2018].
- Bermúdez, Á., "El papel clave de Estados Unidos en la crisis de Guatemala", BBC Mundo, 3 de septiembre de 2015, en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150831_guatemala_estados_unidos_corrupcion_cicig_ab [2 de agosto de 2018].

- Bersezio, G. A. (2016). "*¿Ordem e Progresso? La destitución de Dilma Rousseff y la crisis en Brasil*", Observatorio de Política Internacional, en: <https://www.ucsf.edu.ar/wp-content/uploads/2017/01/Bersezio.pdf>, pp.1-6.
- Berzaín, C. S., "Guatemala lucha por la democracia", Diario Las Américas, 9 de septiembre de 2015, en: <https://www.diariolasamericas.com/guatemala-lucha-la-democracia-n3327285> [24 de junio de 2018].
- Betim, F., "Rousseff afronta otra protesta masiva para pedir su destitución", El País, 17 de agosto de 2016, en: https://elpais.com/internacional/2015/08/16/actualidad/1439752775_369562.html [25 de julio de 2018]
- Breda, T. (2016), "Brasil: crónica de un impeachment anunciado. Los colores de un país escindido", *Nueva Sociedad*, núm 263, pp. 4 -18 .
- Brolo, J. (2012). Evolución del sistema de partidos políticos guatemalteco de 1985 a 2012, en José Carlos Sanabria (ed.), *Partidos políticos guatemaltecos: Dinámica internas y desempeño*, Ciudad de Guatemala, Asociación de Investigación y Estudios Sociales, pp. 43-53.
- Camarotti, G., "Dilma e Lula decidem insistir na posse dele como ministro", O Globo, 21 de marzo de 2016, en: <http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/em-reuniao-dilma-e-lula-decidem-lutar-por-possecomo-ministro.html> [25 de julio de 2018].
- Canal RCN, "PMDB, el mayor partido de Brasil, gobierna por tercera vez sin ganar ninguna elección", *Canal RCN*, 12 de mayo de 2016, en: <https://noticias.canalrcn.com/internacional-america/pmdb-el-mayor-partido-brasil-gobierna-tercera-vez-sin-ganar-ninguna-eleccion> [15 de agosto de 2018]
- Centro de Economía Internacional de Libertad y Desarrollo. (2015), "Brasil: Crisis Política y Económica afecta al Gobierno de Dilma Rousseff", Santiago de Chile: Centro de Economía Internacional de Libertad y Desarrollo, pp. 1-18.
- CEPAL (2017) "Estudio económico de América Latina y el Caribe. Brasil", en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42001/26/EEE2017_Brasil_es.pdf [12 de agosto de 2018]

- Cifuentes, P., "Las claves del caso Petrobras", El País, 5 de marzo de 2015, en: https://elpais.com/internacional/2015/02/04/actualidad/1423075550_469907.html [16 de abril de 2018].
- CMI, "El tutelaje de Estados Unidos y el juicio por genocidio", Centro de Medios Independientes, 4 de enero de 2015, en: <https://cmiguate.org/el-tutelaje-de-estados-unidos-y-el-juicio-por-genocidio-2/> [4 de agosto de 2018].
- Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, "Caso La Cooperacha, CICIG, 11 de junio de 2016, en: <http://www.cicig.org/casos/caso-la-cooperacha/> [8 de julio de 2018].
- Contreras, G. "El día que Guatemala le dijo no a Pérez Molina", Prensa Libre, 28 de agosto de 2015, <http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/guatemala-otto-perez-molina-renuncia>, [8 de julio de 2018].
- Contreras, G., & Patzán, J., "Sinibaldi renuncia del Partido Patriota", Prensa Libre, 19 de abril de 2015, en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/sinibaldi-renuncia-del-partido-patriota> [3 de agosto de 2018].
- Corrales, J. (2002). The Politics of Argentina's Meltdown. *World Policy Journal* 19, pp. 29- 42.
- Cox y Morgenstern, G. W. (2002). Epilogue: Latin America's reactive assemblies and proactive presidents, en: Scott Morgenstern (eds), *Legislative Politics in Latin America* Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 446- 468.
- Cué, C. y Rivas, F., "Fernando De la Rúa: "La oposición dio un golpe de Estado en 2001", El País, 16 de diciembre de 2016, en: https://elpais.com/internacional/2016/12/12/argentina/1481558638_004312.html [18 de julio de 2018].
- De los Reyes, I., "Otto Pérez Molina, un general para Guatemala", BBC Mundo, 7 de noviembre de 2011, en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/11/111107_guatemala_otto_perez_molina_pa [3 de julio de 2018]
- Deutsche Welle, "PMDB abandona Gobierno de coalición de Rouseff", Deutsche Welle, 29 de marzo de 2016, en: <https://www.dw.com/es/pmdb-abandona-gobierno-de-coalici%C3%B3n-de-rousseff/a-19149232> [25 de julio de 2018].
- Dudley, S., "El Estado mafioso de Guatemala y el caso de Mauricio López Bonilla" Insight Crime, 15 de diciembre de 2016, en:

<https://es.insightcrime.org/investigaciones/estado-mafioso-guatemala-caso-mauricio-lopez-bonilla/#> [14 de julio de 2018].

- Edwards, M. E. (2015), "Understanding Presidential Failure in South America". *Latin American Politics and Society*, vol.57 (2), pp. 111-131.
- EFE, "El Partido Socialista de Brasil abandona el Gobierno de Rousseff", 20 minutos, 18 de septiembre de 2013, en: <https://www.20minutos.es/noticia/1923297/0/partido-socialista-brasil/abandona-gobierno/dilma-rousseff/> [24 de julio de 2018].
- El Comercio, "Otto Pérez Molina culpa a EE.UU. por su caída y encarcelamiento", El Comercio, 24 de octubre de 2015, en: <https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/otto-perez-molina-culpa-ee-uu-caida-encarcelamiento-201870> [18 de julio de 2018].
- El Desconcierto, "Golpe blando en Brasil: Senado destituye a la Presidenta Dilma Rousseff y asume oficialmente Michel Temer", El Desconcierto, 31 de agosto de 2016, en: <http://www.eldesconcierto.cl/2016/08/31/golpe-blando-en-brasil-senado-destituye-ala-presidenta-dilma-rousseff-y-asume-oficialmente-michel-temer/> [18 de enero de 2018].
- El Espectador, "Fiscalía de Guatemala pide antejuicio contra presidente Otto Pérez por corrupción", El Espectador, 21 de agosto de 2015, en: <https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/fiscalia-de-guatemala-pide-antejuicio-contra-presidente-articulo-580717> [23 de agosto de 2018].
- El Mundo, "Cicig ampliará presencia en Guatemala dos años", El Mundo, 9 de febrero de 2012, en: <https://www.nacion.com/el-mundo/cicig-ampliara-presencia-en-guatemala-dos-anos/AO4H5S44VNCF3ENLHCL6LEIS3A/story/> [2 de agosto de 2018].
- El Mundo, "El PMDB, principal aliado de Dilma Rousseff, prepara su salida del gobierno", El Mundo, 12 de marzo de 2016, en: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/12/56e47689e2704e33398b457a.html> [26 de julio de 2018].
- El Nuevo Diario, "Indígenas repudian asesinatos durante marcha realizada hoy en Guatemala", El Nuevo Diario, 23 de octubre de 2012, en: <https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/267312-indigenas-repudian-asesinatos-durante-marcha-reali/> [23 de junio de 2018].

- El Observador, "Los 10 momentos claves de la presidencia de Dilma Rousseff", El Observador, 4 de octubre de 2014, en: <https://www.elobservador.com.uy/los-10-momentos-claves-la-presidencia-dilma-rousseff-n289131> [24 de julio de 2018].
- El País, "Primera vuelta de las presidenciales en Brasil", El País, 6 de octubre de 2014, en: [html. https://elpais.com/elpais/2014/10/06/media/1412631943_349611.html](https://elpais.com/elpais/2014/10/06/media/1412631943_349611.html) [5 de mayo de 2018].
- El País, "Dilma Rousseff, reelegida por un estrecho margen", El País, 27 de octubre de 2014, en: https://elpais.com/internacional/2014/10/26/actualidad/1414347329_713433.html [4 de mayo de 2018].
- El País, "Carta de renuncia", El País, 2 de septiembre de 2015, en: https://elpais.com/internacional/2015/09/03/actualidad/1441291563_080352.html [8 de julio de 2018].
- El País "La primera gran derrota en 2015 para Dilma Rousseff", El País, 3 de febrero de 2015, en: <https://www.elpais.com.uy/mundo/primera-gran-derrota-dilma-rousseff.html> [25 de julio de 2018].
- El Periódico, "Guatemala aún vive enfrentada y los Acuerdos son una agenda pendiente, El Periódico, 30 de diciembre de 2016, en: <https://elperiodico.com.gt/nacion/2016/12/30/guatemala-aun-vive-enfrentada-y-losacuerdos-son-una-agenda-pendiente/> [18 de junio de 2018].
- El Salvador, "Carta de vicepresidente a Rousseff sacude a Brasil", El Salvador, 8 de diciembre de 2015, en: <https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/171837/carta-de-vicepresidente-a-rousseff-sacude-a-brasil/> [25 de julio de 2018].
- El Salvador, "Corte de Constitucionalidad frena antejuicio a Otto Pérez", El Salvador, 18 de junio de 2015, en: <https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/153799/corte-de-constitucionalidad-frena-antejuicio-a-otto-perez/> [20 de agosto de 2018].
- El Salvador "La lista de expresidentes de Guatemala procesados por corruptos", El Salvador, 13 de febrero de 2018, en: <https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/449628/la-larga-lista-de-expresidentes-de-guatemala-procesados-por-corruptos/> [2 de julio de 2018].
- El Tiempo Latino, "Otto Pérez Molina cumple un año de Gobierno", El Tiempo Latino,

15 de enero de 2013, en: <http://eltiempolatino.com/news/2013/jan/15/otto-perez-molina-cumple-un-ano-de-gobierno/> [28 de julio de 2018].

- Elías, J., "Árbenz, una polémica sin fin", El País, 2 de Julio de 2014, en: https://elpais.com/internacional/2014/07/02/actualidad/1404316341_759707.html [23 de Mayo de 2018].
- Elías, J., "El expresidente de Guatemala Otto Pérez será juzgado por corrupción", El País, 28 de octubre de 2017, en: https://elpais.com/internacional/2017/10/28/america/1509150756_258596.html [8 de julio de 2018]
- Elías, J., "La anulación de la condena deja a Ríos Montt en un limbo legal", El País, 21 de mayo de 2013, en: https://elpais.com/internacional/2013/05/21/actualidad/1369165087_281861.html [6 de julio de 2018].
- Elías, J., "La comisión anticorrupción de la ONU, el azote a la conciencia moral de Guatemala", El País, 29 de agosto de 2017, en: https://elpais.com/internacional/2017/08/28/america/1503939842_993814.html [8 de julio de 2018].
- Elías, J., "La trama mafiosa que indignó a un pueblo y derribó un Gobierno", El País, 4 de septiembre de 2015, en: https://elpais.com/internacional/2015/09/04/actualidad/1441333144_960360.html [8 de julio de 2018].
- Elías, J., "Muere impune el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt", El País, 2 de abril de 2018, en: https://elpais.com/internacional/2018/04/01/america/1522604625_021678.html [6 de julio de 2018].
- Elías, J., "Roxana Baldetti renuncia a la vicepresidencia de Guatemala", El País, 9 de mayo de 2015, en: https://elpais.com/internacional/2015/05/09/actualidad/1431136418_431898.html [3 de agosto de 2018].
- Embajada del Brasil en Buenos Aires, "Biografía de la Señora Presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Vana Rousseff", Embajada del Brasil en Buenos Aires (2016), en: <https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/BuenosAires/es-es/file/BiografiaPresidenta.pdf> [25 de julio de 2018].

- Emol, "Cronología: Los hitos de la operación "Lava Jato" que complican a Lula da Silva", Emol, 4 de abril de 2018, en: <http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/04/04/901178/Cronologia-La-operacion-que-tiene-a-Lula-da-Silva-al-borde-de-la-carcel.html> [20 de abril de 2018]
- Europa press, "Dilma Rousseff asegura que Brasil vive un "golpe de Estado parlamentario y judicial", Europapress, 12 de abril de 2018, en: <http://www.europapress.es/nacional/noticia-dilma-rousseff-asegura-brasil-vive-golpe-estado-parlamentario-judicial-20180412114331.html> [17 de mayo de 2018].
- Europa Press, "Rousseff, la guerrillera que se transformó en una tecnócrata al servicio de Brasil", Europa Press, 3 de julio de 2015, en: <http://www.europapress.es/internacional/noticia-rousseff-guerrillera-transformo-tecnocrata-servicio-brasil-20141004115117.html> [9 de julio de 2018].
- Excelsior, "Partido abandona coalición con gobierno de Rousseff", Excelsior, 16 de marzo de 2016, en: <https://www.excelsior.com.mx/global/2016/03/16/1081356> [13 de agosto de 2018].
- Fernández y Henrich, M. y. (2016), "¿Cambio o continuidad en la política brasileña? Las elecciones presidencial y parlamentaria de 2014", en : M. A. Tagina, *Elecciones y cambio de élites en América Latina, 2014 y 2015*, Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 177-200.
- Fleury, S. (2012), "Las reformas pendientes: desafíos para la gobernabilidad en Brasil", *CIDOB d'afers internacionals*, n.º 97-98, pp. 33-54.
- Flôres, R. G. (2012), "Perspectivas para el primer mandato de Dilma Rousseff: un argumento básicamente", *CIDOB d'afers internacionals*, n.º 97-98, pp. 19-31.
- Fortin, J. (2010), "Transfuguismo Parlamentario en Guatemala: Un caso de altos costos de asociación, monopolio partidario y bajos costos de transacción" *América Latina Hoy* , pp. 141-166.
- Freedom House (a), Freedom in the world 2018, en: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/brazil> [17 de agosto de 2018].
- Freedom House (b), Freedom in the world 2018, en: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/guatemala> [18 de agosto de 2018].

- Fuentes, F., "Lula busca frenar juicio político a Dilma como ministro "informal", La Tercera, 22 de marzo de 2016, en: <http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/03/678-673320-9-lula-busca-frenar-juiciopolitico-a-dilma-como-ministro-informal.shtml> [25 de julio de 2018].
- Galicia, N., Errores y corrupción hacen caer a Otto Pérez Molina, Prensa Libre, 2 de septiembre de 2016, en: <http://www.prensalibre.com/hemeroteca/los-desaciertos-en-el-ultimo-ao-de-otto-perez-molina> [4 de julio de 2018].
- Galicia, N., "1993: Jorge Serrano Elías rompe orden constitucional", Prensa Libre, 24 de mayo de 2018, en: <https://www.prensalibre.com/hemeroteca/1993-jorge-serrano-elias-rompe-orden-constitucional> [14 de agosto de 2018].
- Gerring, J. (2015) "¿Qué es un estudio de caso y para qué sirve?", en R. C. Fuentes, *Política Comparada sobre América Latina: Teorías, Métodos y Tópicos*, Santiago : Universidad Diego Portales, pp. 79-116.
- Gerring, J., Bond, P., T.Barndt, W., & Moreno, C. (2005), "Democracy and Economic Growth: a historical perspective", *World Politics* 57, pp. 323- 364.
- Gestión, "Estos son los factores que están detrás del juicio político a Dilma Rouseff" Gestión, 25 de agosto de 2016, en: <https://gestion.pe/peru/politica/son-factores-detras-juicio-politico-dilma-rousseff-113615> [26 de mayo de 2018].
- Goizueta, V., "Los logros sociales de la era Lula", ABC, 1 de octubre de 2010, en: <https://www.abc.es/20101001/internacional/logros-sociales-lula-201010011747.html> [20 de julio de 2018].
- Goldstein, A. (2016), "La tormenta perfecta: crisis e impeachment en el segundo mandato de Dilma Rouseff", *Análisis político n°88*, pp. 90 - 104.
- Guatemala Human Rights Commission. (s.f). *ghrc-usa*, en: http://www.ghrc-usa.org/Resources/2011/War_Crimes/Press_Release.htm [27 de julio de 2018].
- Gunson, P., "Efraín Ríos Montt, el general adicto a la Biblia y la ametralladora", El diario, 2 de abril de 2018, en: https://www.eldiario.es/theguardian/Efrain-Rios-Montt-Biblia-ametralladora_0_756624986.html [23 de julio de 2018].
- Hemeroteca PL, "Gloria y caída de un presidente", Prensa Libre, 22 de mayo de 2016, en: <https://www.prensalibre.com/hemeroteca/gloria-y-caida-de-un-presidente> [9 de julio de 2018].

- HispanTv, "Continúan manifestaciones en Guatemala contra la corrupción", HispanTv, 14 de junio de 2015, en: <https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/35145/continuan-manifestaciones-en-guatemala-contra-la-corrupcion> [3 de agosto de 2018].
- Hochstetler, K. (2008), "Repensando el Presidencialismo: Desafíos y Caídas Presidenciales en el Cono Sur", *América Latina Hoy* 49, pp. 51-72.
- Hochstetler, K., & Edwards, M. E. (2009), "Failed Presidencies: Identifying and Explaining a South American Anomaly", *Journal of Politics in Latin America* 1 (2) , pp. 31-57.
- Hola Chamy, C., "¿Qué países de América Latina son los más y los menos democráticos?", BBC news, 20 de enero de 2015, en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150119_democracia_indice_economist_latinoamerica_ch [24 de junio de 2018].
- Infobae, "Desde 1991, 17 presidentes perdieron su cargo en América Latina", Infobae, 22 de junio de 2012, en: <https://www.infobae.com/2012/06/22/1052969-desde-1991-17-presidentes-perdieron-su-cargo-america-latina/> [15 de julio de 2018].
- Infobae (a), "El nuevo equipo económico de Brasil anunció medidas de ajuste para bajar gasto público e inflación", Infobae, 27 de noviembre de 2014, en: <https://www.infobae.com/2014/11/27/1611579-el-nuevo-equipo-economico-brasil-anuncio-medidas-ajuste-bajar-gasto-publico-e-inflacion/> [24 de marzo de 2018].
- Infobae (b), "La coalición de Dilma Rousseff tendrá mayoría absoluta en el Parlamento de Brasil", Infobae, 6 de octubre de 2014, en: <https://www.infobae.com/2014/10/06/1599838-la-coalicion-dilma-rousseff-tendra-mayoria-absoluta-el-parlamento-brasil/> [25 de julio de 2018].
- Infobae, "Escándalo de corrupción en Guatemala: renunció el "superministro" López Bonilla", Infobae, 21 de mayo de 2015, en: <https://www.infobae.com/2015/05/21/1730202-escandalo-corrupcion-guatemala-renuncio-el-superministro-lopez-bonilla/> [3 de agosto de 2018].
- Infobae, "Qué es el PMDB, el partido que tiene en sus manos a Dilma Rousseff", Infobae, 17 de octubre de 2015, en: <https://www.infobae.com/2015/10/18/1763024-que-es-el-pmdb-el-partido-que-tiene-sus-manos-dilma-rousseff/> [15 de agosto de 2018].

- ireness, "Guatemala: el posconflicto imperfecto y las nuevas amenazas para la paz" ireness, 1 de noviembre de 2007, en: http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-774_es.html [12 de julio de 2018].
- Jaramillo, A. (2018), Las Dictaduras en el Cono Sur: Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, en <http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar> [4 de mayo de 2018].
- Juárez, E., "Antejuicios sin avances por circunstancias políticas", República, 23 de junio de 2015, en: <https://republica.gt/2015/06/23/antejuicios-sin-avances-por-circunstancias-politicas/> [20 de agosto de 2018].
- Kim, Y. H., & Bahry, D. (2008), "Interrupted Presidencies in Third Wave Democracies", *Journal of Politics*, pp. 807-822.
- Kinzer, S., "Efraín Ríos Montt, dictador guatemalteco, murió a los 91 años", The New York Times, 1 de abril de 2018, en: <https://www.nytimes.com/es/2018/04/01/efrain-rios-montt-obituario/> [6 de julio de 2018].
- La Información, "Pérez Molina gana la Presidencia de Guatemala con el 53,74 por ciento de los votos", La Información, 1 de marzo de 2016, en: https://www.lainformacion.com/politica/votacion/perez-molina-gana-la-presidencia-de-guatemala-con-el-53-74-por-ciento-de-los-votos_WwaJ4KzcVoeA4y66xugxG6/ [4 de julio de 2018].
- La Nación, " Remataron por US\$600 mil dólares el triplex por el que Lula terminó preso", La Nación, 16 de mayo de 2018, en: <https://www.lanacion.com.ar/2135343-remataron-por-us600-mil-dolares-el-triplex-por-el-que-lula-termino-preso> [25 de mayo de 2018].
- La Razón, "Guatemala elige la ‘mano dura’ del militar retirado Otto Pérez", La Razón, 7 de noviembre de 2011, en: https://la-razon.com/mundo/Guatemala-militar-retirado-Otto-Perez_0_1500449944.html [23 de junio de 2018].
- La red 21, "Cardoso, el mejor presidente de la historia de Brasil, según sondeo", La red 21, 20 de diciembre de 2002, en: <http://www.lr21.com.uy/mundo/101656-cardoso-el-mejor-presidente-de-la-historia-de-brasil-segun-sondeo> [20 de julio de 2018].
- La Voz de Galicia, "Dilma Rousseff pierde otros dos socios de Gobierno", La Voz de Galicia, 14 de abril de 2016, en: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2016/04/14/dilma-rousseff-pierde-dos-socios-gobierno/0003_201604G14P24996.htm [13 de agosto de 2018].
- Labrador, G., "El presidente Otto Pérez Molina, acorralado por la CICIG", elfaro, 20 de abril de 2015, en: <https://www.elfaro.net/es/201504/internacionales/16876/El->

presidente-Otto-P%C3%A9rez-Molina-acorralado-por-la-CICIG.html [20 de agosto de 2018].

- Landman, T. (2011). *Política Comparada. Una introducción a su objeto y métodos de investigación*. Madrid: Alianza Editorial.
- Lemus, S., "URNG, El partido de la Insurgencia", Prensa Libre, 15 de agosto de 2015, en: <http://www.prensalibre.com/hemeroteca/urng-el-partido-de-la-insurgencia> [3 de junio de 2018].
- Linz, J., & Valenzuela, A. (1997). *La crisis del Presidencialismo*. Madrid: Alianza.
- Lissardy, G., "Brasil: protestas contra Dilma Rousseff reúnen a cientos de miles de manifestantes", BBC Mundo, 15 de marzo de 2015, en: http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150315_ultnot_brasil_protestas_ao [1 de mayo de 2018].
- Lissardy, G., "Impeachment": por qué condenaron a Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil (y no fue corrupción)", BBC Mundo, 12 de mayo de 2016, en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160411_brasil_impeachment_acusacion_contra_rousseff_gl [12 de mayo de 2018].
- Llanos, M., & Marsteintredet, L. (2010). *Presidential Breakdowns in Latin America: Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies*. Nueva York: Palgrave MacMillan.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartyism, and Democracy. *Comparative Political Studies* 26 (2), pp. 198-228.
- Mainwaring, S. (1996), "Brasil. Partidos Débiles. Democracia Indolente", en S. Mainwaring, *La Construcción de Instituciones Democráticas: Sistema de Partidos en América Latina*, Santiago: CIEPLAN, pp. 289- 325.
- Mainwaring, S., & Pérez-Liñán, A. (2005). "Latin American Democratization since 1978: Democratic Transitions, breakdowns, and Erosions", en F. Hagopian, & S. Mainwaring, *The Third Wave of Democratization in Latin America. Advances and Setbacks*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 14-59.
- Mainwaring, S., & Shugart, S. (2002). *Presidencialismo y democracia en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.

- Malkin, E., "Guatemala arresta a un expresidente y a su exministro de Finanzas por un caso de corrupción", *The New York Times*, 13 de febrero de 2018, en: <https://www.nytimes.com/es/2018/02/13/guatemala-alvaro-colom-arresto-fuentes-knight/> [2 de junio de 2018].
- Marsteintredet L., L. M. (2013). Paraguay and the Politics of Impeachment . *Journal of Democracy* 24 (4), pp. 110-123.
- Marsteintredet, L. (2009). *Presidential Interruptions in Latin America: Concepts, Causes, and Outcomes*, Oslo : University of Bergen.
- Marsteintredet, L. (2014), "Explaining Variation of Executive Instability in Presidential Regimes: presidential interruptions in Latin America", *International Political Science Review* 35, pp. 173-194.
- Martínez, C. (2017a), "Presidential survival in South America: Rethinking the role of democracy", *Internacional Political Science Review*, pp. 1-16.
- Martínez, C. A. (2017b), "Sobreviviendo" la presidencia argentina 1983-2001", *Estudios Internacionales* 186, pp. 91-118.
- Martínez, M. d. (s.f), "Sistema de partidos en Guatemala (1985-2011)", Instituto de Iberoamérica, en: http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/roson_guatemala.pdf [6 de agosto de 2018].
- Martínez, P. C. (2006) "El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica", *Pensamiento & Gestión* n° 20, pp. 165-193.
- Melo, C. R., & Santos, M. L. (2013), "Y la nave va: Brasil bajo Dilma Rousseff", *Revista de Ciencia Política* , pp. 55-81.
- Ministerio Público, "Caso "la cooperacha": exfuncionarios obsequiaron con lujo excesivo a expareja presidencial", Ministerio Público, 11 de junio de 2016, en: <https://www.mp.gob.gt/noticias/2016/06/11/caso-la-cooperacha-exfuncionarios-obsequiaron-con-lujo-excesivo-a-expareja-presidencial/> [8 de julio de 2018].
- Mizrahi, D., "Los tres países que retrocedieron en el índice de democracia más respetado del mundo", *Infobae*, 8 de julio de 2018, en: <https://www.infobae.com/america/mundo/2018/07/08/los-tres-paises-que-retrocedieron-en-el-indice-de-democracia-mas-respetado-del-mundo/> [26 de julio de 2018].

- Mustapic, A. M. (2005) "Inestabilidad sin colapso. La renuncia de los presidentes: Argentina en el año 2001", *Desarrollo Económico* 45, pp. 263-280.
- Mustapic, A. M. (2006) "América Latina: las renuncias presidenciales y el papel del Congreso", *Política. Revista de Ciencia Política* 46, pp. 55-70.
- Mustapic, A. M. (2010) "Presidentialism and Early Exit: The Role of Congress. En M. L. (eds)", en: *Presidential Breakdowns in Latin America: Cause and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies*, Nueva York : Palgrave Mc Millan, pp. 17-32.
- Negretto, G. (2006), "Minority Presidents and Democratic Performance in Latin America", *Latin American Politics and Society* 48 (3), pp. 63-92.
- NODAL. (20 de abril de 2015). Aspirante oficialista denuncia presiones y renuncia a su candidatura. NODAL. Recuperado el 3 de agosto de 2018, de <https://www.nodal.am/2015/04/tras-denunciar-presiones-aspirante-oficialista-a-la-presidencia-renuncia-a-su-candidatura/>
- O Globo., "Manifestantes fazem maior protesto nacional contra o governo Dilma", O Globo, 13 de marzo de 2016, en: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/manifestacoes-contr-governo-dilma-ocorrem-pelo-pais.html> [16 de mayo de 2018].
- Olavarría, T. (2017), "El Impeachment de Dilma Rousseff", *9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP)*. Montevideo: ALACIP.
- Ollier, M. M. (2008) "La institucionalización democrática en el callejón", *América Latina Hoy* n°49, pp. 73-103.
- Orozco, A., "Integran Pesquisadora pero sin fecha para conocer antejudio", Prensa Libre, 27 de agosto de 2015, en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-analizara-pedido-de-antejuicio-contr-presidente-guatemalteco> [5 de agosto de 2018].
- Ortiz de Zárate, R., "Dilma Rousseff", CIDOB, 29 de diciembre de 2016a, en: de https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/brasil/dilma_rousseff [25 de mayo de 2018].

- Ortiz de Zárate, R., "Fernando Collor de Mello", CIDOB, 17 de febrero de 2016b, en: https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/brasil/fernando_collor_de_mello#2 [3 de junio de 2018].
- Ortiz de Zárate, R., "Otto Pérez Molina", CIDOB, 10 de febrero de 2016c, en: https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/guatemala/otto_perez_molina [14 de julio de 2018].
- Paredes, A. A., & Sevilla, J. E., "Actualidad de la crisis política en Brasil", Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 4 de abril de 2016, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/040416_Dilma_Lula.pdf [29 de mayo de 2018].
- Parlamento Europeo, "A diez años de los Acuerdos de Paz en Guatemala: Balance y perspectivas de la Cooperación Internacional", Parlamento Europeo, 2 y 3 de mayo de 2007, en: <http://www.albedrio.org/htm/documentos/sistesisConclusiones10anosAcuerdosPaz.pdf> [24 de julio de 2018].
- Pascual, M., & González, R. (2006), "Brasil: La reelección de Luis Lula da Silva", *Democracia en las Américas*, pp. 2- 30.
- Pedersen, D. B. (2013). *process-tracing methods: foundations and guidelines*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Pegoraro, M., "Ponerle nombre a la bestia: la difícil tarea de clasificar regímenes políticos", 30 de marzo de 2014, en: <http://www.condistintosacentos.com/ponerle-nombre-a-la-bestia-la-dificil-tarea-de-clasificar-regimenes-politicos/> [15 de agosto de 2018].
- Pérez -Liñan, A. (2014). A Two- Level Theory of Presidential Instability. *Latin American Politics and Society* 56, pp. 34-54.
- Pérez, S., "Pérez Molina niega papel en genocidio de Guatemala", La Opinión, 5 de abril de 2013, en: <https://laopinion.com/2013/04/05/perez-molina-niega-papel-en-genocidio-de-guatemala/> [7 de julio de 2018].
- Pérez-Liñán, A. (2007). *Presidential Impeachment an the New Political Instability in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Pérez-Liñán, A. (2008), "Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política: perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales", *América Latina Hoy*, pp. 105-126.
- Perfil "Dilma se aleja de Lula en su segunda presidencia", Perfil, 3 de enero de 2015, en: <http://www.perfil.com/noticias/internacional/dilma-se-aleja-de-lula-en-su-segunda-presidencia-0102-0040.phtml> [25 de julio de 2018].
- Pocasangre, H., "Comienza cuarto periodo de Cicig en Guatemala", Prensa Libre, 4 de septiembre de 2015, en: <http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/desde-hoy-inicia-extension-de-plazo-de-la-cicig-por-dos-aos-mas> [8 de julio de 2018].
- Pocasangre, H., "Los presidentes que marcaron la historia democrática", Prensa Libre, 2 de julio de 2018, en: <http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/los-presidentes-que-marcaron-la-historia-democratica> [2 de julio de 2018].
- Prensa Libre, "Manifestaciones a favor y en contra de Rousseff en Brasil", Prensa Libre, 31 de julio de 2016, en: <http://www.prensalibre.com/internacional/manifestaciones-a-favor-y-en-contra-de-rousseff-en-brasil-preolimpico> [18 de mayo de 2018].
- Prensa Libre, "Otto Pérez Molina en la historia de Guatemala", Prensa Libre, 1 de septiembre de 2015, en: <http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/otto-perez-molina-en-la-historia-de-guatemala> [3 de julio de 2018].
- Prensa Libre, " Jacobo Árbenz enfrenta a la United Fruit Company en 1951", Prensa Libre, 10 de Noviembre de 2016, en: <http://www.prensalibre.com/hemeroteca/jacobo-arbenz-enfrenta-a-la-united-fruit-company-en-1951>[23 de Mayo de 2018].
- Publinews, "Otto Pérez cumple su primer año de Gobierno", Publinews. (s.f), en: <https://www.publinews.gt/gt/guatemala/2013/01/13/otto-perez-cumple-primer-ano-gobierno.html> [27 de julio de 2018].
- Ramos, J., "CSJ da trámite al antejuicio contra Otto Pérez Molina", Prensa Libre, 25 de agosto de 2015, en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/csj-envia-antejuicio-de-otto-perez-molina> [23 de agosto de 2018].
- Ramos, J., "Embargan Q11 millones a Droguería Pisa", Prensa Libre, 31 de enero de 2017, en: <http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/embargan-q11-millones-a-drogueria-pisa> [8 de julio de 2018].

- Ramos, J., Valdez, S., & Vásquez, B., "Testigo implica a Otto Pérez Molina en juicio por genocidio", *Prensa Libre*, 5 de abril de 2013, en: https://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Implican-Perez-Molina-masacres-indigenas_0_895110712.html [27 de julio de 2018].
- Ramos, L. (2012), "Método comparado: precisiones y características", *Revista Ciencia Política*, n° 16, en: http://www.revinciapolitica.com.ar/num16art4.php#_edn2 [25 de junio de 2018].
- Referi, "Partido aliado de Dilma abandona el gobierno", *Referi*, 16 de agosto de 2011, en: <https://www.referi.uy/partido-aliado-dilma-abandona-el-gobierno-n207504> [15 de agosto de 2018].
- Relea, F., "Mano dura, cabeza y corazón", *El País*, 8 de septiembre de 2007, en: https://elpais.com/diario/2007/09/08/internacional/1189202420_850215.html [11 de julio de 2018]
- República, "¿Cuál es la ideología de los partidos? ¿cuáles son sus características?", *República*, 28 de mayo de 2015, en: <https://republica.gt/2015/05/28/cual-es-la-ideologia-de-los-partidos-cuales-son-sus-caracteristicas/> [15 de julio de 2018].
- República, "El Senado de Brasil aparta del poder a Dilma Rousseff por 55 votos a favor frente a 22 en contra", *República*, 12 de mayo de 2016, en: <https://www.republica.com/2016/05/12/el-senado-de-brasil-aparta-de-la-presidencia-a-dilma-rousseff/#> [6 de mayo de 2018].
- Rodríguez, L., "Presidente Jorge Serrano Elías"(2016), *Aprende Guatemala*, 7 de noviembre de 2016, en: <https://aprende.guatemala.com/historia/personajes/presidente-jorge-serrano-elias/> [18 de agosto de 2018].
- Rodríguez, M. (2015), "El día que Baldizón salvó a Pérez Molina", *nómada*, en: <https://nomada.gt/pais/el-dia-que-baldizon-salvo-a-perez-molina/> [24 de agosto de 2018].
- Rodríguez, O., "Guatemala, un primer paso contra la impunidad", *eldiario.es.*, 14 de mayo de 2013, en: https://www.eldiario.es/internacional/Guatemala-primer-paso-impunidad_0_132287569.html [6 de julio de 2018].
- Romero, S., "La policía interroga a Luiz Inácio Lula da Silva sobre caso de corrupción", *The New York Times* es, 4 de marzo de 2016, en: <https://www.nytimes.com/es/2016/03/04/la-policia-detiene-a-luiz-inacio-lula-da-silva-en-brasil-para-declarar-sobre-caso-de-corrupcion/> [4 de mayo de 2018].

- Salvadó, L. R, Guatemala: la lucha por el Estado de derecho, FLACSO, (s.f), en: <http://www.flacso.edu.gt/dialogo/?tag=luis-raul-salvado-c&print=pdf-search> [28 de julio de 2018].
- Sánchez, G., "Baudilio Hichos renuncia de Comisión Pesquisidora", Prensa Libre, 15 de junio de 2015, en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/hichos-renuncia-de-la-comision-pesquisidora> [23 de agosto de 2018].
- Sánchez, G., "Pesquisidora escucha a Amilcar Pop", Prensa Libre, 16 de junio de 2015, en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/pesquisidora-escucha-a-amilcar-pop> [3 de agosto de 2018].
- Sartori, G. (1994). Comparación y Método Comparativo, en: G. S. Molino, *La comparación en las ciencias sociales*, Madrid: Alianza, pp. 29-49.
- Serena Garralda, J. M. (2011), "La economía de Brasil desde los 90. Una historia de éxitos y retos pendientes", *Boletín de estudios económicos* 66 (204), pp. 486-510.
- Serrafiero, M. D. (1996), "El "Impeachment" en América Latina: Argentina, Brasil y Venezuela" , *Revista de Estudios Políticos* , pp. 137-162.
- Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, "Guatemala: Análisis de Situación del País", Naciones Unidas, diciembre 2014, en: <http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-de-Situacion-Guatemala.compressed.pdf> [15 de agosto de 2018].
- Solano, L. (2012), "Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado", *El Observador*, n°34, 35, pp. 5-54.
- Solís, D., & Oliva, B., "Guatemala: el derrotero de una trama de corrupción", Resumen Latinoamericano, 11 de septiembre de 2015, en: <http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/09/11/guatemala-el-derrotero-de-una-trama-de-corrupcion/> [5 de agosto de 2018].
- Somer-Topcu y Williams, Z. y. (2008), "Survival of the fittest? Cabinet duration in Postcommunist Europe", *Comparative Politics* 40, pp. 313-329.
- Soriano, S. (2004) "Guatemala Operación Éxito", *Archipiélago. Revista Cultural de nuestra América*, pp. 17-18.
- Soy502, "Estos son los 9 presidentes de la era democrática de Guatemala", Soy 502. (s.f), en: <http://www.soy502.com/articulo/recuerda-nueve-presidentes-era-democratica-guatemala> [2 de julio de 2018].

- Tapia, M. J. (2016) " El factor Brasil", *Qué Pasa*, en: <http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/08/1-17414-9-el-factor-brasil.shtml/> [6 de agosto de 2018].
- Taub, A., "Análisis: ¿La destitución de Rousseff fue un golpe de Estado?", *The New York Time*, 1 de septiembre de 2016, en: <https://www.nytimes.com/es/2016/09/01/analisis-la-destitucion-de-rousseff-fue-un-golpe-de-estado/> [20 de mayo de 2018].
- Tejero, L., "Dilma, primera presidenta de Brasil: 'Sabré honrar el legado de Lula'", *El Mundo.es*, 1 de noviembre de 2010, en: <http://www.elmundo.es/america/2010/10/31/brasil/1288499374.html> [21 de julio de 2018].
- TeleSur, "Guatemala: miles se suman a paro nacional contra Pérez Molina", *TeleSur*. 27 de agosto de 2015, en: <https://www.telesurtv.net/news/Guatemala-miles-se-suman-a-paro-nacional-contra-Perez-Molina-20150827-0031.html> [3 de agosto de 2018].
- The Economist Intelligence Unit, "The Economist Intelligence Unit's Democracy Index." (s.f), en: <https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/> [26 de junio de 2018].
- Torres, E. (2015). Guatemala: la corrupción como crisis de gobierno. *Nueva Sociedad. Democracia y Política en América Latina*, en: <http://nuso.org/articulo/guatemala-la-corrupcion-como-crisis-de-gobierno/> [8 de julio de 2018]
- Torres-Rivas, E. (2006), "Guatemala: desarrollo, democracia y los acuerdos de paz", *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales* , pp. 11-48.
- V.M.Herman, M. T. (1971), "Party system and government stability", *American Political Science Review* 65, pp. 28-37.
- Valenzuela, A. (1996), "América Latina: el presidencialismo en crisis", *Pensamiento Constitucional Año III n°3*, pp. 15-28.
- Valenzuela, A. (2004), "Latin American Presidencies Interrupted", *Journal of Democracy* 15 , pp. 6-19.
- Valenzuela, A. (2008), "Presidencias Latinoamericanas Interrumpidas", *América Latina Hoy*, 49 , pp. 15-30.

- Van Dyck, B. (2016) "¿Qué tan grave es la crisis brasileña?", *Foreign Affairs Latinoamérica Vol. 16, núm. 3*, pp. 9-20.
- Velásquez, L. G., "Es la hora de articular movimientos: #RenunciaYa", El Salmón, 8 de mayo de 2015, en: <http://elsalmon.org/es-la-hora-de-articular-movimientos-renunciaya/> [14 de agosto de 2018].
- Villatoro, A. d. (2008), "Guatemala: Estado y contrainsurgencia", *Estudios Latinoamericanos. Nueva época n° 21*, pp. 127-146.
- Vireia, S., "Coalición y gobernabilidad en el gobierno de Rousseff", *Estudios de Política Exterior*, 17 de febrero de 2016, en: <https://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/coalicion-y-gobernabilidad-en-el-gobierno-de-rousseff/> [24 de julio de 2018].
- Voz de América, " Los socialistas abandonan a Rousseff", *Voz de América*, 19 de septiembre de 2013, en: <https://www.voanoticias.com/a/brasil-retiro-rousseff/1752686.html> [15 de agosto de 2018].
- Warwick, P. (1994). *Government Survival in Parliamentary Democracies*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Wise, C., & Roett, R. (2003). *Post-Stabilization Politics in LATIN aMERICA: Competitio, Transition, Collapse*. Washington: Brookings Institution.
- WOLA, "CICIG: Texto del acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala (CICIG)", *WOLA (The Washington Office on Latin America)*, 19 de noviembre de 2006, en: <https://www.wola.org/es/analisis/cicig-texto-del-acuerdo-entre-la-organizacion-de-naciones-unidas-y-el-gobierno-de-guatemala-relativo-al-establecimiento-de-una-comision-internacional-contra-la-impunidad-en-guatemala-cicig/> [28 de julio de 2018].